

**ESTRATEGIAS FAMILIARES
DE TRABAJO Y REDUCCIÓN
DE LA POBREZA EN BOLIVIA**

**Silvia Escóbar de Pabón
Germán Guaygua**

Escóbar de Pabón, Silvia

Estrategias familiares de trabajo y reducción de la pobreza en Bolivia / Silvia Escóbar de Pabón y Germán Guaygua. - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2008. 144 p. ; 23x16 cm. - (CLACSO-CROP)

ISBN 978-987-1543-02-1

1. Sociología. 2. Pobreza. I. Guaygua, Germán. II. Título
CDD 301

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Estrategias de reducción de la pobreza / Trabajo / Familia / Políticas públicas / EBRP Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza / Empleo / Condiciones laborales / Condiciones de vida / Política social / Bolivia

La Colección CLACSO-CROP tiene como objetivo principal difundir investigaciones originales y de alta calidad sobre la temática de la pobreza. La colección incluye los resultados de las actividades que se realizan en el marco del Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza en América Latina y el Caribe (becas, seminarios internacionales y otros proyectos especiales), así como investigaciones relacionadas con esta problemática que realizan miembros de la red CLACSO-CROP y son aprobadas por evaluaciones académicas externas.



Secretario Ejecutivo

Emir Sader

Comité Directivo

Miembros Titulares

Gustavo Verduzco Igartúa
Centro de Estudios Sociológicos
El Colegio de México
México

José Vicente Tavares
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Federal de Rio Grande do Sul
Brasil

Julio César Gambina
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Argentina

Marco A. Gandássegui, h.
Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo
Arosemena"
Panamá

Margarita López Maya
Centro de Estudios del Desarrollo
Universidad Central de Venezuela
Venezuela

Marielle Palau
BASE Investigaciones Sociales
Paraguay

Víctor Vich
Instituto de Estudios Peruanos
Perú

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875, piso 5°
C1023AAB, Buenos Aires, Argentina
Tel (54 11) 4811 6588 / 4814 2301
Fax (54 11) 4812 8459
<www.clacso.org>
<clacso-crop@clacso.edu.ar>



Director Científico

Tom Skauge

Comité Científico

Atilio A. Boron, Presidente, Argentina
Lucy Williams, Vicepresidente, Estados Unidos
Santosh Mehrotra, Vicepresidente, India
Abderrezak Benhabib, Argelia
Alicia Ziccardi, México
Juan Manuel Arbona, Bolivia
Layi Erinosh, Nigeria
Leif Jensen, Estados Unidos
Fatima Adamu, Nigeria
Karima Korayem, Egipto
Adebayo Olukoshi, Senegal
Murray Leibbrandt, Sudáfrica
Peter Saunders, Australia
Ragnhild Lund, Noruega
Blandine Destremau, Francia
Arjun Sengupta, India
Carlos Sojo, Costa Rica
Du Xiaoshan, China
Penina Mlama, Kenia

CROP

Comparative Research Programme on Poverty

Nygårdsgaten 5
N - 5020, Bergen, Noruega
Tel 47 55 58 97 39
Fax 47 55 58 97 45
<www.crop.org>
<crop@uib.no>

COLECCIÓN CLACSO-CROP

**ESTRATEGIAS FAMILIARES
DE TRABAJO Y REDUCCIÓN
DE LA POBREZA EN BOLIVIA**

**Silvia Escóbar de Pabón
Germán Guaygua**



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador Académico Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO



Colección CLACSO-CROP

Directores de la colección Alberto Cimadamore y Else Øyen

Coordinación Fabiana Werthein y Hans Offerdal

Asistente Santiago Kosiner

Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO

Coordinador Jorge Fraga

Equipo de edición

Ivana Brighenti - Mariana Enghel

Equipo de diseño

Miguel A. Santángelo - Marcelo Giardino - Mariano Valerio

Equipo de divulgación

Sebastián Amenta - Daniel Aranda - Carlos Ludueña

Arte de tapa Diseño de Miguel A. Santángelo

Revisión de pruebas Laura Kaganas

Impresión Gráficas y Servicios SRL

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 Piso 5º J | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail <clacso@clacso.edu.ar> | web <www.clacso.org>

Primera edición

Estrategias familiares de trabajo y reducción de la pobreza en Bolivia

(Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2008)

ISBN 978-987-1543-02-1

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723

Patrocinado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo  **Norad**

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Introducción		11
Capítulo I		
Conceptualizando las estrategias familiares de trabajo, la desigualdad social y la pobreza		15
Las unidades familiares u hogares		
Las estrategias familiares de trabajo		
Trabajo, ingresos y pobreza		
Estrategias de trabajo y línea de pobreza		
Desigualdad social y pobreza		
Políticas públicas y reducción de la pobreza		
Capítulo II		
El contexto socioeconómico y laboral: tendencias nacionales		35
Dinámica macroeconómica 1980-2000		
Dinámica laboral y social 1990-2000		

Capítulo III Estrategias familiares de trabajo e inserción laboral de los hogares	43
Ajuste del mercado de trabajo e inserción laboral de los hogares: una visión global	
Estructura social y características de los hogares	
Las estrategias familiares de trabajo	
Estrategias de trabajo e ingresos de los hogares	
Capítulo IV Estrategias familiares de trabajo y bienestar de los hogares	99
Desigualdad del ingreso	
Estrategias familiares de trabajo y línea de pobreza	
Capítulo V Políticas sociales y tendencias distributivas	113
EBRP: continuidad antes que ruptura	
Orientaciones distributivas de las políticas de reducción de la pobreza	
Privatización y despolitización del bien común: ¿hacia la reducción de la pobreza?	
La centralidad del ingreso laboral en el bienestar de las familias: una visión de los sujetos	
Capítulo VI Conclusiones e implicaciones para las políticas públicas	125
Bibliografía	131

INTRODUCCIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS EN AMÉRICA LATINA dan cuenta de una evidencia generalizada, consecuencia de los cambios en el estilo de desarrollo y en el patrón de acumulación que promueven las políticas neoliberales: un mayor deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, en particular de aquellos que pertenecen a los sectores medios y bajos de la estructura social. Entre los factores que explican esta situación, se encuentran aquellos vinculados con los cambios en los mercados de trabajo y, específicamente, la pérdida de calidad del empleo y el aumento creciente del desempleo abierto.

En efecto, si bien los medios de vida están sustentados por una multiplicidad de fuentes, como el trabajo remunerado, la producción para el mercado y para la subsistencia, el trabajo doméstico, las rentas y diversas formas de apoyo recíproco de redes de parientes y amigos, el trabajo y los ingresos que provienen de este juegan un papel crucial como recurso para la satisfacción de las necesidades esenciales. Un análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que, en los países de la región, entre el 70 y 80% de los ingresos de los hogares proviene del trabajo (CEPAL, 2000); incluso en aquellos donde el empleo asalariado en empresas grandes y medianas es escaso, el trabajo continúa siendo el principal activo de las familias pobres (González de la Rocha, 1996). Por lo tanto, el

trabajo como fuente regular de ingresos puede considerarse uno de los factores más importantes en la explicación de los cambios en el bienestar de los hogares.

Mucha atención se ha otorgado en los últimos años a cuánto, cómo y bajo qué circunstancias se incorporan al trabajo los nuevos componentes de los hogares, en particular las mujeres. Sin embargo, en términos comparativos, es muy poco lo que se conoce sobre los resultados de este mayor esfuerzo económico-laboral de las familias sobre sus condiciones de vida, considerando que los cambios en el mercado de trabajo se han expresado centralmente en un menor ritmo de generación de empleos, una mayor precariedad de las condiciones laborales, el aumento de la informalidad y el desempleo abierto.

El presente estudio se dirige, por una parte, a examinar los efectos de las políticas públicas sobre el empleo y las condiciones laborales, específicamente de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) como propuesta “alternativa” presentada por el gobierno en el año 2000 y aprobada para su ejecución en 2001; por otra, a indagar el papel que juegan el trabajo y las estrategias familiares de trabajo en las condiciones de vida de los hogares; por último, a explorar el aporte distributivo de las políticas sociales y su contribución para mitigar los saldos de desigualdad social que se originan en el ámbito de las relaciones de producción y, particularmente, del empleo. A partir de estas múltiples entradas, se pretende contribuir al debate sobre las políticas públicas y su relación con los factores que subyacen a la persistencia de la pobreza y al deterioro de las condiciones de vida de la población.

El estudio comprende a las ciudades de La Paz y El Alto, dos centros urbanos con características diferenciadas en sus rasgos económicos, sociales y culturales. Está basado en encuestas de hogares con referencia a estos como unidad de análisis. La información cuantitativa ha sido enriquecida para los fines explicativos y de comprensión integral de las estrategias identificadas, mediante entrevistas en profundidad en hogares seleccionados.

En el capítulo I se avanza en el desarrollo de los conceptos básicos y en un análisis del estado de la discusión sobre el tema; en el capítulo II se abordan los principales cambios en la economía y en los mercados laborales, considerando las principales tendencias en la región y en Bolivia. Los capítulos III y IV conforman el cuerpo central del estudio, y están referidos a las estrategias familiares de trabajo y sus resultados sobre la evolución de los ingresos laborales, la desigualdad distributiva y la pobreza. En el capítulo V, la discusión está centrada en las limitaciones y posibilidades distributivas de las políticas sociales y la EBRP, e incorpora una visión de los sujetos sobre el papel que juegan el trabajo y los ingresos laborales en sus condiciones de vida. Finalmente, en el

capítulo VI, se avanza en reflexiones sobre las implicaciones de la problemática analizada para un debate sobre la orientación de las políticas públicas y el bienestar de la población.

Las ciudades de La Paz y El Alto en el contexto urbano nacional

La Paz, ciudad capital administrativa de Bolivia, presentó históricamente el mayor crecimiento demográfico urbano, acelerado por crecientes flujos migratorios originados en su entorno rural altiplánico y en otros centros poblados y ciudades del país. Entre sus zonas o barrios más importantes para el asentamiento de su creciente población, en particular para los migrantes de origen aymara, tuvo a El Alto, una planicie llamada así por su ubicación sobre las laderas que encierran la cuenca u hoyada donde se despliega la ciudad. En 1989, año base del estudio, El Alto, con una población de 300 mil personas, se constituye legalmente en una ciudad con autonomía de gestión política y administrativa.

Ambas ciudades mantienen una fuerte interdependencia en el ámbito económico y laboral, siendo inimaginable una sin la otra, lo que hace que la división sea más formal que real. Hoy, La Paz crece a un ritmo inferior al promedio de las ciudades capitales. En cambio, El Alto presenta una de las expansiones demográficas más altas del conjunto urbano nacional, constituyéndose en el asiento principal de los nuevos flujos migratorios; en el año 2000, La Paz, con 784.567 habitantes y El Alto, con 617.134, han pasado a concentrar el 30% de la población y el 27% de la fuerza laboral urbana de Bolivia.

Dadas las características específicas de la base productiva y el mercado laboral en las dos ciudades, las tendencias que arroja el estudio para la ciudad de La Paz pueden estar asociadas con las que se presentan en Cochabamba y Santa Cruz, mientras que aquellas presentes en El Alto estarían expresando la situación en las otras seis ciudades capitales del país.

Capítulo I

CONCEPTUALIZANDO LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO, LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA POBREZA

ES EN EL HOGAR –en tanto ámbito social en el que se organizan los procesos de reproducción cotidiana y generacional– donde se responde al deterioro de las condiciones de bienestar, ya sea con mayores esfuerzos en actividades destinadas a satisfacer necesidades esenciales, con sacrificios en lo relativo al consumo, pero también con mayores esfuerzos en relación con el mercado. Dentro de esta multiplicidad de respuestas, más trabajo o una mayor intensidad de este han sido las más importantes, dependiendo de las características de los hogares y la estructura de oportunidades que se presentan con ellas. En efecto, los individuos no se enfrentan solos al mercado laboral ni deciden individualmente su participación en la actividad económica, sino que lo hacen atravesados por las necesidades, condiciones de oportunidad, y características y proyectos de vida de los grupos domésticos a los que pertenecen (García y Oliveira, 1998; Salvia, 1995).

En estos términos, los hogares pueden ser considerados un espejo de la estructura social que asimila las limitaciones que le impone el funcionamiento del mercado laboral, lo cual obliga a crear estrategias de trabajo como un aspecto crucial para mantener ciertos umbrales de bienestar y disminuir los riesgos de caer en la pobreza o pasar a una situación de indigencia.

Por lo tanto, la comprensión de los efectos de los cambios en el mercado de trabajo sobre la calidad de vida de los hogares requiere centrarse simultáneamente en sus características constitutivas, su capacidad para movilizar a sus miembros, pero también en la estructura de oportunidades o restricciones que se originan en el mercado para hogares socialmente diferenciados. Es decir que los cambios en los mercados de trabajo no afectan a todos los hogares de la misma manera, sino que tiene lugar un complejo proceso social en el cual los factores del hogar y del mercado interactúan como oportunidades y restricciones.

Con la noción de estrategias familiares de vida –y, dentro de estas, aquellas específicamente centradas en el trabajo–, se trata de avanzar en la comprensión de las relaciones entre las familias u hogares y la estructura social; esta última en un sentido restringido a partir de las relaciones de producción y, específicamente, de la inserción de los hogares en el mercado laboral. Este énfasis implica que se privilegiará en el análisis la relación familia-sociedad antes que las relaciones al interior de la familia.

LAS UNIDADES FAMILIARES U HOGARES

La familia, en su acepción más amplia, es un ámbito social, cultural e históricamente situado de interacción y organización de procesos de reproducción económica, cotidiana y generacional, además de un ámbito en el cual también se crean y recrean de manera particular relaciones sociales de intercambio, poder, autoridad, solidaridad y conflicto. Es, por lo tanto, un conjunto diferenciado de individuos, ya que está fundada en una división social del trabajo donde el género, la edad y el parentesco asignan funciones a sus miembros; en consecuencia, es a la vez fuente de diferenciación y de desigualdades sociales. En cuanto a su relación con la sociedad, el tipo de funciones que cumple la familia depende de su inserción particular en la estructura social, mediada por el ejercicio de roles específicos que ejerce cada uno de sus miembros (Lépure y Salvia, 2002).

Aquí se utilizan como intercambiables los términos familia y hogar, en razón de la definición estadística que proviene de las fuentes de información utilizadas (encuestas de hogares); en estas, el hogar se concibe fundamentalmente como una unidad de convivencia en la que se organiza una solidaridad económica primaria “conformada por una o más personas con o sin relación de parentesco que habitan una misma vivienda bajo el mismo régimen familiar y que dependen de un presupuesto en común para su alimentación” (INE, 1989). Aunque existen hogares sin familia, como los unipersonales y los que se conforman por afinidad, o situaciones en las cuales la familia es solamente un sub-

conjunto del hogar (los miembros emparentados entre sí), los aspectos fundamentales que esta definición contiene –como la convivencia y la vida en un régimen familiar común– hacen referencia a los principales elementos de la familia u hogar de residencia¹.

Se asume, por lo tanto, un concepto de hogar que se refiere a “una organización estructurada a partir de relaciones sociales entre individuos que comparten una misma residencia y organizan en común –en armonía o conflicto– su reproducción económica y social cotidiana” (Lépore y Salvia, 2002: 3). Bajo este concepto, lejos de la imagen de la familia como entidad armónica y cohesionada, se reconoce que las acciones –familiares o individuales– son producto de negociaciones conflictivas entre miembros vinculados por relaciones asimétricas de poder (González de la Rocha, 1986).

De este modo, en tanto noción construida socialmente –centrada en el grupo, el conflicto y la acción estratégica–, la familia u hogar como unidad básica de análisis supone su consideración en tres dimensiones fundamentales: la familia como categoría social y como estructura objetiva del mundo social; la familia en tanto “campo” social, es decir, como complejo interrelacionado de posiciones sociales que se diferencian en lo que respecta a factores económicos, físicos, materiales y simbólicos poseídos por los miembros y que constituyen el núcleo por el que se lucha (por conservar o transformar esas relaciones de fuerza) en el interior del grupo familiar; y la familia como “cuerpo”, esto es, como disposición a actuar como grupo, proporcionando una identidad a sus miembros (Bourdieu, 1997).

LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO

En un sentido amplio, las estrategias familiares de trabajo² constituyen el conjunto de comportamientos que, estando socialmente determinados (pertenencia de clase), se relacionan con la formación y mantenimiento de hogares en el seno de los cuales se pueda asegurar la reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar aquellas prácticas económicas indispensables para optimizar las condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y cada uno de sus miembros (Lépore y Salvia, 2002).

En la literatura sociodemográfica latinoamericana, sobre todo mexicana (García y Oliveira, 1998; Lomnitz, 1978; 1994), se ha argu-

1 Al señalar que se trata de la “familia de residencia” se busca una distinción de aquella que algunos autores llaman “familia de interacción”, definida como el grupo relacionado por vínculos de parentesco y obligaciones recíprocas, que reside en viviendas diversas y que incluye a varias familias de residencia (Wainerman y Geldstein, 1994).

2 Entendidas como una parte de las estrategias familiares de vida.

mentado con insistencia que los hogares tienden a ajustar sus estrategias de vida para hacer frente a fenómenos tales como el desempleo y la caída de los salarios y del ingreso familiar que afectan sus condiciones materiales de existencia. Aunque muchas de estas estrategias no son nuevas y los hogares las han adoptado a lo largo de toda la vida, tienden a diversificarse y a cobrar mayor importancia en momentos de transformaciones estructurales o de crisis económica. No se trata, sin embargo, como señalan estos autores, de arreglos que hacen a una cierta planificación del futuro inmediato, puesto que las estrategias familiares de trabajo no dependen de lo que se desea hacer, sino de lo que se puede hacer frente a las oportunidades o restricciones que se presentan en la sociedad, en particular en situaciones de crisis estructurales.

Siguiendo esta línea de argumentación, Lépore y Salvia (2002) señalan que existe una cierta coacción limitante por parte de la estructura macrosocial hacia los agentes colectivos que no pueden decidir sino sobre las acciones que las oportunidades sociales brindan, o sobre el conjunto de acciones que les quedan como únicas opciones de inclusión o menor exclusión. También Bourdieu (1997) plantea que la noción de estrategia no alude a una elección racional como cálculo de medios a fines, ni como completamente irracional; la estrategia, en este sentido, debe entenderse como un producto del “sentido práctico”, del conocimiento del juego y de las posibilidades de innovación que plantea una situación determinada.

Es decir que dados determinados factores macroeconómicos y sociales que condicionan las formas de inserción laboral, las estrategias remiten a un conjunto de prácticas por medio de las cuales los individuos, los grupos o las familias tienden de manera consciente o inconsciente a conservar o aumentar su patrimonio y, correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase (García y Oliveira, 1998; Bourdieu, 1997).

Por esta razón, los estudios que privilegian la relación familia-sociedad analizan la incidencia de los estilos de desarrollo sobre las estrategias familiares de trabajo y de vida. De acuerdo con Bourdieu, como los campos están atravesados por la estructura objetiva del espacio social en clases sociales, las estrategias familiares no solamente inciden diferencialmente en las condiciones de reproducción de los diferentes estratos y clases sociales según el estado de la lucha por la dominación social en una coyuntura histórica y sociedad determinadas, sino que pueden estar destinadas a mantener o mejorar la posición de familias o grupos en la estructura social (Bourdieu, 1997). A su vez, las estrategias o arreglos resultantes también llevan a reproducir o modificar las condiciones en que se desarrolla la dinámica económica y social (Bourdieu, 1997; Lépore y Salvia, 2002).

De lo que se trata es de enfatizar la relación que existe entre las estrategias familiares de trabajo, la estructura de clases y el estado de la relación entre estas, en una situación histórica particular. En este sentido, es relevante la perspectiva teórica de Bourdieu (1997) cuando señala que los criterios de diferenciación del espacio social y la posición que los pobres ocupan en este espacio y su peso relativo están ligados no sólo a los bienes de los que son carentes (no posesión de capital económico) y de las distinciones que les imponen los sectores dominantes, sino también a aquellos bienes y distinciones que los pobres construyen como diferenciación interna del campo social.

Con esto, se busca reafirmar la importancia de estudiar las estrategias de trabajo en su relación con el espacio social y ubicar el devenir de dichas estrategias en el desarrollo de este espacio. De hecho, las transformaciones económicas recientes, entre otros aspectos, han repercutido en forma selectiva sobre las familias más necesitadas, reforzando la heterogeneidad de funciones y arreglos económicos, normativos y culturales que estructuran las condiciones de reproducción de las relaciones familiares en los diferentes grupos sociales.

Una amplia evidencia a nivel nacional e internacional apunta a un proceso de cambio económico y social, resultado de la precariedad del trabajo que se ha difundido como el rasgo central del desarrollo del capitalismo en nuestros días. Entre sus principales manifestaciones, se destacan la reducción del trabajo asalariado protegido, la concentración de los nuevos empleos en el sector informal, el aumento del desempleo y nuevas condiciones laborales a las que se asocian bajos salarios, inestabilidad en el empleo, extensión de las jornadas laborales, intensificación del trabajo y menor cobertura de las prestaciones sociales. Todo esto transcurre al mismo tiempo que avanza la discriminación en las prácticas de contratación (por razones de género, edad o clase social), y la desigualdad salarial, generando un cuadro restrictivo para el mundo del trabajo en la actualidad (OIT, 2002; Arze, 2000; Escóbar de Pabón, 2001).

En un plano más específico, los estudios de impacto del nuevo escenario laboral en las estrategias familiares de trabajo en América Latina confirman que cuando los ingresos del hogar se reducen, más miembros del hogar concurren a la actividad económica. Esta mayor participación en la actividad económica lleva, con el tiempo, a un aumento del empleo asalariado precario en el empleo informal y en el trabajo familiar para el mercado, incluyendo el uso de trabajo no remunerado de mujeres y menores de edad. Por último, existen evidencias respecto a que miembros de los hogares que trabajan aspiran a trabajar más horas o buscan un segundo trabajo, aun cuando exista un aumento en el número de perceptores de ingreso de los hogares. Así, el uso inten-

sivo de la fuerza de trabajo disponible, el multiempleo entre quienes ya trabajan o la entrada creciente de mujeres, jóvenes y niños a la esfera del trabajo remunerado o de apoyo a emprendimientos familiares ya no constituyen la excepción sino la norma impuesta por la precariedad social y la pobreza que acarrearán las transformaciones en la economía y el empleo³.

En términos de los resultados de las estrategias de trabajo, se sostiene que los vínculos primarios sirven para mitigar las situaciones de vulnerabilidad, como lo han demostrado durante estas últimas décadas los estudios antropológicos en América Latina (Lomnitz, 1978; 1994). Lo que no se ha probado todavía es su utilidad para resolver problemas de desigualdad y las condiciones estructurales de inequidad y pobreza. En la literatura reciente, se le asigna a dichas estrategias el potencial para contrarrestar o reducir el deterioro en los niveles de bienestar causado por la recesión y las políticas de ajuste neoliberal (CEPAL, 1997). Bajo tales circunstancias, es pertinente indagar si en el nuevo contexto algunas de estas estrategias podrían llegar a representar una función clave como mecanismo amortiguador del deterioro de las condiciones de vida.

TRABAJO, INGRESOS Y POBREZA

En este apartado, se avanza en una conceptualización y definición de las categorías utilizadas para el análisis de los cambios en la inserción laboral de los hogares, la reconfiguración de las estrategias familiares de trabajo y sus resultados sobre el bienestar de los mismos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y TIPO DE INSERCIÓN LABORAL

La orientación que ha seguido la reestructuración productiva con el predominio de estrategias “defensivas” de adaptación de las empresas (abaratamiento de los costos laborales y baja inversión) se ha traducido en un patrón heterogéneo de crecimiento de la productividad, con una evolución positiva de un grupo reducido de empresas en diferentes sectores que contrasta con un pobre desempeño en la mayoría de las empresas medianas y pequeñas, dando lugar a un comportamiento negativo de esta variable a nivel agregado. Estas tendencias profundizan la heterogeneidad estructural mostrando una vez más que las políticas económicas y las reformas han favorecido a determinados agentes económicos, dando lugar a un proceso de concentración económica que

3 La familia se convierte así en un amortiguador de la crisis, no solamente a partir del trabajo remunerado sino también de un mayor trabajo doméstico, en particular de las mujeres y los menores, destinado a suplir bienes y servicios que antes adquirían en el mercado (González de la Rocha, 1996; Montali, 2000).

restringe el acceso a factores de producción complementarios al trabajo para amplios contingentes de productores urbanos y rurales.

La heterogeneidad estructural, entendida en un sentido amplio como la coexistencia de formas distintas de organización de la producción y del trabajo e interdependientes en su dinámica, se manifiesta actualmente en un cuadro agravado, donde la estrechez del mercado interno y la falta de competitividad externa han llevado a una mayor “pequeñez relativa” del sector moderno de la economía, es decir, de unidades económicas intensivas en capital y de alta productividad, consolidando una estructura productiva basada en el predominio de unidades económicas con menor dotación de capital por hombre ocupado y de mediana o baja productividad, dado su acceso limitado a factores de producción complementarios al trabajo. Más del 94% de los establecimientos económicos –con una tendencia al aumento en su participación en todos los rubros de actividad– tiene menos de 5 trabajadores ocupados, incluido el titular (INE, 1993).

La segmentación del mercado laboral se origina en la forma de estructuración de la actividad económica, es decir que responde a factores vinculados con la demanda; por lo tanto, sus discontinuidades dependen del grado en que se difunde el progreso técnico y se atenúan las disparidades de productividad (Mezzera, 1988). En el nuevo contexto, a estos factores se puede añadir el grado en que se modifican las relaciones laborales y, específicamente, las relaciones contractuales.

Considerando como criterios de segmentación a la propiedad de los medios de producción, la disociación entre trabajo y capital y la existencia o no de relaciones salariales, algunas aproximaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) a la configuración del mercado laboral han identificado al menos cuatro formas organizativas en el aparato productivo: estatal, empresarial, semiempresarial y familiar. Las formas estatal y empresarial, por sus características tecnológicas y de organización del trabajo, pueden asimilarse a la noción de “sector moderno o formal”, en tanto que, por los mismos factores, las formas semiempresarial (en la que no existe disociación entre propietarios del capital y del trabajo –el titular es también un trabajador directo–) y familiar (donde no existen relaciones salariales) formarían parte de los segmentos más atrasados de la economía y del mercado de trabajo.

Con el avance de los procesos de flexibilidad laboral y, en particular, con las prácticas de subcontratación y tercerización de una parte de los procesos de producción de bienes y servicios en las empresas de mayor tamaño, esta segmentación se ha tornado más difusa. Muchas pequeñas unidades económicas (semiempresariales y familiares), que aparecen como formalmente autónomas, en realidad se encuentran

subordinadas en su desempeño a una sola empresa o capital. Así, relaciones laborales típicamente asalariadas se encubren bajo contratos civiles como parte de las estrategias empresariales de abaratamiento de costos laborales dirigidas a mantener o restaurar sus niveles de ganancia, lo que redundará en el aumento del trabajo asalariado precario y sin cobertura de las prestaciones sociales establecidas por la ley.

Estos fenómenos avanzan a mayor velocidad que la conceptualización y la construcción de nuevos indicadores para su medición. Si la segmentación es difusa, lo es más cuando la unidad de análisis es el hogar, puesto que en el ámbito del mercado de trabajo, la articulación fue y seguirá siendo mucho mayor que aquella que se observa en el ámbito de los procesos productivos (subcontratación). No obstante, con los recaudos que exigen estas nuevas evidencias y en razón de la información estadística disponible, el análisis del tipo de inserción laboral de los hogares por sectores del mercado de trabajo seguirá siendo subsidiario del enfoque del CEDLA.

En la operacionalización de la variable referida al tipo de inserción laboral del hogar, se considera a los sectores del mercado de trabajo como categorías *puras* para el caso de inserciones de todos los miembros del hogar en un único sector; por otro lado, se crean categorías combinadas para el caso de inserciones diversificadas entre sectores. Así tenemos como categorías básicas a los sectores estatal, empresarial, semiempresarial y familiar, y tres categorías combinadas: predominantemente empresarial, predominantemente informal y mixto. Siguiendo esta definición, la categoría *empresarial* abarca tanto al sector estatal como empresarial; a su vez, la categoría *informal* abarca a las formas organizativas semiempresarial y familiar; cuando en las inserciones de los miembros del hogar se combinan los diferentes segmentos, se distinguen dos grupos en función del predominio de lo *empresarial* o lo *informal*; cuando ambos tipos de inserción tienen un peso equivalente, se recurre a la categoría *mixta*.

CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL: PRECARIEDAD COMO RASGO DOMINANTE

Los cambios en la calidad de la inserción laboral y el avance del fenómeno de la precariedad del trabajo deben entenderse en términos históricos, es decir, como resultado de la crisis de un período en el que predominaba la estabilidad laboral dentro de un modelo de empleo política y socialmente regulado (Prieto en Agulló, 2000). Pero también por el desarrollo del discurso y la práctica de la flexibilidad, que ha sido una de las estrategias que ha propiciado el despliegue significativo de situaciones de incertidumbre e inestabilidad laboral y de bajas remuneraciones.

Como plantea De la Garza, en el contexto de las políticas de ajuste y reformas estructurales, se impone el reclamo neoliberal para dejar que las fuerzas del mercado asignen los factores; la idea específica de los mercados laborales flexibles –entendida fundamentalmente como la eliminación de trabas para que los mecanismos del mercado se encarguen de modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo– proviene de la teoría neoclásica. En lo fundamental se plantea dejar hacer sin trabas legislativas, contractuales o sindicales a las empresas, eliminando seguridades vistas como rigideces, facilitando la contratación y el despido e individualizando formas de pago de acuerdo con la productividad marginal de la mano de obra (De la Garza, 2000).

Diversos estudios confirman que este ha sido el principal camino que ha seguido la flexibilidad en América Latina y también en Bolivia (Katz, 2000; Dombois, 1998b; Dupas, 2000; Arze, 2000; Escóbar de Pabón, 2001). Se concluye que lo que está en juego en la flexibilidad del trabajo es la adecuación del uso de la fuerza de trabajo y del salario a las necesidades cotidianas de la producción de manera ágil y variable. Distante de las versiones más optimistas sobre la flexibilización⁴, la búsqueda de flexibilidad en América Latina no solamente se habría traducido en la exigencia de “libre contratación” entre capital y trabajo con una mínima intervención del Estado, sino también en la posibilidad de un uso polifuncional de la fuerza de trabajo en el proceso productivo o de determinar una parte del salario en función del desempeño. Estas dimensiones de la flexibilidad han provocado el surgimiento de las más variadas formas de trabajo precario, acompañadas por un proceso de individualización de las relaciones laborales, además del aumento del desempleo estructural con el consiguiente debilitamiento de los sindicatos (Dombois, 1998a; Druck y Filgueiras, 2000; Lucena, 2000; Arze, 2000).

Desde la perspectiva de las relaciones de género, la creciente flexibilización del empleo coincide con un incremento sostenido de la participación femenina en el mercado de trabajo, particularmente desde la década del ochenta. Esto ha llevado a mantener o profundizar la tradicional segregación horizontal y vertical del mercado laboral⁵,

4 Barchiesi retrata bien esta posición cuando propone “una versión holística del trabajador: lejos de la fragmentación taylorista, una adaptación de ciclos más cortos con trabajadores polivalentes, capaces de innovar, armar rápidamente, adaptar, con mayores niveles de cooperación e iniciativa como consecuencia de la delegación de autoridad” (Barchiesi, 1998: 108; traducción propia). Ver también Montgomery (1985).

5 La noción de segmentación o segregación laboral debe evitar la idea de una separación tajante entre grupos ocupacionales; asimismo, nunca es absoluta y sólo puede hablarse de tendencias o grados en que se halla presente, pudiendo distinguirse al menos dos tipos: una segregación horizontal, cuando determinado grupo de personas se concentra en un número relativamente pequeño de ocupaciones y se encuentra total o parcialmente

mientras que la presencia de una mano de obra femenina abundante en los hogares ejerce un efecto depresor en los salarios (Arango, 2000).

En contraste con sus efectos nocivos sobre la calidad del trabajo, las ventajas preconizadas por las tesis neoliberales sobre la flexibilidad y el proceso de desregulación del mercado de trabajo para estimular una mayor generación de empleo no han tenido los efectos que se esperaban. De hecho, la Comisión Europea y la CEPAL han reconocido que la flexibilidad laboral no genera mayor empleo en Europa y América Latina (Wéller, 2000). Agulló (2000), citando a Navarro, concluye que la flexibilidad laboral necesaria para aumentar la eficiencia económica no puede alcanzarse en base a medidas que crean inestabilidad, precariedad, desempleo e incrementan las desigualdades sociales.

Con el concepto de precariedad vinculado al trabajo, se alude a nociones como *inserción laboral endeble*, *empleo incierto* (Marshall, 2000) o *una condición de empleo "no regular"* que se aparta de lo normativo, de lo regulado, de lo institucional (Agulló, 2000). Esta connotación de inestabilidad e imprevisibilidad, así como la falta de reconocimiento y aprecio social que va unida a esta condición, lleva a reconocer el fenómeno de la precariedad laboral como una de las formas en que se expresa la mayor subordinación del trabajo al capital y las posibilidades objetivadas de su mayor explotación (Salvia, 2002).

En este escenario de precariedad e incertidumbre, la diversificación de estrategias de trabajo de los hogares no solamente responde a la urgencia de obtener un mayor ingreso o restaurar un nivel de ingreso necesario, sino también a la necesidad de reducir los riesgos que conlleva la inseguridad en el trabajo. Como se ha venido insistiendo, estas estrategias están diferenciadas en función de la posición que ocupan los hogares en la estructura social, sus características constitutivas y las oportunidades que se asocian con estas, pero también a partir de la división sexual del trabajo en nuestras sociedades. En el curso del análisis, se busca dar cuenta de esta diferenciación.

El análisis de la calidad de la inserción laboral se efectúa a partir de indicadores referidos a la estabilidad laboral, el nivel de ingreso laboral y la cobertura de las prestaciones sociales (salud y seguridad social). Considerando el tipo de inserción laboral de cada uno de los miembros activos del hogar, estos se clasifican en cuatro categorías: hogares con inserción no precaria (ocupados plenos), precaria baja (jefe de hogar ocupado pleno y algún miembro precario), precaria media

ausente en las demás; otra, denominada vertical, cuando la concentración de determinado grupo se produce en los niveles ocupacionales inferiores, en tanto que otros se reparten por todas las categorías o se sitúan sólo en las superiores (Comas d'Argemir en Arango, 2000).

(jefe de hogar precario y algún miembro secundario ocupado pleno) y precaria alta (todos los miembros con ocupación precaria). Este indicador permitirá identificar la manera en que las dimensiones de la precariedad se manifiestan en el tiempo, su relación con la posición que ocupan los hogares en la estructura social y con la evolución de los niveles de pobreza de los hogares.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO Y LÍNEA DE POBREZA

Las interrelaciones entre los arreglos familiares de trabajo y la incidencia de la pobreza constituyen otro ámbito que se explora en este estudio. Amartya Sen (1992) y otros autores ven a la pobreza como una privación de capacidades básicas y no solamente como resultado de los bajos ingresos. La pobreza en esta concepción no es sólo un problema de recursos monetarios obtenidos en el mercado sino de privación de otras capacidades. Como señala Álvarez (2001), si bien esto es cierto, el problema está en la definición de cuál es la capacidad que determina la adquisición de las otras; enfocar en las capacidades y no en las condiciones estructurales de desigualdad que provocan la pobreza podría acercar esta visión a la de la *cultura de la pobreza*, aunque modernizada. Es decir que, al secundarizar la base económica y la estructura social, se corre el riesgo de hacer aparecer a la *cultura* –un conjunto de mecanismos de defensa de los pobres frente a una situación objetiva crítica– como si fuera una causa en sí misma: el pobre no puede salir de la pobreza porque sus *capacidades* se lo impiden. De acuerdo con Lomnitz (1978), esto significa, en cierto modo, culpar a los pobres de su pobreza.

Siguiendo el enfoque del desarrollo humano, otros autores también señalan que en contraste con lo que sucedía hace 25 años, en el presente existe un amplio consenso con respecto a que el acceso a la salud y la educación es tan importante como el ingreso (Kanbur, 2001; PNUD, 2002; Vigorito, 2002). Sintetizando este enfoque, Vigorito señala que es preciso considerar la multiplicidad de espacios donde se manifiestan las necesidades de la población mundial; sin embargo, concluye que aunque el espacio del ingreso no debe ser dejado de lado, debería ser aprovechado en conjunción con otras fuentes de información para generar clasificaciones más ricas. Así, las dimensiones de acceso al agua potable y saneamiento, desnutrición, esperanza de vida al nacer y distribución del ingreso, consideradas en su conjunto, ofrecerían un buen punto de partida para avanzar en la descripción de la evolución y del nivel actual de las condiciones de vida en los países en desarrollo (Vigorito, 2002). En este sentido, cabe preguntarse, nuevamente, sobre la prelación entre las carencias, pero también si en ausencia de ingresos monetarios es posible el acceso regular a la educación, la salud o los servicios básicos.

Por esta razón, antes que en las manifestaciones de la pobreza, este estudio está centrado en una de sus causas estructurales, entendiendo que del hecho de tener o no trabajo, del tipo de trabajo que se posee, de la seguridad en los ingresos laborales y del grado de integración social que este permite dependen en lo fundamental las condiciones materiales de reproducción. Esto no significa desentenderse de otras dimensiones causales de la pobreza o de las orientaciones hacia la equidad de la que pueden ser portadoras las políticas públicas, sino de una clara intencionalidad que privilegia el análisis de la relación entre el trabajo, el ingreso que proviene de este y el bienestar de los hogares.

Constataciones recientes permiten reafirmar la relevancia de considerar al ingreso que proviene del trabajo como un factor crucial en la explicación de la pobreza y, sobre todo, como factor clave a considerar en las políticas públicas orientadas a su reducción. En primer lugar, el debilitamiento de las redes sociales de apoyo, ocasionado por la base más débil de recursos materiales de que disponen los hogares, en particular los más pobres, que los fuerza al aislamiento y en algunos casos a la exclusión social (González de la Rocha, 1996), y en segundo, el impacto reducido que tiene el gasto público en la redistribución de los hogares según líneas de pobreza, tal como ha sido demostrado para el caso boliviano (UDAPE, 1998). Debido a estos factores, se asume que el ingreso por concepto del trabajo es un mejor indicador de bienestar cuando la pobreza se define como falta de titularidades, donde se admite que las personas tienen derecho a un cierto ingreso mínimo del cual pueden hacer uso libremente (Atkinson, 1991).

Análisis recientes de la CEPAL (2000) intentan una aproximación a la desigualdad social y a la pobreza desde el ámbito distributivo vinculado con el empleo y los ingresos laborales. Sin embargo, postulan que la relación entre el ingreso laboral y la incidencia de la pobreza no es lineal debido a que, por un lado, existen otros factores que contribuyen a reducir el impacto negativo de las bajas remuneraciones individuales en las condiciones de vida de los hogares; por otro, los hogares difieren en cuanto al número de miembros y personas ocupadas; y, finalmente, debe considerarse la incidencia del desempleo abierto, buscando mostrar que es un conjunto de factores que se encuentran en la base de la significación de los ingresos laborales como determinantes de la situación de pobreza del hogar.

Con la definición del hogar como unidad de análisis y el acento en las estrategias familiares de trabajo, es posible avanzar en una aproximación que considere tales limitaciones; es decir, se intentará vincular los niveles de vida con sus determinantes estructurales y, específicamente, los individuos y hogares sometidos a la condición de pobreza con el lugar que ocupan en el sistema productivo y social.

En términos operativos, la pobreza, en este estudio, se asocia con la situación de bajos ingresos y, particularmente, con niveles de ingreso considerados insuficientes para atender las necesidades básicas de los hogares en un determinado tiempo y lugar. La variable utilizada es el ingreso per cápita, que toma en cuenta todos los ingresos de los miembros de la familia, su tamaño y su papel como unidad redistributiva del ingreso. Por lo tanto, se asume que el método indirecto o *línea de pobreza* es útil para el análisis de la relación entre la inserción laboral y el nivel de vida que permite a los hogares.

La línea de pobreza establece el ingreso mínimo necesario para mantener un nivel de vida adecuado, considerando una canasta básica de consumo compuesta por diversos bienes y servicios. En nuestro caso, se toma como referencia el patrón de consumo observado en la Encuesta de Presupuestos y Gastos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en las ciudades capitales, incluida la ciudad de El Alto, cerca del año base (INE, 1990). Por lo tanto, la línea de pobreza se define como *el ingreso necesario para adquirir esa canasta básica de consumo, actualizada por el índice de precios al consumidor*⁶.

En nuestra definición, el límite superior de la línea de pobreza está dado por un ingreso que permite cubrir el costo de una canasta básica que incluye todos los bienes y servicios (no pobres), mientras que el límite inferior está definido por un ingreso que se sitúa por debajo del costo de una canasta de consumo alimentario (indigentes). Por encima de este ingreso y por debajo del ingreso necesario para cubrir una canasta completa se encuentra el límite intermedio (pobres).

En el análisis de la pobreza, se utilizan indicadores adicionales para reducir los sesgos de interpretación que provienen del uso de una sola medida: además de la incidencia, se recurre a otros indicadores como la profundidad (intensidad) y la severidad de la pobreza (índice de Sen). Mientras la incidencia o recuento mide la proporción de hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza, la intensidad o profundidad de la pobreza permite medir la distancia promedio de los ingresos de los hogares con respecto a la línea de pobreza. A su vez, la severidad de la pobreza indica la posición en la escala de ingreso de cada hogar bajo la línea de pobreza. El índice de Sen se correlaciona con el coeficiente de Gini para analizar la distribución de ingresos de los pobres (Gini para las personas pobres); esta medida de desigualdad

⁶ Aunque los patrones de consumo pudieron cambiar en los diez años considerados en este estudio, se ha mantenido constante la participación relativa de los bienes alimenticios en el gasto total de los hogares, por cuanto no se dispone de datos actualizados sobre su composición.

permite observar la transferencia regresiva de los grupos pobres a los no pobres, expresada en un aumento en el valor del índice de Gini para las personas pobres (Gp).

DESIGUALDAD SOCIAL Y POBREZA

Ubicar analíticamente la desigualdad y la pobreza como parte del circuito de la producción, distribución y consumo permite trascender la mirada centrada en la “situación de los pobres”, para intentar una mayor comprensión de los procesos que se encuentran en la base del empobrecimiento progresivo de la mayor parte de la población en nuestras sociedades. Para este propósito, el análisis de los procesos de diferenciación social en el ámbito de las relaciones de producción –y, específicamente, del trabajo– requiere ser complementado con aquellos que provienen del ámbito de las relaciones de distribución, es decir, la apropiación diferenciada de la renta generada por el esfuerzo colectivo; aquí se sostiene que es a partir de ambos procesos –en su dinámica e interrelaciones– que tienen lugar formas de inclusión y exclusión social que actúan como determinantes fundamentales de las condiciones de vida y, por lo tanto, de la reproducción material y social de la población.

Como los ingresos por trabajo son la fuente principal de sustento de las familias, el carácter de la evolución –regresiva o redistributiva– de su apropiación por los diferentes estratos sociales redundando en la magnitud e incidencia de la pobreza. Es decir que desigualdad y pobreza son dos conceptos distintos pero que guardan una relación de causa-efecto. Este es un aspecto crucial en esta aproximación al tema, por cuanto la composición del crecimiento económico en el caso boliviano tiene un mayor impacto en el PIB que en el consumo privado, debido al carácter limitado del papel del Estado en sus funciones redistributivas, agravado por las exigencias del sistema financiero global a las que debe adaptar sus políticas. Como señala Castells (1996), las reglas del juego inscriptas en los mercados financieros obligan a asegurar tasas de ganancia a los inversores, lo que definitivamente desplaza la generación de riqueza hacia la empresa privada, limitando la redistribución.

Así, mientras la ideología neoliberal insiste en el crecimiento económico como factor crucial para resolver los problemas de desigualdad y pobreza, lo cierto es que la dinámica de crecimiento propia del nuevo estilo de desarrollo plantea serias dudas sobre las posibilidades de una mejora distributiva. Siguiendo a Wolfe (en Fernández, 1989), se puede sostener que la posibilidad de cerrar la brecha entre los ingresos de la mayoría de la población y los de una minoría beneficiada por el crecimiento económico parece ser incompatible con la

naturaleza de los bienes y servicios que se producen y con el funcionamiento actual de la economía y la sociedad.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

En la actualidad, parecería existir un mayor consenso sobre el impacto nocivo de las políticas neoliberales y las reformas del Estado sobre las condiciones de vida de amplios segmentos de la población en los diversos países de la región. Aquellos que sustentan el modelo neoliberal plantean que se trataría de un efecto de corto plazo que será revertido gracias a la reactivación de las inversiones y del crecimiento promovidos por una consistente y sistemática aplicación de dicho enfoque (FMI, 1999; BM, 1998; EBRP, 2001); para otros, el enfoque sólo agrava las tendencias inerciales del modelo de acumulación vigente (reducida y precaria generación de empleo, concentración del ingreso, exclusión social, etc.), que son inherentes a la subordinación de la economía real a la economía financiera que el ajuste neoliberal involucra. Finalmente, para ciertos autores, además, el deterioro social es consecuencia e incluso requisito del esquema de acumulación actual (Vilas, 1996; Álvarez, 2001; Fernández, 1989; Rodrik, 2002; Escóbar de Pabón, 2002; Arze, 2001).

Cualquiera sea la hipótesis que se adopte, todas ellas coinciden en que el nivel de vida de importantes segmentos de la población trabajadora y de las clases medias ha sido una de las variables más sensibles de ajuste de las economías locales a la economía mundial (Vilas 1996; Antunes, 1999).

La actual preocupación por las políticas sociales en los organismos multilaterales y los gobiernos obedece a la constatación generalizada del impacto del deterioro social y de las desigualdades crecientes en la perspectiva de estabilidad política y *governabilidad* en la región. Según Álvarez (1998), la idea misma de *reforma social o lucha contra la pobreza* es parte de las estrategias de legitimidad del modelo económico, puesto que se la considera como un complemento ineludible de las reformas económicas, toda vez que apunta a garantizar la viabilidad política y social de las mismas.

Es decir que las premisas de las estrategias que hoy se formulan se enmarcan en lineamientos generales, argumentos y propuestas que plantean que la situación social de América Latina constituye un peligroso detonante que alimenta las inestabilidades sociales y políticas que pueden minar los resultados mismos de las reformas económicas. Ya en 1993, el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) postulaba:

La exclusión económica sostenida se refleja en exclusión política que socava la gobernabilidad y con una gobernabilidad

progresivamente menoscabada se erosiona la sustentabilidad de las reformas económicas, se resiente el clima para las inversiones y el proceso de crecimiento se vuelve efímero (PNUD, 1993: 17).

Este enfoque expresa la diferencia en la discusión actual de las políticas sociales respecto de la fase previa al ajuste estructural cuando estaba centrada en la relación entre consumos colectivos y acumulación de capital. Como plantea Vilas, hasta los años setenta no hubo políticas de lucha contra la pobreza; hubo, en cambio, promoción del empleo, del salario y del consumo individual y colectivo enmarcado en una estrategia de desarrollo; en otros términos, reconociendo que el universalismo de este diseño de política social no fue tal, puede decirse que la pobreza no se atendió de manera asistencial y *ex post*, sino de manera principalmente preventiva, al crearse condiciones para la inclusión social a través de la incorporación efectiva de las nuevas camadas de la fuerza laboral al empleo remunerado. En contraste, en la fase actual hay privatización donde antes hubo intervención y regulación estatal; focalización en lugar de universalidad; compensación en lugar de promoción; individualismo y particularismo clientelista como sustituto del ejercicio colectivo de derechos; combate a la pobreza en lugar de desarrollo social. Un conjunto de cambios que obedecen a la reformulación de las relaciones de poder entre actores que tienen que ver con las transformaciones en el estilo de desarrollo (Vilas, 1996).

En la actualidad puede afirmarse que los organismos internacionales juegan un rol fundamental en la determinación y reconversión de las *políticas de protección social* de los estados-nación, a través de presiones que se ejercen como condición para el refinanciamiento de la deuda y los préstamos asociados a la reforma del Estado. En lo que respecta a las políticas que se incentivan, se privilegian aquellas que fortalecen la “capacidad” de la sociedad para resolver puntualmente dificultades de protección social, de cohesión y de acatamiento a las normas, y para solucionar conflictos. De esta manera, las políticas macroeconómicas que dichos organismos promueven como condición para el financiamiento indujeron al abandono de las políticas de corte universal y su creciente sustitución por otras de carácter focalizado con el consiguiente deterioro de los derechos sociales como fuente de acceso a bienes y servicios (Álvarez, 2000).

Esto ha significado que la política social, entendida como política societal con carácter obligatorio de efecto colectivo bajo la tutela del Estado, cambie de función bajo las corrientes neoliberales, orientándose a la subsidiariedad o a la mera actividad normativa; es decir que ha sido reemplazada por una concepción que se limita a la enumeración

de ámbitos que la componen, transformando por esta vía su carácter “político” en otro supuestamente técnico (Fernández, 1989).

El rediseño de la política social corresponde así a una reestructuración amplia de la economía, la sociedad y las relaciones de poder entre actores. Los programas de ajuste estructural no incluyen una agenda de desarrollo social, puesto que el concepto de desarrollo es más que el crecimiento económico; se refiere a la transformación de una estructura compleja que expresa la diversidad de las formas sociales y económicas originadas en la división social del trabajo (Cardoso en Fernández, 1989). En el nuevo escenario, lo social es un aditamento de lo económico; se reduce, fundamentalmente, a la pobreza extrema que es concebida como el producto de ineficiencias intervencionistas anteriores, y las mismas se reducirían por el efecto derrame generado indefectible y autónomamente por el mercado (Vilas, 1996). Son estos factores los que habrían llevado a deslegitimar al Estado como proveedor de protección social y de derechos de los ciudadanos, y como regulador de las relaciones sociales, del mercado y de la cohesión social (Álvarez, 2000).

No obstante haberse demostrado ampliamente la incompatibilidad entre el crecimiento con distribución del ingreso, posturas ideologizadas continúan negando el papel del Estado en el desarrollo y en el logro de equidad distributiva, postulando, en cambio, un rol de carácter asistencialista con referencia a los más carentes. Bajo este enfoque, las llamadas “estrategias” de reducción de la pobreza constituyen apenas intentos pragmáticos orientados a suplir algunos déficits característicos de la pobreza, independientemente de las orientaciones más generales de los cambios económicos y políticos globales impulsados por las políticas de ajuste.

En este sentido, la política social debe entenderse actualmente como el resultado de un estilo de acumulación donde existe un fuerte predominio de la economía sobre la política, de la vigencia de políticas de libre mercado en lo económico y de subsidiariedad en lo social, así como de la falta de valoración de los factores económicos y sociales que agudizan la pobreza, tal como ocurre, de manera recurrente, con la crisis del trabajo como fuente regular de ingresos, de integración social y de identidad.

En este enfoque, se inscribe *lo social* en las políticas públicas nacionales y, ahora, en la EBRP. Mientras se mantiene la orientación de las políticas macroeconómicas y la profundización de las reformas estructurales, el discurso de la lucha contra la pobreza aparece como una estrategia de legitimación de la continuidad del modelo económico, toda vez que apunta explícitamente a garantizar la viabilidad política y social del mismo.

En sus consideraciones generales, el documento de la EBRP, elaborado por el gobierno como condición para recibir los recursos de alivio de la deuda externa en el marco de la iniciativa Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), recoge fielmente el espíritu de este discurso cuando señala que “la EBRP parte de una certeza incontrastable: la pobreza, la inequidad y la exclusión social son los problemas más severos que afectan a la democracia y la gobernabilidad en Bolivia; consecuentemente, la mantención de la democracia exige atender prioritariamente esos retos” (EBRP, 2001: Prefacio i).

Ni la distribución del ingreso y de la riqueza, ni el bienestar, ni la mejora de la calidad de vida de la población son nociones a las que se alude cuando se habla de *lucha contra la pobreza*. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos del nuevo enfoque de los organismos multilaterales, se puede entender que las premisas de la estrategia se enmarcan en postulados como los del PNUD (1993) respecto a la necesidad de prevenir conflictos que puedan afectar las reformas económicas y sus resultados.

En efecto, antes que integrar los objetivos de reducción de la pobreza a las políticas económicas, se subraya:

La EBRP ha sido desarrollada en un contexto de economía de mercado, preserva los equilibrios macroeconómicos, lo cual entre otros aspectos determina que la estrategia no vulnere las políticas fiscales, monetarias, comerciales y financieras establecidas en el programa económico boliviano [...] Se asume que se continuará con las políticas que mantienen la estabilidad y un ambiente económico adecuado para las actividades productivas. Asimismo, se asume que se continuarán implementando reformas estructurales que fomenten el crecimiento e inversión (EBRP, 2001: Prefacio xxiv).

Por lo tanto, la equidad sigue siendo un objetivo a lograr a partir del crecimiento económico, del fortalecimiento de procesos que aumenten las oportunidades para los más pobres (producto de la “mano invisible” del mercado) y de políticas focalizadas para los más carentes, con un Estado ausente para la distribución de recursos pero fuertemente presente para el diseño y control de las escasas políticas públicas dirigidas a los más pobres (Álvarez, 1998).

Desde el tema que nos ocupa, la integración del empleo –o la política de empleo– no está presente en la EBRP. Siendo un factor clave para la articulación no sólo de los componentes de la política social sino también entre estos y la política económica, nuevamente el diseño es más discursivo que real. Es decir, no se valoran adecuadamente los factores sociales y económicos que generan y agudizan la pobreza. Un

ejemplo de esta afirmación es que frente a la precariedad creciente del empleo y su pérdida de centralidad como fuente regular de ingresos y de integración social, la EBRP insiste en medidas orientadas a la reforma de la legislación laboral para legitimar formas de empleo precario: por horas, a tiempo parcial, eventual y sin beneficios colaterales. En resumen, una reforma a favor de la mayor explotación del trabajo bajo el argumento de reducir costos laborales para promover la creación de *más empleos*, sin importar su calidad.

En contraste con la importancia que se otorga al papel del sector privado en todas las esferas de la actividad económica y social, la EBRP sigue negando la posibilidad de un rol público en la actividad económica. La pregunta que surge es si debe existir un rol estatal en este ámbito y cómo este se vincula con la equidad y la lucha contra la pobreza. Una de las respuestas está dada en el propio documento de la estrategia cuando señala:

La pobreza en Bolivia tiene raíces profundas, el crecimiento económico se ha caracterizado siempre por estar relacionado a pocas actividades dinámicas asociadas a la explotación de recursos naturales y algunas actividades conexas, lo que ha determinado brechas regionales, importantes diferencias entre las áreas rural y urbana y una baja integración territorial [y añadiríamos *social*] (EBRP, 2001: Prefacio i).

Sin embargo, frente a este diagnóstico, la respuesta sigue siendo el impulso al crecimiento económico –asentado en la inversión extranjera directa (IED) y un puñado de empresas nacionales– y a su efecto derrame. El Estado no pretende promover, a través de sus políticas, un cambio en la composición del crecimiento económico y menos que este se traduzca en oportunidades para la generación de ingresos o en mejores oportunidades de empleo. En cambio, apelando a la “mano invisible” del mercado, deja fuera de consideración de las políticas a dos variables fundamentales que, desde el ámbito de la distribución, pueden contribuir a la reducción de la pobreza: el empleo y los ingresos laborales. La persistencia en la negación de un rol del Estado en la esfera productiva ya no parece un asunto de desconocimiento de la realidad nacional, sino de un alineamiento ideológico con la ortodoxia neoliberal.

Capítulo II

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y LABORAL: TENDENCIAS NACIONALES

DINÁMICA MACROECONÓMICA 1980-2000

El plan de estabilización y el Programa de Ajuste Estructural en Bolivia, aplicados en el país desde 1985, tuvieron éxito en el mantenimiento de la estabilidad de precios en el mediano plazo, pero no lograron promover altas tasas de crecimiento del producto ni crear las condiciones para su sustentabilidad. Su expansión promedio en la década del noventa fue del 4,5% anual, para luego declinar a tasas inferiores al 3%, muy por debajo de los niveles registrados a mediados de los años setenta (7,5%). Por otra parte, el comportamiento errático del crecimiento de los sectores intensivos en mano de obra ligados a la agricultura, la industria y la construcción muestran que, lejos de las promesas de las políticas de ajuste, tampoco fue posible modificar su composición hacia la producción de bienes con mayor valor agregado.

El ajuste y las reformas tampoco contribuyeron a elevar el ahorro nacional; la brecha entre el ahorro interno y el ahorro nacional tiende a ampliarse sustancialmente en los últimos quince años y con mayor intensidad a partir de 1999. Esto alude a un proceso de acumulación hacia fuera, a través del deterioro de los términos de intercambio y de las transferencias financieras netas (pagos factoriales), con efectos adversos sobre los niveles de inversión. Mientras que antes de las reformas el ahorro nacional representaba el 30% del PIB, con un descenso gradual esta

relación es apenas del 6,7% hacia el año 2000. De esta manera, las posibilidades de acumulación e inversión se erosionaron proyectándose como tendencia a largo plazo, puesto que no existen razones que lleven a suponer un cambio en los factores que inciden en este comportamiento.

En efecto, es poco probable que con la consolidación de un patrón de inserción externa basado en materias primas con escaso valor agregado se modifique la relación negativa de los términos de intercambio o que los flujos financieros al exterior por concepto de utilidades y dividendos de las empresas disminuyan sustancialmente. Tampoco se pueden esperar reducciones en el servicio de la deuda externa toda vez que la deuda global no disminuye en la magnitud esperada con los programas de alivio concernidos en la iniciativa HIPC y, por el contrario, tiende a crecer al paso en que se restringen las posibilidades del país para generar recursos públicos con destino a la inversión⁷.

Al respecto, el rol protagónico que se asigna al sector privado en la economía contrasta con una inversión privada nacional altamente conservadora, que apenas representa un tercio de la observada en 1980 (2,3% del PIB en el año 2000). En 1995, con la privatización de las empresas estratégicas antes en manos del Estado (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario y electricidad), la IED pasó a constituir el principal agente de inversión con una inyección de recursos que representaba el 8,9% del PIB en 2000, casi cuatro veces más que la inversión privada nacional. De allí resulta que las decisiones de inversión se trasladaran rápidamente a manos del capital transnacional, concentrándose en sectores intensivos en el uso de capital y con escasos eslabonamientos con el resto de la economía (hidrocarburos, telecomunicaciones). Por esta razón, la transferencia de la propiedad y de la generación de excedentes a manos de la IED⁸ ha sido poco eficaz para arrastrar el crecimiento económico; en cambio, ha operado en favor de una mayor concentración de la riqueza y de un proceso de transferencia de excedentes al exterior que profundizan la vulnerabilidad económica y acentúan la desigualdad social.

La debilidad del crecimiento del producto no solamente revela problemas macroeconómicos sino también sectoriales y microeconó-

7 Uno de los objetivos del ajuste y las reformas estaba dirigido a resolver la crisis del endeudamiento externo; sin embargo, después de diferentes fases de renegociación y aplicación de los programas de alivio, la deuda externa en el año 2000 casi duplica a la vigente en 1980.

8 El marco normativo es ampliamente favorable para la transferencia de excedentes al exterior. La IED opera en mercados protegidos temporalmente (telecomunicaciones), mercados asegurados en el exterior (gas), mercados oligopólicos (transporte aéreo, electricidad) o monopólicos (transporte ferroviario). Además, goza de ventajas tributarias, tarifarias y de libre contratación de la mano de obra.

micos que se manifiestan nítidamente con la crisis financiera internacional. Su impacto repercute sobre un aparato productivo escasamente reestructurado y con productividad media en descenso, particularmente en el caso de la industria manufacturera y agropecuaria, afectando severamente el comportamiento de la demanda agregada. Mientras que el crecimiento económico pasa a depender de los sectores de hidrocarburos y comunicaciones en manos de la IED, los sectores intensivos en mano de obra se retraen o crecen a tasas muy bajas, generando un escenario recesivo agravado por el alto endeudamiento de las empresas nacionales y su fuerte dependencia de un mercado interno cada vez más reducido por la contracción del consumo de los hogares.

La salida por la vía de la orientación exportadora de la economía no tuvo los resultados esperados: no se registró un crecimiento rápido de las exportaciones ni cambios en su composición. Después de casi dos décadas de reformas estructurales y en un contexto de apertura comercial irrestricta con sendos acuerdos de ventajas arancelarias, el sector exportador no ha mejorado su participación en el producto, no ha avanzado hacia una mayor diversificación, ni ha contribuido a una mayor generación de empleo; como resultado, la brecha comercial tiene una tendencia crónica al aumento, llegando a cifras negativas del 3,5% en 2000. Es decir que, frente a la reducción del mercado interno por efecto del mayor desempleo, la mayor inestabilidad laboral y los bajos salarios, ni siquiera se pueden vislumbrar salidas a la crisis que provengan de la frágil e inestable inserción externa que continúa asentada en bienes primarios y manufacturas de uso intensivo de recursos naturales o tradicionales.

En este nuevo escenario, la apertura comercial no solamente ha redundado en un mayor crecimiento de las importaciones, sino en la incapacidad de las empresas para enfrentar la competencia externa, lo que ha llevado a una mayor desintegración productiva. Frente a estas condiciones, la mayor parte de las empresas ha recurrido a *estrategias defensivas* de adaptación basadas en el ahorro de costos laborales, que se ha traducido en una competitividad espuria que no ha permitido mejorar su posicionamiento más allá del corto plazo; tampoco la inversión extranjera directa ha contribuido a mejorar la capacidad productiva (se reduce a la adquisición de activos existentes y opera a la manera de enclave), mientras que deja menos ingresos de los que transfiere al exterior.

En consecuencia, la inversión pasa nuevamente a depender de la capacidad financiera del Estado que, en ausencia de condiciones para generar recursos genuinos, recurre a la contratación de nueva deuda (externa e interna), bajo el supuesto cuestionable de contribuir a la reactivación económica, mediante programas de obras públicas y otros de alivio financiero a las empresas. Paradójicamente, en un modelo

que proclama las bondades del libre mercado, nuevamente se apela a la intervención del Estado para seguir favoreciendo a un sector privado nacional escasamente competitivo, ineficiente y explotador de la fuerza de trabajo, así como también a un sector privado extranjero que en nombre de la “seguridad jurídica” mantiene o amplía su acceso a beneficios extraordinarios que redundan en una menor disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo nacional (Cuadro 1).

Estas tendencias ponen en cuestión los supuestos beneficios que acarrearían los programas de ajuste estructural y las reformas del Estado impuestas por los organismos multilaterales, puesto que es cada vez es más fácil demostrar que han sido concebidas para favorecer el reacomodo del capitalismo en su afán de aumentar sus tasas de ganancia; mientras las empresas transnacionales y algunas empresas nacionales logran grandes beneficios, los grandes perdedores son la inmensa mayoría de medianos y pequeños productores del campo y las ciudades, quienes ocupan a un elevado porcentaje de la fuerza de trabajo en el país.

Cuadro 1
Bolivia: principales indicadores económicos, 1980-2000

Concepto	1980	1989	1995	2000
PIB (tasa crecimiento %)	-4,1	2,83	4,68	2,28
PIB per cápita (US\$)	956	775	1.038	1.037
Ingreso Nacional Bruto (YNB) (1990=100)	116,87	100,55	93,30	93,30
Ahorro nacional/PIB	30,65	10,45	8,04	6,67
Ahorro interno/PIB	13,78	9,89	14,72	13,63
Ahorro externo/PIB	16,74	1,26	-10,95	-12,57
Tasa de inversión (%/PIB)	12,86	11,56	14,73	18,37
Inversión privada nacional/PIB	6,0	4,02	2,12	2,33
Inversión extranjera directa/PIB	0,79	0,72	5,26	8,92
Inversión privada/Inversión total (%)	52,8	41,0	50,1	61,2
Inflación anual (%)	23,9	16,6	12,6	2,4
Déficit fiscal (% del PIB)	-8,6	5,49	-1,81	-3,75
Deuda externa global (millones de US\$)	2.312	3.740	4.791	4.300
Deuda externa/PIB	50,9	74,0	71,4	53,3

Cuadro 1 [continuación]

Concepto	1980	1989	1995	2000
Servicio de deuda externa/export. (%)	28,6	25,4	25,5	23,7
Servicio de deuda externa/PIB (%)	6,4	4,8	4,7	4,3
Transferencias financieras netas (TFN) (TFN=Ahorro externo-Pago Neto Factores Productivos)	-5,78	-168	-649	-800
Importaciones (1990=100)	73,2	90,7	133,0	169,4
Exportaciones (1990=100)	82,1	90,0	143,5	155,4
Brecha comercial (Exportaciones-Importaciones/PIB)	1,21	-1,25	0,71	-3,55
Relación precios intercambio	21,84	2,82	-7,27	-8,99

Fuente: Elaboración propia con base en BCB (1980-2000) y Ministerio de Hacienda (2000).

DINÁMICA LABORAL Y SOCIAL 1990-2000

Según la OIT (1999), el desempeño del mercado de trabajo y el empleo en América Latina en la década del noventa –período en que la aplicación de los programas de ajuste estructural se complementa con la introducción de reformas estructurales– estuvo caracterizado por la insuficiencia en la generación de empleos en el sector formal y la baja calidad de los nuevos empleos, la estabilidad o ligera recuperación de los salarios reales –aunque sin alcanzar los niveles previos a la crisis del endeudamiento externo–, así como por la flexibilización de las normas laborales, de tal forma de facilitar la cantidad, uso y remuneración de la fuerza de trabajo de las empresas a las fluctuaciones de la demanda y las exigencias de competitividad. El mismo organismo señala también que, a finales de dicha década, los costos de las crisis financieras recayeron sobre la situación laboral, puesto que el desempleo aumentó a tasas que superaron el 8% y, como vino ocurriendo desde principios de los años noventa, la mayor parte de las ocupaciones generadas se ubicaron en el sector informal y en las actividades terciarias, al margen de la regulación laboral.

Con base en este recuento, se concluye que las políticas económicas aplicadas en la región provocaron esta reconfiguración en el mercado de trabajo, agravando el cuadro social de muchos países latinoamericanos en los cuales el deterioro de la situación económica y laboral fue bastante homogéneo, profundizando la herencia estructural de los problemas de empleo, ingresos, desigualdad y desprotección social (OIT, 1999).

En el país, estas tendencias generales están presentes con particularidades que hacen todavía más crítico el panorama laboral. En el marco de escasas transformaciones en la base material para la producción, el ingreso de nuevos trabajadores o la movilidad laboral entre distintas situaciones de trabajo profundizan y consolidan, en la década del noventa, una estructura de empleo que puede calificarse como extremadamente precaria:

- Concentración del empleo en el sector informal (60%).
- Reducción persistente del empleo en el sector estatal (11,8%).
- Baja participación del sector empresarial (23%).
- Disminución del empleo asalariado (48%).
- Concentración del empleo en actividades terciarias tradicionales (66%).
- Persistente disminución del empleo en actividades productivas (21,7%).
- Elevados índices de subempleo por ingresos (60%).
- Mayor desprotección social (37% de asalariados que cotizan a la seguridad social).
- Aumento del desempleo abierto (8,6%).

Si bien estos indicadores ilustran por sí mismos la situación laboral, el hecho a destacar es que, en la década del noventa, el trabajo flexible y con menores calificaciones para su desempeño caracteriza a la oferta de nuevas oportunidades de empleo asalariado, en condiciones de trabajo y remuneración que se asemejan a las que rigen para el universo de trabajadores independientes, lo que ha derivado en una creciente pérdida de la calidad de los empleos.

Adicionalmente, es importante mencionar que muchas de estas transformaciones tienen impactos diferenciales por género, aun cuando algunas de las tendencias pueden afectar a hombres y mujeres por igual. Se ha evidenciado un proceso creciente de feminización de la fuerza de trabajo que alude tanto al incremento en la participación económica de las mujeres como al deterioro de las condiciones laborales en los empleos masculinos (Standing en Benería, 2000).

Las estrategias “defensivas” de reacomodo de las empresas que han llevado a una difusión del empleo precario han estado acompañadas de una mayor selectividad y segregación en el acceso a oportunidades ocupacionales. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores mayores de 40 años son crecientemente excluidos del acceso a un empleo acorde

con sus expectativas y aspiraciones. Desde este hecho, se pone en evidencia la relatividad de los logros educativos para mejorar la posición en el mercado de trabajo; entre otros ejemplos, tenemos que una mayor escolaridad de las mujeres no se ha traducido necesariamente en mejoras en el mercado de trabajo, debido a la persistencia de prácticas discriminatorias en su contra, o la situación de los jóvenes con educación superior que se encuentran sobrerrepresentados en el desempleo abierto.

En el caso boliviano, las políticas flexibilizadoras se han aplicado a modo de “salvavidas” de un contexto socioeconómico atrasado y nada competitivo. Como en otros países, han servido sobre todo para cambiar la naturaleza de las relaciones laborales, generándose un incremento significativo de la precariedad del trabajo y la segregación en el acceso a oportunidades ocupacionales en función del sexo, la edad o el origen social.

Los cambios en el panorama laboral han tenido lugar en un contexto de atomización de la acción colectiva a la que la flexibilidad laboral apuntaba como objetivo. Así, el temor al despido y la imposibilidad real de reinserción laboral luego de la cesantía conducen a una mayor individualización, subordinación, disponibilidad permanente y pérdida de control sobre el trabajo, aspectos que en conjunto remiten a un escenario de sobreexplotación de individuos y de grupos en el mercado de trabajo.

En este escenario, en que el acceso a un empleo estable y adecuadamente remunerado es cada vez más restringido, las estrategias familiares de generación de ingresos asumen nuevas modalidades basadas en el uso más intensivo de la fuerza de trabajo disponible en los hogares. El multiempleo entre quienes ya trabajan o la entrada de mujeres, jóvenes y niños a la esfera del trabajo remunerado o de apoyo a emprendimientos familiares ya no constituyen la excepción, sino una nueva tendencia impuesta por la precariedad social que acarrearán las transformaciones económicas en curso (Cuadro 2).

Cuadro 2

Estructura del empleo por sectores del mercado de trabajo, 1989-2000 (en %)

Sector del mercado de trabajo	Bolivia		La Paz		El Alto	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Estatatal	18,2	11,9	20,3	15,5	12,0	8,2
Empresarial	19,7	23,0	20,2	25,3	20,9	18,5
Semiempresarial	11,9	14,4	12,1	10,5	11,0	15,7

Cuadro 2 [continuación]

Sector del mercado de trabajo	Bolivia		La Paz		El Alto	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Familiar	43,5	45,3	41,1	43,3	53,4	55,7
S. doméstico*	6,7	5,4	6,3	5,4	2,7	1,9

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Ocupados en unidades familiares u hogares.

Capítulo III

ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOGARES

EN ESTE APARTADO, se desarrolla el cuerpo central del estudio. Después de señalar las tendencias generales de cambio en el tipo y la calidad de las formas de inserción laboral de los hogares y sus repercusiones en la reconfiguración de la estructura social, se examinan los cambios en las características sociodemográficas de las unidades familiares y en las estrategias familiares de trabajo (EFT); como corolario, se analizan los resultados de las EFT en términos del comportamiento de los ingresos familiares.

AJUSTE DEL MERCADO DE TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOGARES: UNA VISIÓN GLOBAL

En 1989, el escenario macroeconómico se caracterizaba por el tránsito desde una fase de estabilización a otra de recuperación del crecimiento económico, con superávit fiscal y una inflación moderada. El PIB per cápita presentaba una notable reducción respecto a 1980, mientras que el ajuste del mercado de trabajo operaba a través del empleo y de los salarios, tanto en el sector público como privado; la reducción del empleo y la contención de los salarios en el sector público eran parte de los instrumentos utilizados para mantener la estabilidad de precios, con efectos sobre el aumento del desempleo y la contracción de los salarios reales; por otra parte, al amparo de medidas de libre contratación de la

fuerza de trabajo, las empresas generalizaban prácticas de uso flexible de la fuerza de trabajo en función de las fluctuaciones de la demanda y la indexación de los salarios siguiendo las señales del sector público, agravando la situación del desempleo y la caída de los salarios reales.

Hacia el año 2000, el escenario se caracterizaba por una aguda crisis económica expresada en la reducción del ritmo de crecimiento económico, una drástica caída de la demanda agregada, el retorno a elevados niveles de déficit fiscal y una baja inflación asociada con la contracción del consumo de los hogares. En este nuevo contexto, el PIB per cápita presentaba un aumento respecto a 1989 (por encima del observado en 1980), mientras que el ajuste del mercado de trabajo volvía a operar por sobre el empleo y los salarios, afectando con mayor intensidad a los puestos de trabajo no calificados⁹. Entre ambos períodos, la flexibilidad laboral (numérica, contractual y salarial) se difunde ampliamente cruzando a todos los sectores, ramas y categorías ocupacionales, siguiendo las estrategias empresariales de reducción de costos laborales. De esta manera, a los bajos salarios en la economía se suman la inseguridad crónica en el empleo y los ingresos, pasando a constituirse en el rasgo dominante de las condiciones laborales.

En ambos momentos, el crecimiento económico estuvo muy cerca o por debajo del crecimiento de la población (2,7%) y los sectores productivos intensivos en el uso de mano de obra presentaban un mayor declive en su dinámica, lo que redundaba en el aumento en las tasas de desempleo hasta niveles similares cercanos al 10%. Hacia 2000, con la privatización de las empresas estratégicas del Estado –sector que concentra la IED–, el comportamiento conservador de la inversión privada nacional y la paulatina pérdida de competitividad de las empresas por efecto de la apertura comercial, se produce una fuerte retracción del empleo formal, por lo que el Estado reduce al mínimo su participación relativa en el empleo total y el sector empresarial genera una cantidad insuficiente de empleos para ocupar a la creciente oferta laboral.

Esto repercute en la dinámica de las actividades semiempresariales y familiares, cuya capacidad para absorber a nuevos ocupados deviene más limitada, en comparación con 1989 y los años siguientes, tanto por la contracción del mercado interno como por el impacto de la apertura comercial sobre las actividades productivas de pequeña escala. Es decir que, lejos de las promesas neoliberales, la dinámica laboral se habría desplazado hacia situaciones de mayor desintegración social, con un aumento en el desempleo y mayores dificultades para generar

⁹ Durante los años de crecimiento del producto (1992-1998), el ajuste del mercado de trabajo estuvo basado en los salarios antes que en el empleo, lo que se tradujo en bajas tasas de desempleo abierto (4% en promedio).

ingresos en actividades independientes de baja productividad. En este marco se analizan los cambios en la inserción laboral de los hogares.

CAMBIOS EN EL TIPO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOGARES

Un rasgo dominante en la configuración de la estructura del mercado de trabajo urbano en Bolivia es, como se ha visto, el peso dominante y creciente que adquiere el empleo en los sectores familiar y semiempresarial que, en conjunto, han pasado a ocupar cerca de dos tercios de la fuerza laboral, muy por encima de su participación relativa en 1989. Este dato evidencia la persistente incapacidad estructural del sector empresarial para generar empleos, al menos en la cantidad suficiente para compensar la progresiva reducción de puestos de trabajo en el sector estatal. Esta característica, junto al declive de las oportunidades laborales por efecto de la crisis económica, provocó una recomposición en el tipo de inserción laboral de los hogares, donde la probabilidad de concentración de todos los miembros ocupados en un solo sector disminuye para abrir paso a formas combinadas de inserción laboral, que conllevan una mayor articulación entre los diferentes sectores del mercado de trabajo en el esfuerzo por garantizar su reproducción material. Con este rasgo común en la La Paz y El Alto, el tipo de inserción por sectores del mercado de trabajo presenta especificidades asociadas con la estructuración de su base productiva, las relaciones de producción y el perfil ocupacional que esta configura.

Mientras en La Paz las inserciones que combinan los diferentes sectores aumentan del 29 al 36%, también mejora la participación relativa de los hogares donde todos los ocupados trabajan en los sectores estatal y empresarial del 32 al 36%, con un mayor peso en este último; con sentido contrario, disminuyen las inserciones completas de los hogares en los sectores semiempresarial y familiar del 38 al 27%.

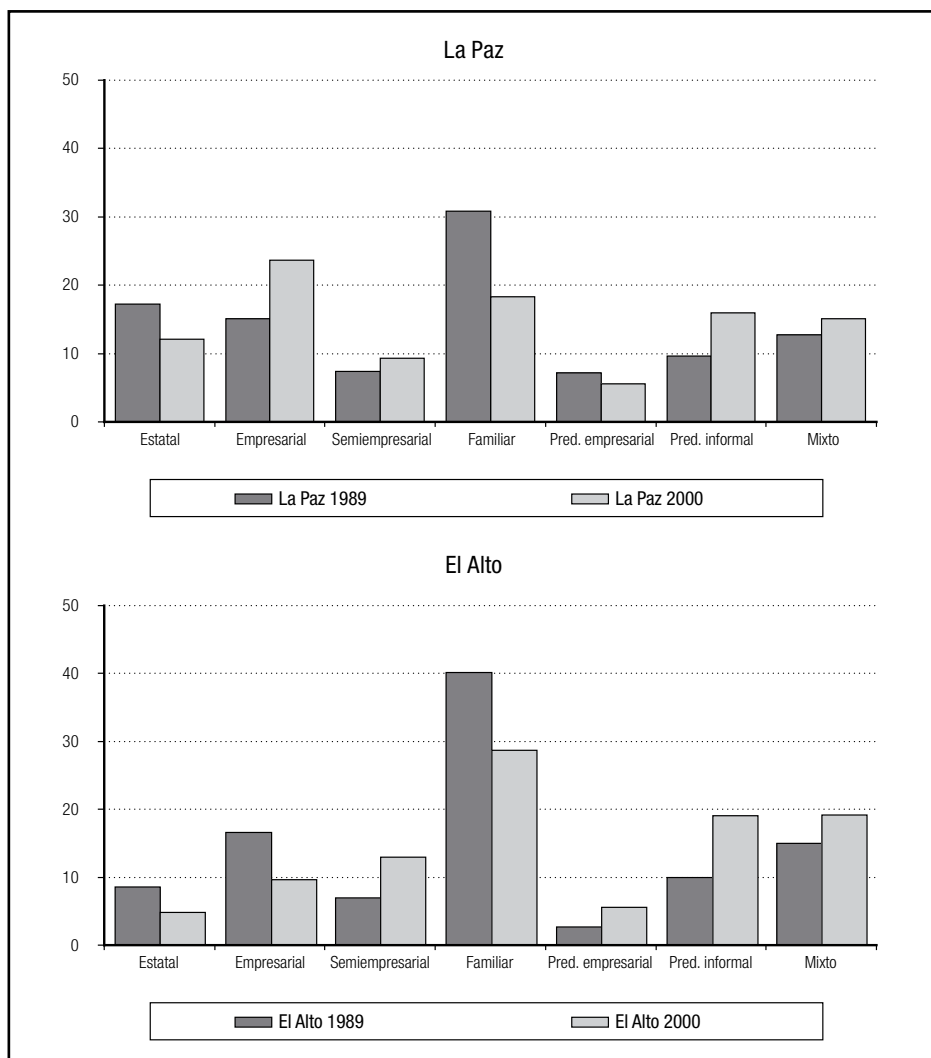
Con el mismo trayecto, en El Alto, las inserciones diversificadas con un ancla en lo informal aumentan del 27,6 al 44%; a su vez, las inserciones completas en los sectores semiempresarial y familiar también disminuyen levemente desde el 47 al 42%, cambiando su composición hacia lo semiempresarial. Solamente el 9% de los hogares logra incorporarse como grupos completos en el sector empresarial, poco más de la mitad respecto al año base. Esto significa que las oportunidades laborales en el sector empresarial –público y privado– tienden a concentrarse en la ciudad de La Paz, mientras en El Alto se encuentran cada vez más relegadas al espectro de lo informal, menos como inserciones completas y más como modalidades mixtas.

Estas tendencias contrastan con las proclamadas ventajas de una economía de libre mercado para el desarrollo de los sectores que producen bienes transables, con mayor complejidad en el uso de tecnología y

en la organización de la producción y, por lo tanto, con efectos virtuosos sobre la demanda de mano de obra calificada. A la luz de las tendencias observadas, no se habría verificado un proceso de esta naturaleza o su concentración en pocos sectores y empresas no habría repercutido en modificaciones con impacto a nivel macroeconómico y social (Gráfico 1).

Gráfico 1

Tipo de inserción del hogar por sector del mercado de trabajo, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Dada la estrechez de las posibilidades de empleo en ocupaciones no tradicionales en las dos ciudades, el proceso que emerge es uno de mayor diferenciación de las oportunidades ocupacionales en función de la posición de los hogares en la estructura de relaciones de clase. Utilizando como indicador de aproximación la posición ocupacional de los jefes de familia¹⁰, se distingue a los hogares según su pertenencia a la clase empresaria¹¹, clases medias, clase obrera y grupo de trabajadores manuales no proletarios. Siguiendo esta clasificación, se evidencia que desde 1989 y consolidándose como característica en el año 2000, la inserción de los hogares en los diferentes sectores del mercado de trabajo adopta orientaciones muy específicas para cada grupo social.

Entre los hogares de las clases medias predominan las inserciones completas en el sector empresarial público o privado y se presentan combinaciones donde siempre existe un ancla con lo empresarial; en el otro extremo, los hogares del estrato de trabajadores manuales no proletarios mantienen una fuerte concentración en el sector familiar y cuando se diversifican siempre tienen un ancla en lo informal; a su vez, los hogares que pertenecen a la clase obrera presentan mayor diversificación, con un cierto peso en el sector empresarial (La Paz) o semiempresarial (El Alto), que se combina con un abanico de otros tipos de inserción: completas en el sector semiempresarial y mixtas en La Paz; completas en el sector empresarial y mixtas en El Alto.

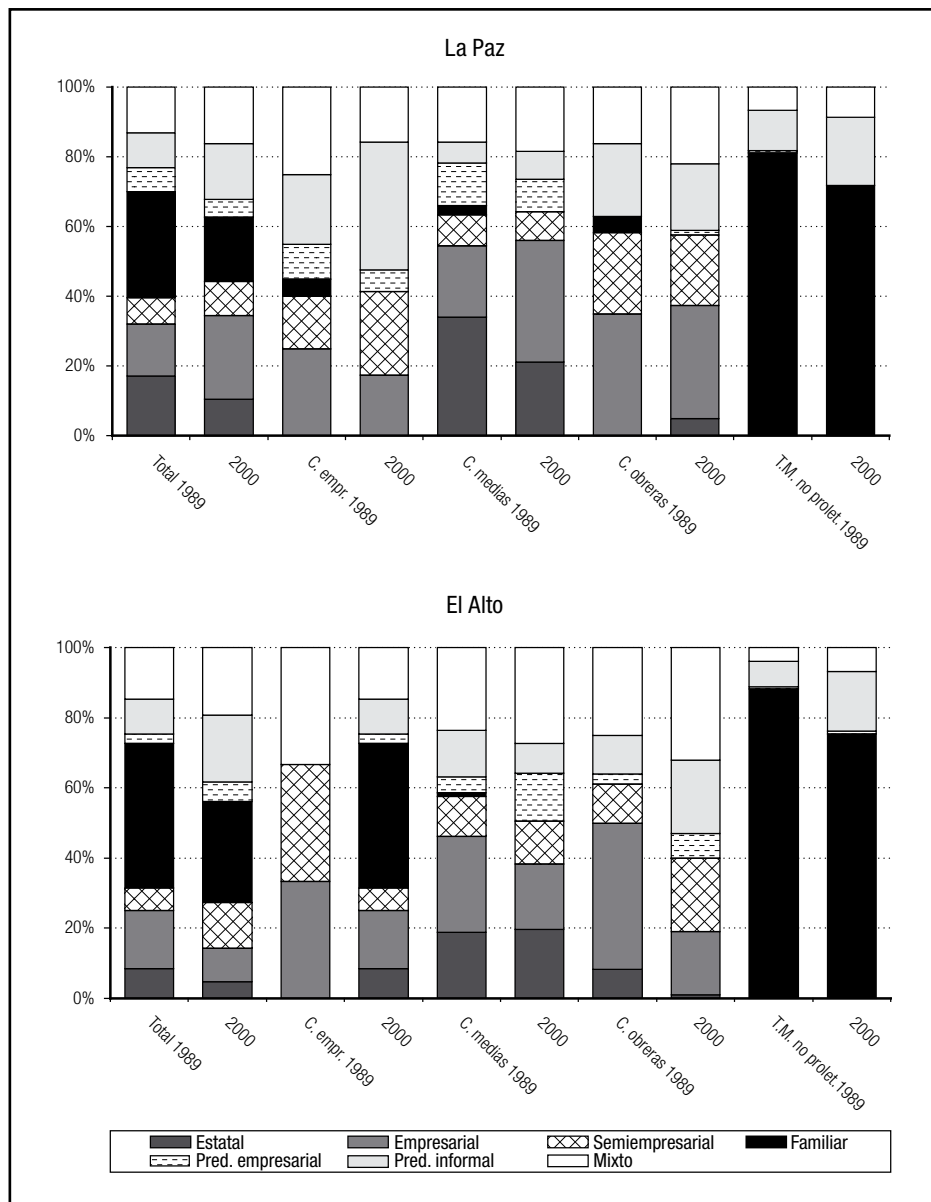
Por último, a pesar de que representan un bajo porcentaje en el conjunto de los hogares, los que pertenecen a las clases empresarias también muestran una mayor diversificación; siguiendo los rasgos de su conformación (mayor peso de hogares liderados por grandes y pequeños propietarios de medios de producción), han pasado a un tipo de inserción combinada con un ancla en lo informal y a inserciones completas en el sector semiempresarial, dejando atrás el peso de dichas inserciones en el sector empresarial y predominantemente empresarial (mucho más en El Alto), en un complejo esquema de aprovechamiento de oportunidades en el mercado de trabajo entre sus miembros (Gráfico 2).

10 La pertinencia de este recurso metodológico se sustenta en la fuerte asociación que existe entre la posición ocupacional de los titulares o jefes de hogar y la del resto de los miembros activos. Las clases empresarias están conformadas por los empleadores de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro; las clases medias están conformadas por los empleados y funcionarios; la clase obrera agrupa a los trabajadores manuales; y el grupo manual no proletario, a los trabajadores independientes de las diferentes ramas de actividad.

11 En Bolivia, y particularmente en las dos ciudades consideradas, el 94% de los establecimientos económicos son de pequeña escala (1-4 personas ocupadas); por lo tanto, entre las clases empresarias también predominan los titulares de semiempresas.

Gráfico 2

Tipo de inserción laboral del hogar por posición en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOGARES

Los cambios en el tipo de inserción de los hogares por sectores del mercado de trabajo ocurren en un contexto de ampliación de las formas de trabajo flexible y/o sujetas a bajas remuneraciones, en un proceso que atraviesa a todos los sectores, al trabajo asalariado y no asalariado¹², al mismo tiempo que aumenta el desempleo abierto. Para analizar los efectos de estos procesos sobre la calidad de la inserción de los hogares, se considera por separado la inserción de los jefes de hogar y los miembros secundarios (no jefes), así como las tendencias agregadas a nivel del hogar. Las tres formas de aproximación entregan evidencias de una persistente precarización en la inserción laboral de los hogares en las dos ciudades, a pesar de una leve mejoría hacia el año 2000.

Entre los jefes de hogar, las oportunidades asalariadas son predominantes; han aumentado en La Paz y continúan girando en torno al espectro de empleos precarios moderados; la proporción de asalariados no precarios se estanca en un 16%. Un trayecto distinto se encuentra en El Alto, donde las oportunidades asalariadas y no asalariadas para los jefes de hogar siguen distribuidas por igual pero, en cambio, los empleos asalariados a los que acceden siguen siendo muy precarios, a pesar de un leve aumento de las oportunidades de inserción plena (del 2,5 al 10%). En ambas ciudades también el desempleo se reduce en este grupo de población.

En contraste, los cambios más importantes remiten a una mejora relativa en la calidad del empleo no asalariado entre los jefes de hogar en las dos ciudades, sobre todo en El Alto. Sin embargo, mientras que a partir de esta tendencia en La Paz la inserción no asalariada no precaria tiene un peso mayor, en El Alto las mejoras no han sido suficientes para superar el predominio de las inserciones precarias. Si bien en el trayecto muchos jefes de hogar han logrado expandir y consolidar sus actividades económicas, ya sea por cuenta propia o como titulares de pequeños establecimientos económicos, la posibilidad de consolidación y permanencia competitiva en el mercado habría sido menor en El Alto, tanto por factores asociados con la menor capacidad de consumo de los hogares alteños como por las limitaciones de los productores para ampliar su presencia en otros mercados dentro y fuera de la región.

12 Cabe recordar que la precariedad está definida a partir de las siguientes condiciones laborales: ingreso por debajo del costo de una canasta alimentaria básica, inestabilidad laboral y ausencia de prestaciones sociales; en el grupo de asalariados se distinguen entre aquellos *no precarios* (no sujetos a estas condiciones), *precarios* (sujetos a alguna/s de las tres condiciones) y *precarios extremos* (sujetos a las tres condiciones simultáneamente). Para los no asalariados, la precariedad se define por la variable de ingresos (todos comparten la ausencia de prestaciones sociales).

Entre los no jefes, las oportunidades de empleo en las dos ciudades siguen siendo básicamente no asalariadas y predominantemente precarias, mientras que las restricciones para su acceso a empleos asalariados son mayores, lo que se traduce en niveles de desempleo más altos. Este grupo de población está compuesto principalmente por las cónyuges y los hijos, lo que muestra que la selectividad creciente que se observa en la demanda de fuerza de trabajo tiende a consolidar un patrón de discriminación en su contra, relegándolos –con escasas excepciones– a los empleos de menor jerarquía ocupacional y peor calidad (Gráfico 3).

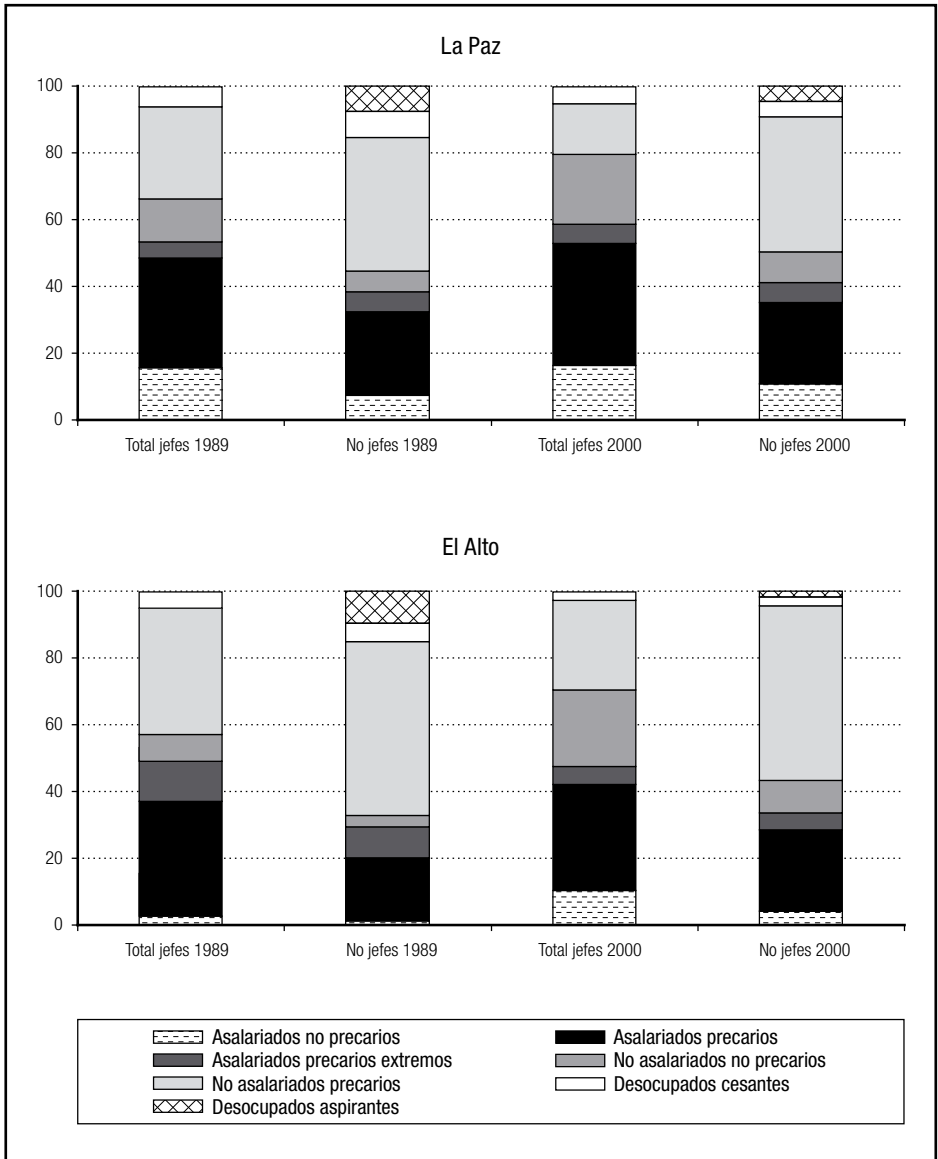
La síntesis de estas condiciones en un nivel agregado del hogar (jefes y no jefes) muestra que, con el tiempo, un mayor esfuerzo laboral no está acompañado de cambios progresivos en su situación, dadas las restricciones que provienen de la estructura de oportunidades. En La Paz, solamente el 24% de los hogares tiene a todos sus miembros con ocupación plena, una fracción levemente superior respecto a 1989. Más crítica todavía es la situación en El Alto donde, si bien los hogares en esta condición aumentan en más de dos veces su participación relativa, apenas representaban el 17,5% del total en el año 2000.

Esto ocurre a pesar de un notable aumento en el clima educativo de los hogares¹³, lo que pone de manifiesto los riesgos de la devaluación educativa como mecanismo de integración y movilidad social cuando las transformaciones de la estructura productiva y la demanda de fuerza de trabajo se corresponden con los esfuerzos que se realizan desde el Estado y la sociedad para el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos. Un mayor perfil educativo entre sus miembros activos ha servido, en el mejor de los casos, para favorecer el paso de una reducida fracción de los hogares con precariedad alta (todos sus miembros en esta situación) hacia una precariedad baja o más atenuada. Con todo, el porcentaje de hogares con precariedad alta sigue siendo muy importante en La Paz (29%, levemente por debajo de 1989) y más aún en El Alto, donde el 40%, después de una reducción sustantiva, todavía presenta esta situación.

Estas tendencias permiten concluir que las principales variables de ajuste para mantener la estabilidad de precios en nuestras economías han sido el empleo y los ingresos, en tanto que la intervención del Estado se ha inclinado a favorecer la acumulación empresarial y, específicamente, a las grandes corporaciones extranjeras y empresas

13 El clima educativo fue calculado como la suma de años de escolaridad alcanzada por cada persona activa del grupo doméstico sobre el número de miembros activos: muy bajo (hasta 5 años de escolaridad), bajo (más de 5 y hasta 9 años de escolaridad), medio (más de 9 y hasta 12 años de escolaridad), alto (más de 12 años de escolaridad).

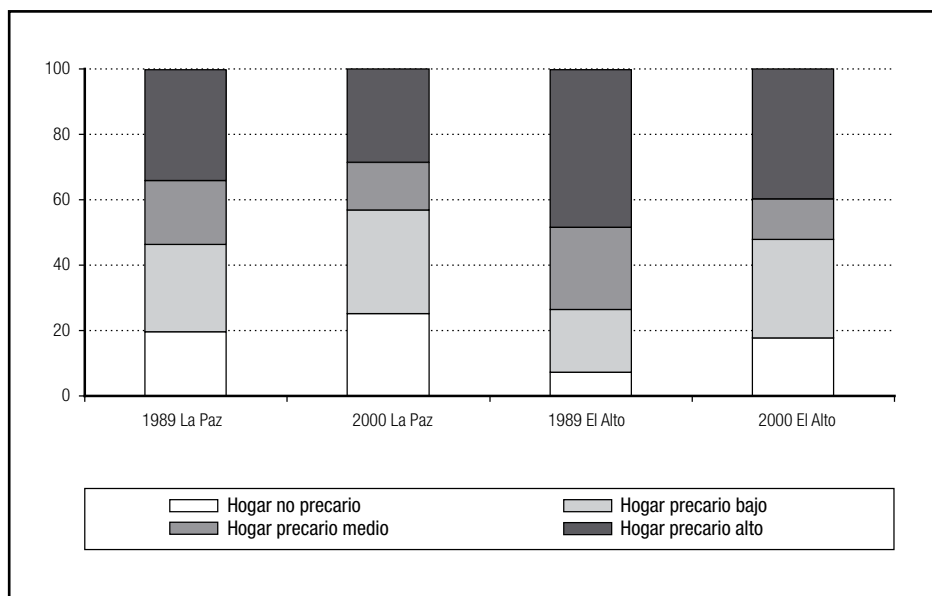
Gráfico 3
Calidad de la inserción laboral del jefe del hogar y miembros secundarios, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

nacionales. De esta manera, se configura un modo de inserción laboral donde la precariedad pasa a ser la norma y no la excepción en los diferentes sectores del mercado de trabajo, en particular, para los miembros secundarios de los hogares ubicados en los quintiles más pobres de la distribución del ingreso (Gráfico 4).

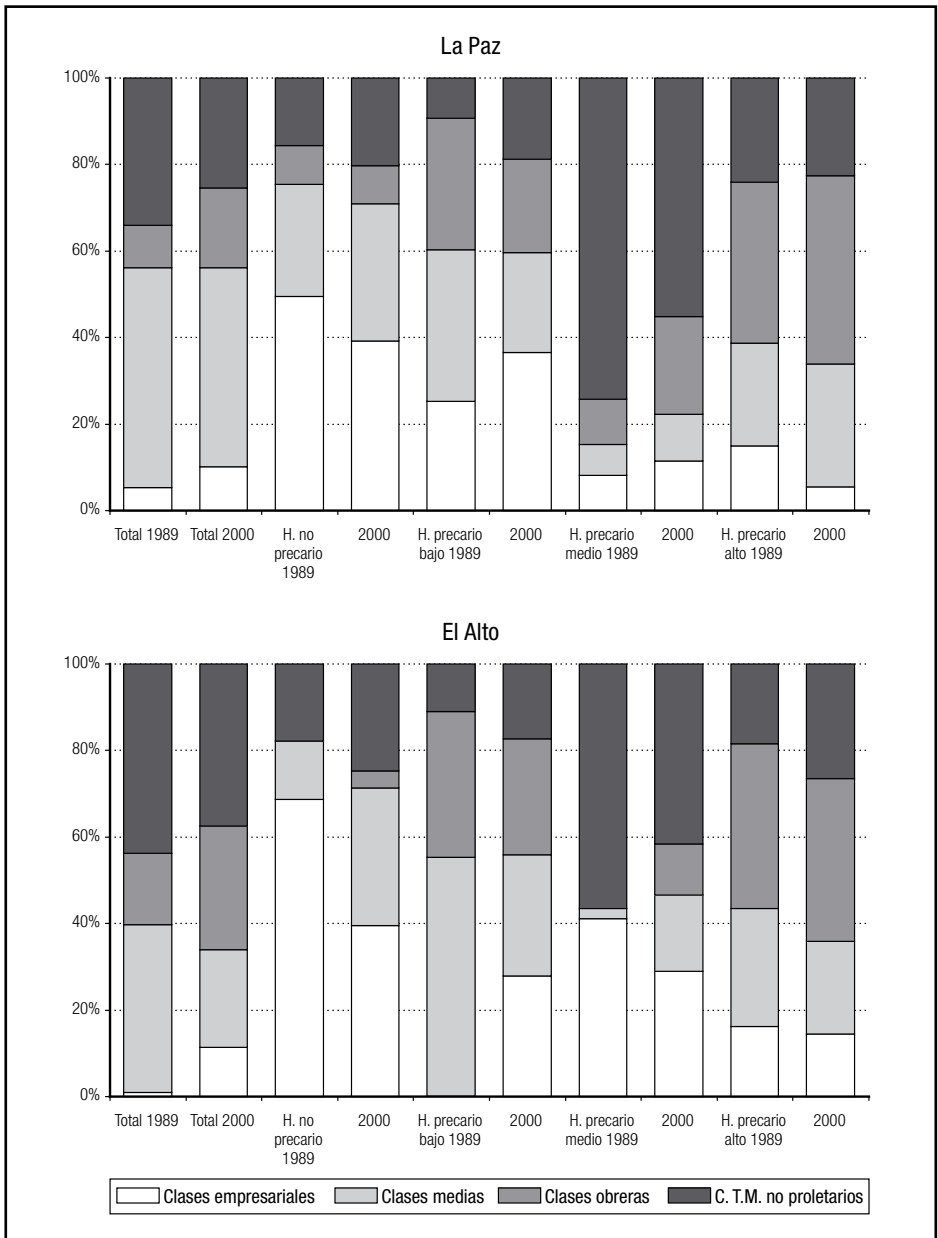
Gráfico 4
Calidad de inserción laboral de los hogares, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Las posibilidades de tránsito de los hogares hacia las inserciones laborales no precarias o con precariedad más atenuada de sus miembros también están diferenciadas en función de la pertenencia a determinados grupos sociales. Siendo que la probabilidad de inserciones plenas del conjunto de los activos de hogares es muy reducida en las dos ciudades, aparece claramente como un privilegio de las clases empresariales y de una fracción alta de las clases medias, puesto que apenas abarca a una reducida fracción de los trabajadores manuales no proletarios que se ocupan en pequeñas unidades económicas “exitosas”. Son estos mismos grupos sociales los que también presentan un porcentaje más elevado de inserciones laborales con precariedad baja. En cambio, los miembros de los hogares que pertenecen a la clase obrera tienen cada vez menores probabilidades de acceso a empleos de mejor calidad (menos del 10% en La Paz y del 5% en El Alto) (Gráfico 5).

Gráfico 5
Calidad de la inserción del hogar por posición en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

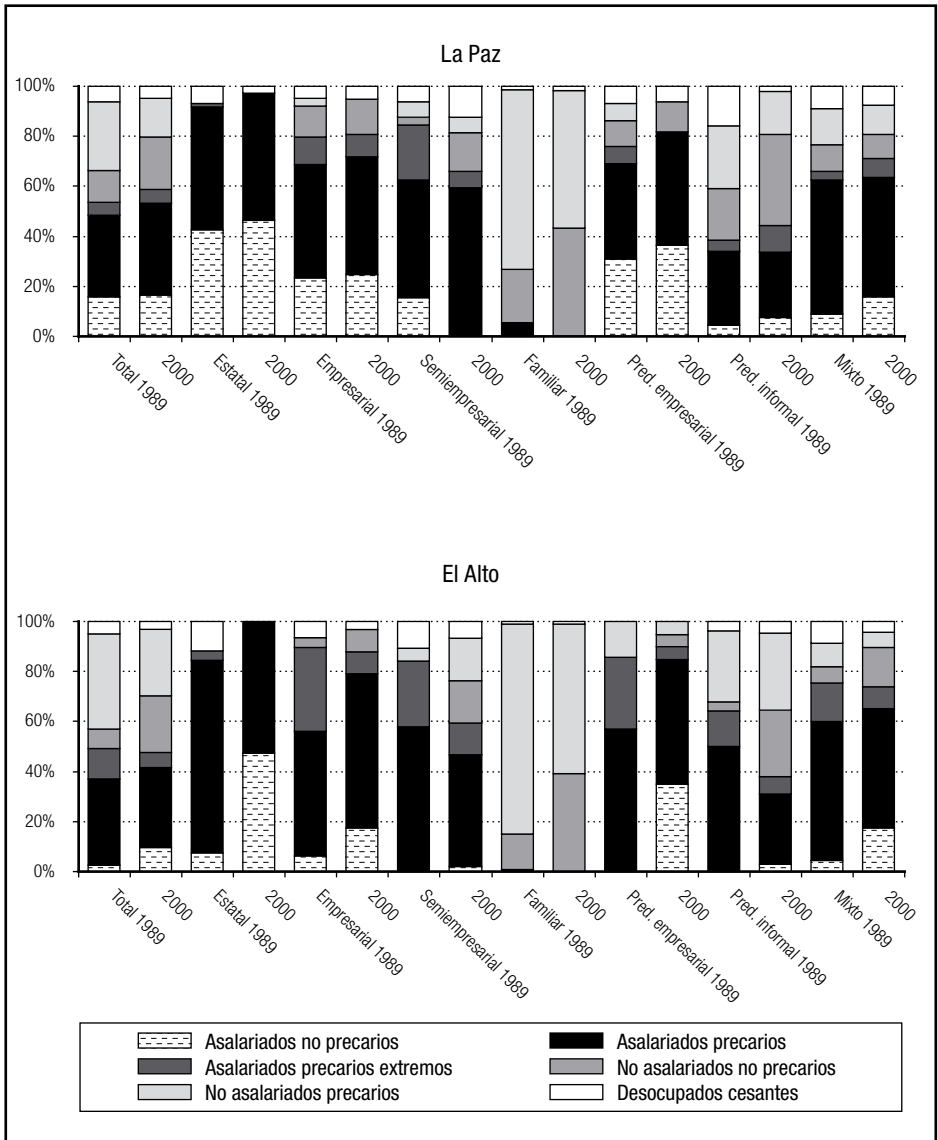
Dada la persistente pérdida de calidad del empleo en los diferentes sectores del mercado de trabajo y la brecha creciente que se observa entre los trabajadores calificados y no calificados dentro de cada sector, es cada vez más difícil asociar empleos de calidad con el mundo empresarial y empleos precarios con el mundo informal, lo que vuelve mucho más difusa la segmentación del mercado de trabajo. Varios indicadores son ilustrativos al respecto. Por un lado, centrando la mirada en los hogares con inserciones completas en un solo sector y distinguiendo entre los jefes y los miembros secundarios se observa que, en La Paz, más del 50% de los jefes asalariados del sector estatal y el 56% de los que se ocupan en el sector empresarial tienen un trabajo precario (en proporciones superiores a 1989). Si esto ocurre en las actividades “formales”, no sorprende que actualmente todos los jefes asalariados en el sector semiempresarial tengan un trabajo precario, lo que supone que están sujetos a bajos salarios y no tienen prestaciones sociales como beneficio colateral (salud y seguridad social).

Una situación más desfavorable se presenta entre los jefes de hogar asalariados de El Alto: el 53% de los ocupados en el sector estatal, el 70% de los ocupados en el sector empresarial y el 57,3% de quienes se ocupan en el sector semiempresarial tienen un empleo precario. Si bien estos indicadores habrían “mejorado” levemente en relación a 1989, son ilustrativos de que en el contexto de las políticas neoliberales el mercado laboral emerge con más fuerza que antes para configurar dinámicas de (des)integración social, habida cuenta de la mayor incertidumbre laboral e inseguridad de los ingresos.

Comparando el grado de precariedad en la calidad de los empleos asalariados de los jefes de hogar con el que presentan sus similares en el sector familiar, resulta paradójico que siendo sectores diametralmente distintos en términos tecnológicos y de productividad, las diferencias se encuentren en favor del segmento familiar. En los dos años, la proporción de inserciones precarias en el sector familiar ha pasado a ser inferior a la que se observa entre los jefes ocupados en los otros sectores, puesto que en el año 2000, el 50% tiene una inserción precaria en La Paz y el 60% en El Alto.

Este cuadro se agrava cuando se constata que la inserción de los no jefes sigue esta misma tendencia por sectores, pero con porcentajes de precariedad más altos, tanto entre los asalariados como entre los no asalariados. Con estos elementos, se evidencia claramente que hoy en día contar con un empleo en el llamado *sector formal* no es ninguna garantía de ocupación plena y que la tendencia a la precarización laboral se inclina a igualar cada vez más las condiciones de trabajo en el sector empresarial con las que existen en los sectores semiempresarial y familiar. Esta situación es más evidente cuando se trata de contextos locales con una estructura productiva asentada en formas familiares de organización de la producción y el trabajo como es El Alto (gráficos 6a y 6b).

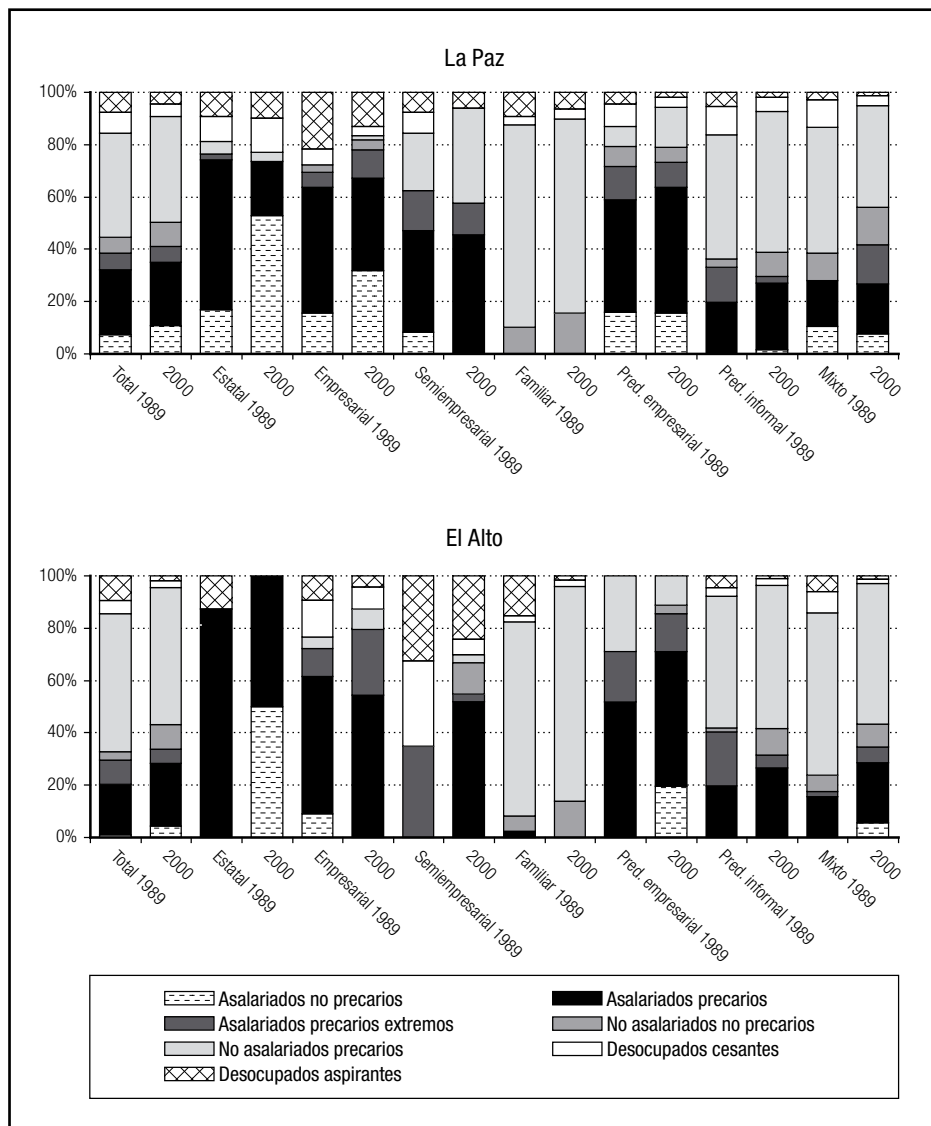
Gráfico 6a
 Tipo y calidad de inserción laboral del jefe de hogar, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Gráfico 6b

Tipo y calidad de inserción laboral de los miembros secundarios del hogar, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

La otra manera de aproximarse a estas diferencias es a partir de la situación agregada de los hogares (jefes y no jefes). En ambas ciudades,

solamente los hogares que tienen a todos sus ocupados en el sector estatal escapan del predominio de las inserciones laborales precarias (53% en La Paz y 46% en El Alto). Con todo, el sector estatal también da señales inequívocas al sector privado, puesto que avanza en procesos de flexibilidad laboral en contra del derecho laboral consagrado por la Ley General del Trabajo. Como afirma Pérez Sainz (2003), al impacto material que ha ocasionado el declive de la ocupación en el sector estatal, se añade un impacto simbólico, puesto que se pierde el referente de institucionalidad que el empleo tenía en el anterior modelo de acumulación. Aún más, con este comportamiento, su capacidad fiscalizadora para el cumplimiento de las normas laborales se debilita por la pérdida de legitimidad que ocasionan sus propias prácticas.

A partir de estas lógicas, los hogares con cualquier otro tipo de inserción por sectores presentan una calidad del empleo predominantemente precario, con una situación extrema entre aquellos con inserciones mixtas en las dos ciudades. Desde esta mirada, lo que se encuentra es que son los hogares de las clases empresariales y de las clases medias los que tienen una mayor probabilidad de inserciones no precarias para el conjunto de sus ocupados, lo que lleva a estratificaciones según la pertenencia de clase; es decir, que en función de la diferenciación social, grupos completos pasan a incorporarse en empleos precarios y no precarios.

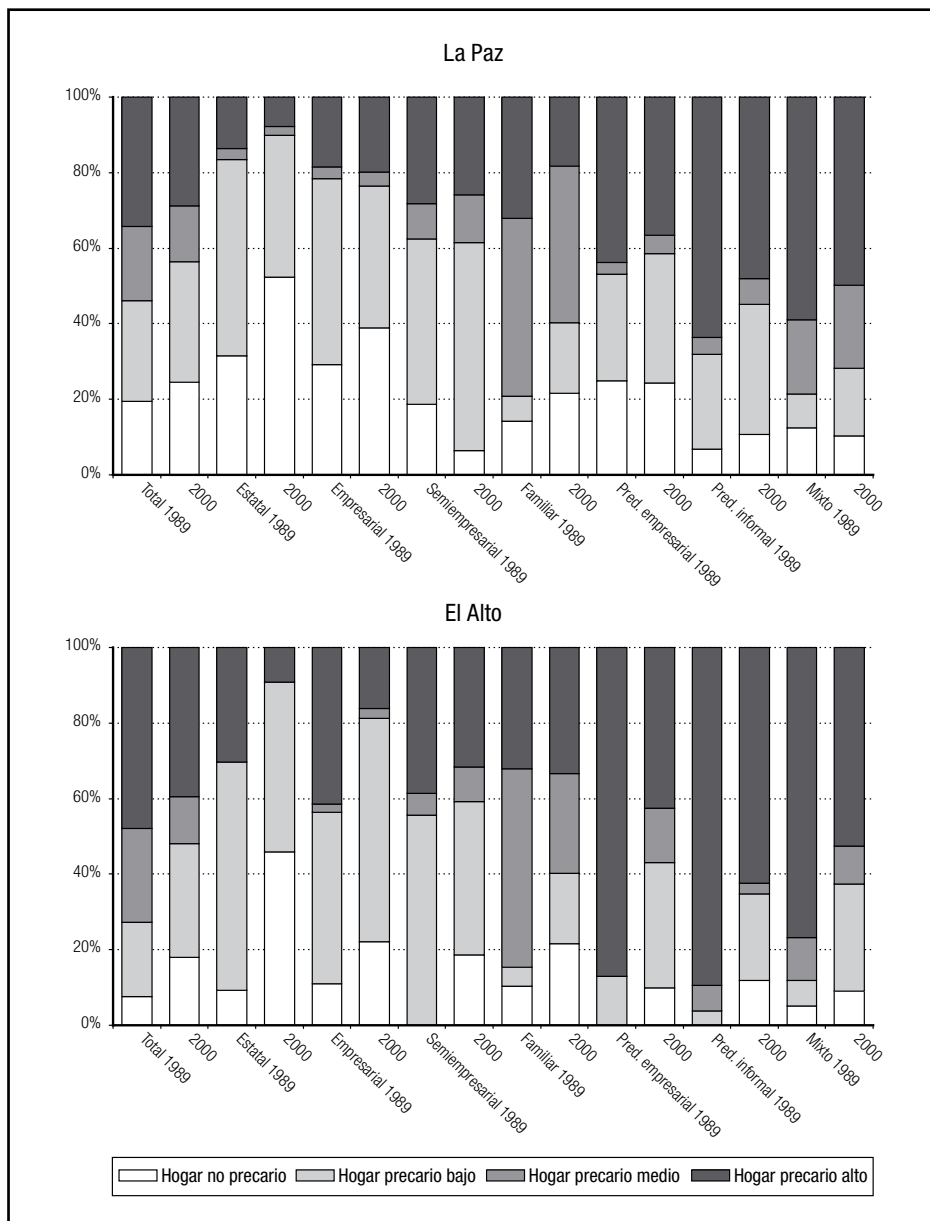
Esta es una constatación inequívoca de las segmentaciones que emergen a partir de las nuevas lógicas laborales, las cuales, lejos de la demanda social por una integración plena en las estructuras de la producción y el empleo, aceleran los procesos de desintegración social sea por la creciente inestabilidad en el empleo, la inseguridad en los ingresos, el desempleo o la desprotección social que deviene de la menor cobertura de las prestaciones sociales. En términos de sus determinantes macrosociales, estos procesos remiten a una mayor concentración de la propiedad, de la riqueza y de los ingresos laborales estimulada por una forma de intervención del Estado que ha abonado el terreno para la profundización de las inequidades sociales y la perpetuación de la pobreza (Gráfico 7).

ESTRUCTURA SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

Los cambios en la estructura del empleo constituyen un valioso recurso analítico para aproximarse a la reconfiguración de la estructura social, es decir, a la recomposición de la estructura de clases en la sociedad. Con la rápida expansión del empleo no asalariado y el declive del empleo asalariado estable y protegido, la misma tiene lugar en las dos ciudades, con características similares aunque con intensidades diferentes.

Gráfico 7

Calidad de la inserción del hogar según sector del mercado de trabajo, 1989-2000

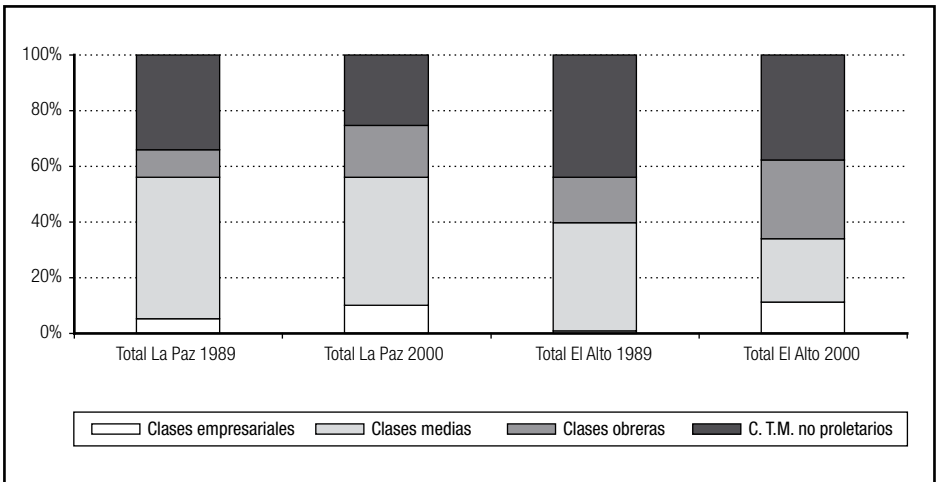


Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Se puede apreciar un aumento de los grupos sociales que pertenecen a las clases empresariales y obreras por la emergencia de iniciativas semiempresariales y empresariales, en ese orden, que tienen como asiento a estas ciudades. Con la caída del empleo estatal y la escasa dinámica de actividades empresariales que demandan mano de obra calificada, las clases medias se reducen moderadamente en La Paz y drásticamente en El Alto, mientras que la presencia relativa de los grupos de trabajadores manuales no proletarios también disminuye.

Considerando la pequeñez relativa del sector empresarial en términos del volumen de empresas, el peso de las unidades económicas de baja productividad y las tendencias a la flexibilidad laboral, las dinámicas económicas, sociales y políticas habrían llevado a consolidar una estructura social asentada en las clases medias y manuales no proletarias en La Paz y en el grupo de trabajadores manuales no proletarios y obreros no calificados en El Alto (Gráfico 8).

Gráfico 8
Posición de los hogares en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS HOGARES

Las características sociodemográficas de los hogares y su relación con la estructura social constituyen un primer aspecto a considerar para la comprensión de las orientaciones en las EFT y sus cambios en el tiempo. Entre los factores con mayor relevancia para este análisis se consideran la jefatura del hogar, el clima educativo medido por la esco-

laridad promedio de los miembros activos, el ciclo de vida¹⁴ y la condición migratoria de los hogares.

Un primer rasgo común a las dos ciudades es que la jefatura femenina no es reconocida culturalmente aun cuando las mujeres sean las principales proveedoras del hogar (menos del 16% de los hogares tiene liderazgo femenino); en El Alto, hogares con esta condición continúan concentrados en grupos de trabajadores manuales no proletarios y han aumentado entre los hogares obreros, mientras que en La Paz, se redistribuyen reduciendo su presencia entre los grupos manuales no proletarios y aumentando significativamente entre las clases medias.

El segundo rasgo tiene que ver con una importante mejora en la escolaridad promedio de los hogares en las dos ciudades. En La Paz, los hogares con nivel educativo alto (superior y posgrado) aumentan notablemente, a la vez que disminuyen a la mitad los hogares con nivel educativo muy bajo. En el año 2000, un tercio de los hogares tenía miembros con educación elevada y solamente el 14% tenía escolaridad muy baja. En la ciudad de El Alto, la mejora educativa se tradujo en una disminución de los hogares con clima educativo muy bajo (del 50 al 28%), en favor de los que presentan una escolaridad media (del 15 a 31%); pero todavía son muy pocos los hogares que presentan un clima educativo alto aunque aumentan su proporción en el total (11%). Estas diferencias tienen que ver tanto con el origen de la ciudad de El Alto (zonas y barrios paceños de menor nivel socioeconómico), como con su consolidación como principal destino de los flujos migratorios de las zonas rurales y centros urbanos intermedios del entorno del propio departamento de La Paz¹⁵.

También los cambios en el perfil educativo cruzan a la estructura de clases de manera diferenciada. En La Paz se ha reducido la proporción de hogares con perfil educativo muy bajo en todas las clases sociales; la clase empresarial ha modificado su perfil abarcando a una mayor proporción de hogares con clima educativo bajo (dejando el nivel muy bajo), mientras que la proporción de hogares con perfil educativo

14 El ciclo de vida del hogar está construido según la edad de los hijos: formación (hijo menor con menos de 4 años), expansión (hijo menor con más de 4 y menos de 14 años), consolidación (hijo menor con más de 14 y menos de 24 años), dispersión (hijo menor con más de 24 años), otros (abarca a los hogares nucleares, extendidos y compuestos, que no tienen hijos).

15 La ciudad de La Paz fue el principal centro de destino de los flujos migratorios originados en el resto del departamento del mismo nombre. El crecimiento poblacional de El Alto tuvo su origen en estas corrientes migratorias que gradualmente pasaron a fijar su residencia en esa urbe y menos en la ciudad de La Paz; en la década del noventa, El Alto pasó a ser una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico en el país, mientras que la ciudad de La Paz se consolidó como una de bajo crecimiento.

medio y alto se mantiene relativamente igual; las clases medias ahora están predominantemente conformadas por hogares con nivel educativo alto; en tanto que la clase obrera hoy abarca hogares con niveles educativos bajos y medios, dejando atrás su concentración en perfiles muy bajos. Por último, el grupo de trabajadores manuales no proletarios ha transitado hacia un perfil educativo bajo –con reducción de perfiles medios–, siendo el único que ha visto empeorar su clima educativo¹⁶.

En El Alto, también es muy importante la salida de los hogares de un clima educativo muy bajo hacia los otros niveles. Las clases empresariales se reconstituyeron con base en población más escolarizada aunque con un clima educativo inferior en comparación con La Paz, puesto que los hogares se concentran en los estratos medio y bajo. También aquí las clases medias abarcan ahora a hogares más escolarizados (nivel medio y alto), mientras que la clase obrera y el grupo de trabajadores manuales no proletarios se han reconfigurado con una mayor presencia de hogares con educación baja, manteniendo una alta proporción con educación muy baja.

Lo que ha acontecido en la última década es que las nuevas generaciones han estado expuestas a una mayor permanencia en el sistema educativo hasta alcanzar niveles técnico, medio y superior, con una propensión muy alta para avanzar hacia este último nivel. Si bien estos cambios se correlacionan con la existencia de una mayor oferta educativa privada (en algunos casos de bajo costo aunque de menor calidad), que suple las limitaciones de cobertura de la educación pública, también se vinculan con la inactividad involuntaria. Es decir que en ausencia de oportunidades de ocupación, las nuevas generaciones permanecen por más tiempo en el sistema educativo formal como actividad alternativa frente a la desocupación forzosa. Esta tendencia está presente en todas las clases sociales, con mayor o menor intensidad en función de la capacidad de los hogares para soportar los gastos por concepto de educación; de allí que las mejoras más importantes se dan en las clases medias y entre las clases empresariales, en menor grado en las clases obreras y mucho menos entre el grupo de trabajadores manuales no proletarios.

En síntesis, estos cambios muestran que en un contexto de lenta expansión de oportunidades ocupacionales y de mejora en el clima educativo de los hogares, opera un proceso de selectividad en el mercado de trabajo que ha llevado a la constitución de una clase media conformada por los hogares con la mayor escolaridad promedio y a consolidar una

16 Este rasgo deriva del constante crecimiento de los ocupados en las actividades terciarias tradicionales que presentan menores barreras de ingreso para las personas con baja escolaridad (comercio y servicios personales diversos).

clase manual no proletaria compuesta por los hogares más pobres a los que se asocia un clima educativo bajo y muy bajo. Asimismo, ha llevado a una configuración más diversa de las clases empresarias con un aumento en los hogares con nivel educativo bajo (semiempresarios), mientras que la clase obrera se nutre de hogares más escolarizados, aunque sin perder peso entre aquellos con escolaridad baja.

Cuando los logros educativos no están acompañados de procesos de reestructuración de la economía y el mercado de trabajo capaces de dinamizar la demanda de fuerza laboral calificada, el resultado no solamente es la creciente subutilización de la mano de obra, sino también un mayor nivel de desempleo abierto “ilustrado”. En la base de esta tensión se encuentra la separación entre los objetivos de las políticas económicas y sociales, como también entre la estructura productiva y el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos en el país, que se han acentuado con la aplicación de las políticas neoliberales.

La tercera característica refiere a la condición migratoria de los hogares; en ambas ciudades, excepto por la concentración de hogares compuestos por migrantes recientes en la clase obrera y de hogares de no migrantes en las clases medias, no se encuentran otros rasgos que ameriten un análisis más detenido. No obstante, por definición son lo suficientemente ilustrativos de la existencia de oportunidades distintas en función del lugar de nacimiento, el origen rural o urbano o el tiempo de residencia en las ciudades.

Una cuarta característica vinculada con las EFT es el ciclo vital de los hogares. Estructuralmente, después de once años, los hogares de La Paz presentan mejores condiciones en términos de disponibilidad de fuerza laboral, ya que más de la mitad se encuentra en una fase de expansión y consolidación; en cambio, El Alto, que cobija un elevado porcentaje de población migrante reciente, presenta una composición sesgada hacia hogares en formación y expansión. A partir de este atributo, se observa un mayor potencial movilizador de fuerza de trabajo en los hogares de La Paz, con excepción de los que pertenecen a la clase obrera, mientras que esta condición solamente está presente en las clases empresariales en El Alto.

Finalmente, además del ciclo vital, el tamaño de los hogares es otro factor relevante para la movilización de sus miembros al mercado laboral. En las dos ciudades, este indicador muestra el predominio de familias nucleares¹⁷ (con hijos y sin hijos), con tamaños similares al promedio na-

17 La estructura de los hogares se define a partir de la relación familiar de los miembros del hogar: monoparental (jefe de hogar sin cónyuge, con hijos), nuclear sin hijos (jefe de hogar y cónyuge, sin hijos), nuclear con hijos (jefe de hogar y cónyuge, con hijos), extendido (jefe de hogar con cónyuge o sin cónyuge, con hijos o sin hijos y con otros

cional (4,3 personas), en porcentajes que van del 60 al 70% en La Paz y El Alto respectivamente. Como en otros momentos, las familias extendidas o compuestas no han tenido ni tienen un peso importante (17% o menos), y las monoparentales representan un porcentaje inferior al 13%.

Las diferencias entre períodos muestran una clara tendencia a la nuclearización, siguiendo un proceso similar al de la región a partir de la década del ochenta y sobre la base del cual se vienen cuestionando paradigmas que asignan al capital social y a las redes sociales y de reciprocidad una excesiva importancia como medios para avanzar en la superación de la pobreza. Ni aun en el ámbito de la familia –como red primaria de solidaridad– parecen existir las condiciones materiales para mantener estructuras familiares compuestas o extendidas. La solidaridad primaria no parece trascender a los padres de los cónyuges y a los hijos, tal como se infiere de la baja presencia de hogares compuestos¹⁸. Además, con el tiempo, solamente las clases obrera y manual no proletaria en La Paz, y las clases media y manual no proletaria en El Alto siguen albergando familias extendidas, aunque en una proporción cada vez menor con el paso del tiempo.

En resumen, los hogares en las dos ciudades son básicamente nucleares, biparentales con jefatura “culturalmente aceptada” masculina y con liderazgo femenino en ascenso en los grupos manuales no proletarios y la clase media. En general, presentan perfiles educativos más altos respecto al año base. En La Paz, se encuentran en un ciclo vital que determina una composición por edades de los hijos concentrada en los grupos con mayor propensión a la participación en la actividad económica y que ejercen una mayor presión sobre el trabajo asalariado; en cambio, en El Alto aún predominan los hogares en formación o más jóvenes, lo que, sin embargo, no parece constituirse en una limitación para una mayor concurrencia al mercado laboral, por la elevada presencia de unidades económicas organizadas en torno al núcleo familiar.

Por esto se insiste en que los atributos constitutivos y adquiridos de los hogares se conjugan con los factores que provienen del mercado de trabajo para configurar las formas de inserción laboral y, por lo tanto, el contenido y las prácticas de las estrategias familiares de trabajo. A continuación se analizan por separado estos dos aspectos (cuadros 3a y 3b).

parientes), compuesto (jefe de hogar con cónyuge o sin cónyuge, con hijos o sin hijos, con otros parientes y otros no parientes), unipersonal (sólo jefe de hogar).

18 Hogares conformados por miembros emparentados entre sí y miembros sin relación sanguínea.

Cuadro 3a

Características sociodemográficas de los hogares por posición en la estructura social, 1989-2000

La Paz	Posición en la estructura social									
	Clases empresariales		Clases medias		Clases obreras		Trabajadores manuales no proletarios		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Sexo del jefe										
Hombre	95,7	92,9	93,2	87,2	97,1	96,6	71,7	65,2	86,1	83,9
Mujer	4,3	7,1	6,8	12,8	2,9	3,4	28,3	34,8	13,9	16,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Clima educativo										
Muy Bajo	30,4	14,9	16,8	7,7	40,0	17,4	42,1	25,1	28,9	14,7
Bajo	17,4	36,3	23,6	10,6	28,6	48,5	26,2	46,6	24,6	29,5
Medio	17,4	15,7	23,0	22,5	31,4	30,7	24,8	16,1	24,1	21,7
Alto	34,8	33,0	36,6	59,2	-	3,4	6,9	12,2	22,3	34,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Condición migratoria										
Migrantes recientes	-	-	4,8	2,0	8,6	8,4	5,5	2,4	5,1	3,1
Migrantes antiguos	13,0	16,0	15,9	19,0	8,6	12,4	14,5	11,0	14,6	15,4
No migrantes	34,8	28,0	38,6	45,0	48,6	34,8	35,9	31,9	38,3	38,1
Migrantes y no migrantes	52,2	56,0	40,6	34,0	34,3	44,4	44,1	54,6	42,0	43,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ciclo de vida										
En formación	34,8	22,8	40,1	21,1	42,9	33,5	32,4	23,5	37,3	24,2
En expansión	39,1	36,3	28,5	34,0	28,6	37,1	26,9	29,4	28,5	33,6
Consolidación	13,0	24,9	10,6	21,5	2,9	7,1	18,6	29,6	12,9	21,3
En dispersión	4,3	-	4,8	4,4	-	1,7	4,1	6,1	4,1	3,9
Otros	8,7	16,0	15,9	19,0	25,7	20,6	17,9	11,4	17,1	17,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tamaño del hogar										
Unipersonal	-	12,9	5,3	5,4	11,4	3,2	9,7	5,3	7,1	5,7
2-3	8,7	19,8	27,1	36,7	42,9	37,6	29,0	22,6	28,0	31,6
4-5	47,8	39,4	45,4	44,1	17,1	30,0	37,2	49,7	40,2	42,5
6 y más	43,5	27,9	22,2	13,7	28,6	29,2	24,1	22,4	24,6	20,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Cuadro 3a [continuación]

La Paz	Posición en la estructura social									
	Clases empresariales		Clases medias		Clases obreras		Trabajadores manuales no proletarios		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Tipo de hogar										
Monoparental	-	6,1	3,9	13,5	2,9	3,4	22,1	21,4	10,0	12,9
Nuclear sin hijos	-	-	7,7	6,1	11,4	8,4	2,8	3,7	5,9	5,3
Nuclear con hijos	52,2	71,8	64,3	55,4	68,6	62,2	52,4	50,2	59,8	57,0
Familia extendida	39,1	9,2	17,4	16,2	5,7	22,8	11,7	19,4	15,6	17,5
Compuesta	8,7	-	1,4	3,4	-	-	1,4	-	1,7	1,6
Unipersonal	-	12,9	5,3	5,4	11,4	3,2	9,7	5,3	7,1	5,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Cuadro 3b

Características sociodemográficas de los hogares por posición en la estructura social, 1989-2000

El Alto	Posición en la estructura social									
	Clases empresariales		Clases medias		Clases obreras		Trabajadores manuales no proletarios		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Sexo del jefe										
Hombre	100,0	100,0	91,6	88,9	97,3	97,0	77,0	78,4	85,7	88,5
Mujer	-	-	8,4	11,1	2,7	3,0	23,0	21,6	14,3	11,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Clima educativo										
Muy bajo	100,0	20,0	37,5	12,4	40,5	27,9	60,0	40,4	49,1	28,2
Bajo	-	35,0	27,9	13,8	29,7	34,0	32,8	33,9	30,1	29,5
Medio	-	40,0	21,2	37,5	29,7	36,0	7,2	21,1	15,6	31,2
Alto	-	5,0	13,5	36,4	-	2,0	-	4,5	5,2	11,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Condición migratoria										
Migrantes recientes	-	2,5	9,3	3,7	29,7	12,9	15,9	8,9	15,0	8,1
Migrantes antiguos	33,3	25,0	31,8	24,5	29,7	28,6	37,3	28,1	34,1	27,1

Cuadro 3b [continuación]

El Alto	Posición en la estructura social									
	Clases empresariales		Clases medias		Clases obreras		Trabajadores manuales no proletarios		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
No migrantes	33,3	27,5	15,0	19,8	10,8	19,8	8,7	14,2	11,7	18,6
Migrantes y no migrantes	33,3	45,0	43,9	52,0	29,7	38,7	38,1	48,7	39,2	46,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ciclo de vida										
En formación	33,3	12,5	45,8	45,5	51,4	46,6	42,9	43,2	45,1	41,2
En expansión	66,7	47,5	29,9	34,7	32,4	32,6	24,6	26,8	28,2	32,6
Consolidación	-	32,5	10,3	12,4	2,7	14,9	14,3	15,7	11,0	16,6
En dispersión	-	2,5	1,9	-	-	-	1,6	3,0	1,5	1,4
Otros	-	5,0	12,1	7,4	13,5	5,9	16,7	11,2	14,3	8,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tamaño del hogar										
Unipersonal	-	2,5	5,6	-	-	-	4,8	2,2	4,4	1,1
2-3	-	22,5	20,6	27,0	27,0	19,7	34,9	26,8	27,8	24,3
4-5	66,7	50,0	35,5	47,0	35,1	46,6	33,3	36,6	34,8	43,3
6 y más	33,3	25,0	38,3	26,0	37,8	33,7	27,0	34,4	33,0	31,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo de hogar										
Monoparental	-	7,5	6,5	11,1	2,7	5,9	19,0	18,0	11,7	11,8
Nuclear sin hijos	-	-	5,6	1,2	8,1	5,0	7,9	3,0	7,0	2,8
Nuclear con hijos	100,0	77,5	60,7	71,5	73,0	80,2	56,3	61,1	60,8	70,7
Familia extendida	-	10,0	19,6	16,1	16,2	8,9	10,3	14,9	14,7	12,9
Compuesta	-	2,5	1,9	-	-	-	1,6	0,7	1,5	0,6
Unipersonal	-	2,5	5,6	-	-	-	4,8	2,2	4,4	1,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOGARES

Considerando el conjunto de características de los hogares, son dos rasgos los que cobran mayor relevancia en la explicación del tipo y la calidad de inserción laboral logrados: la jefatura masculina o femeni-

na del hogar y el clima educativo. Ambas presentan especificidades en función del período y de la ciudad de que se trate¹⁹.

Una primera constatación muestra que existen importantes diferencias en la inserción laboral dependiendo del liderazgo masculino o femenino del hogar. Considerando el año base, en La Paz, los hogares con jefe varón presentaban inserciones laborales diversificadas con un sesgo hacia lo familiar, estatal y mixto, donde estas últimas solamente reforzaban un patrón orientado hacia lo empresarial. En el año 2000, con la caída del empleo estatal, este patrón se reconfigura dando lugar a inserciones que se distribuyen por igual (puras o combinadas) entre lo empresarial y lo informal. En cambio, en los hogares dirigidos por una mujer, inicialmente las oportunidades de inserción de sus miembros se cerraban en torno al sector familiar, con despliegues siempre alrededor de lo informal en estrecha correlación con la expansión de estas formas de organización de la producción y del trabajo; hacia 2000, sin que lo informal deje de ser la forma dominante de ocupación, estos hogares amplían sus inserciones laborales hacia el sector empresarial, siempre por debajo de las oportunidades de los hogares dirigidos por un varón. Esta variante se vincula con el origen social de las mujeres jefas de hogar, que con el tiempo abarca un mayor porcentaje que pertenece a las clases medias²⁰.

En El Alto, tanto la estructura de inserción laboral como las diferencias según el sexo del jefe de hogar se mantienen en los dos momentos. Los hogares con jefes varones se distribuyen por igual entre inserciones en los sectores empresarial e informal, mientras que los hogares dirigidos por una mujer consolidan su presencia en el sector familiar y en torno a combinaciones con lo informal (Gráfico 9).

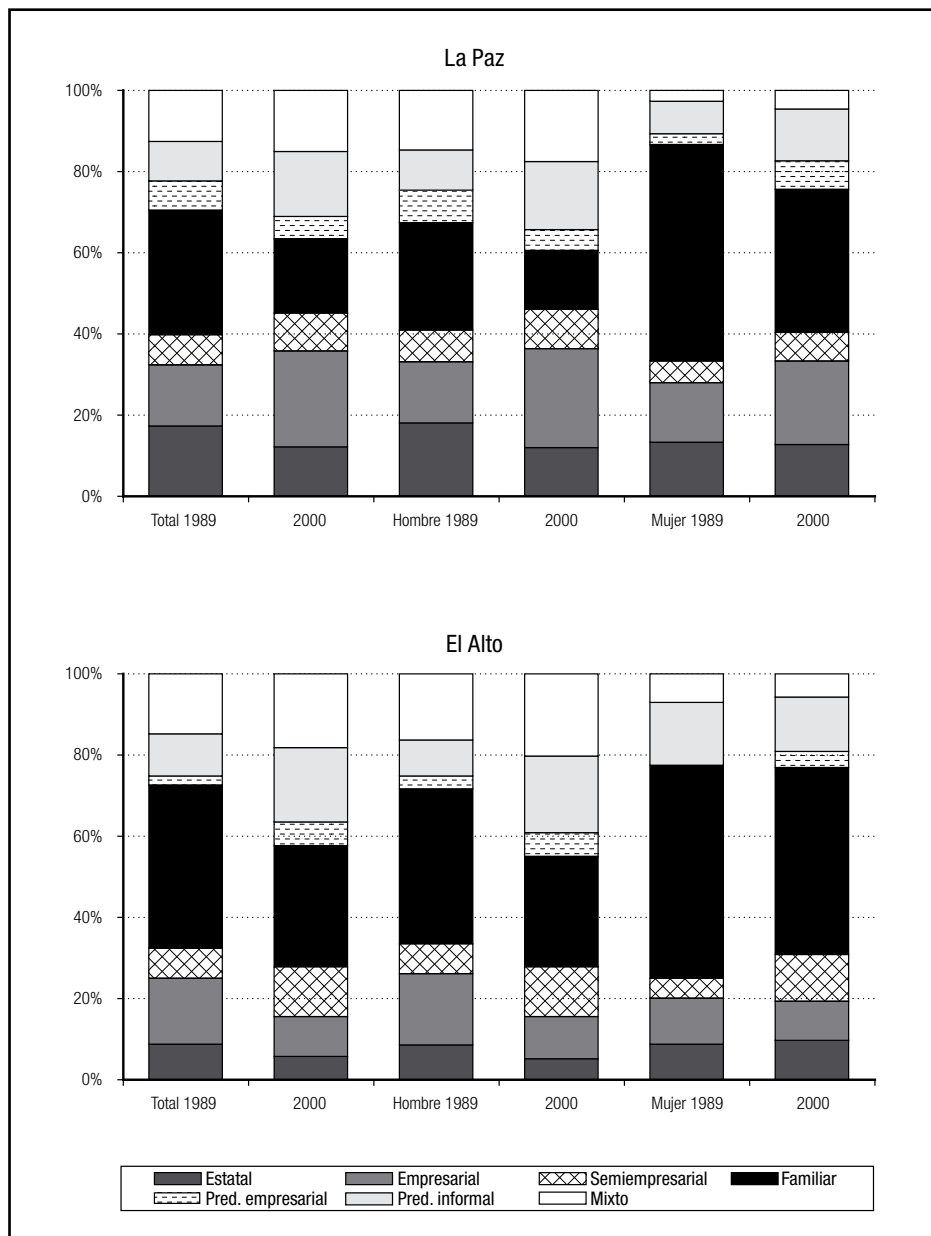
De esta manera, no solamente se expresan las tendencias diferenciadas en las dos ciudades, sino que se revelan las restricciones de acceso al sector empresarial –público y privado– que presentan los miembros de los hogares liderados por una mujer, una situación que puede estar asociada con un menor nivel educativo medio entre los miembros de sus hogares y, por lo tanto, con la presencia dominante de este grupo en torno a actividades económicas familiares, y la discriminación de las mujeres en el acceso a empleos asalariados, calificados y no calificados.

En realidad, lo que se viene constatando es que la educación constituye la variable intermedia más relevante en la explicación del

19 Conviene recordar que en este análisis el *tipo de inserción laboral* remite al sector del mercado de trabajo que ocupa a todos los miembros activos de cada hogar.

20 En 1989, la jefatura femenina estaba fuertemente concentrada en los hogares que pertenecen a las clases manuales no proletarias; hacia el año 2000, en particular en La Paz, se nutre de aquellos que pertenecen a las clases medias.

Gráfico 9
 Tipo de inserción laboral según sexo del jefe de hogar, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

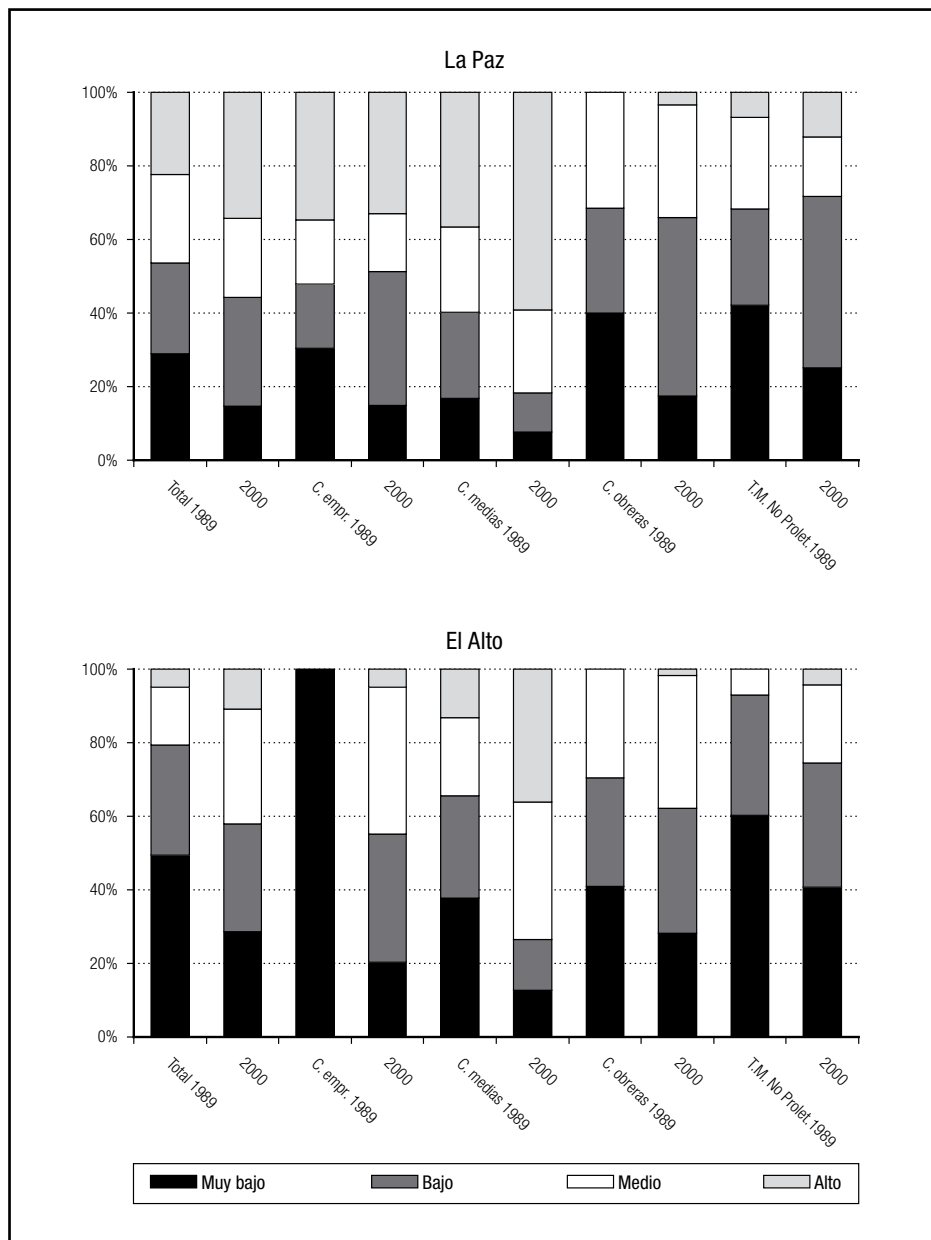
tipo de inserción laboral de los hogares. A medida que el mercado de trabajo opera con una mayor selectividad en función de la educación –sobre todo en lo que hace al empleo asalariado–, las oportunidades se segmentan profundamente en función de este atributo de los hogares.

Con un clima educativo bajo o muy bajo, las oportunidades de inserción se reducen al espectro del sector familiar y a todos los otros tipos que presentan una vinculación con lo informal. En el otro extremo, con una educación media o alta, las oportunidades fueron y siguen siendo mucho más abiertas en el sector empresarial y estatal. La única diferencia entre los dos momentos es que ciertos hogares con clima educativo bajo y muy bajo presentan un mayor porcentaje de inserciones mixtas, lo que se debe a un mayor acceso a empleos asalariados de los miembros más escolarizados (por lo general, los más jóvenes) en los sectores empresarial, estatal o semiempresarial. A su vez, la única diferencia entre las dos ciudades es que en El Alto, aun con un perfil educativo medio, existen mayores restricciones para ocuparse en el sector empresarial público y privado ya que, en un contexto de fuerte aumento de la oferta laboral y de escasa generación de empleos en estos sectores, ni siquiera se abren espacios para los miembros más escolarizados (Gráfico 10).

En cuanto a la calidad de las inserciones laborales, también los hogares liderados por una mujer están más expuestos a inserciones precarias, con mayor intensidad hacia el año 2000. Una diferencia se presenta en el año base en El Alto, donde aquellos hogares dirigidos por un varón se encontraban en mayor desventaja debido a un mayor desempleo entre los hombres; para el año 2000, este trayecto se modera y nuevamente esta condición tiene mayor peso entre los hogares con jefatura femenina. Esta tendencia se vincula con el mayor peso que tienen las mujeres en actividades independientes que se desarrollan con escasos recursos complementarios al trabajo, lo que repercute en menores ingresos y desprotección social para sus ocupados. De esto se infiere que la inserción de los jefes –sobre todo en los hogares más pobres– condiciona el tipo y calidad de inserción laboral de los miembros secundarios.

Si se relaciona este aspecto con el perfil educativo, los cambios ameritan un análisis más detenido. Es decir que no parece existir una correlación lineal entre un mayor nivel educativo y una mejor calidad de la inserción laboral de los hogares; cuando la actividad económica empresarial se retrae y las oportunidades ocupacionales transitan en el entorno de los sectores tecnológicamente más atrasados, ni siquiera un nivel educativo alto parece garantizar inserciones laborales plenas; aunque ciertamente brindan mayores probabilidades de acceso a las mejores oportunidades de empleo.

Gráfico 10
 Tipo de inserción laboral según clima educativo del hogar, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Esto se observa claramente en el trayecto de la relación perfil educativo alto-calidad del empleo en El Alto y en la comparación con La Paz. Pertenecer a un hogar con perfil educativo alto tiene un mayor retorno en la calidad de inserción en La Paz que en El Alto. Así, una base material para la producción tecnológicamente atrasada como la que caracteriza a El Alto no permite una ocupación plena ni siquiera a su fuerza laboral más calificada; lo más probable es que los hogares que dentro de este estrato logran una inserción plena se encuentren laboralmente vinculados a empresas o unidades económicas con asiento en La Paz²¹.

Analizando esta relación en su conjunto, la mejora relativa en el perfil educativo de los hogares se ha traducido en un leve aumento de inserciones laborales plenas y una disminución también leve de inserciones precarias altas (todos sus miembros en esta condición): en La Paz, el 6% en cada extremo y en El Alto, el 10% en cada lado. En La Paz, los hogares con perfil educativo bajo y muy bajo que han visto empeorar su situación permanecen concentrados en inserciones con precariedad alta y media, a la vez que disminuye su participación en inserciones plenas o con precariedad baja; esto significa que tanto sus miembros asalariados como no asalariados actualmente sólo acceden a las ocupaciones de más baja calidad. En cambio, en El Alto, estos grupos de hogares habrían ganado terreno en el campo de las oportunidades menos precarias, en comparación con 1989 –sin superar su concentración en la precariedad alta–, básicamente a partir de una mejor posición del grupo conformado por los *no asalariados exitosos*.

En una situación intermedia, se ubican los hogares con niveles educativos medios que han mantenido una inserción no precaria o precaria baja en estrecha relación con las mayores oportunidades que este perfil les brinda para el acceso a empleos en los sectores empresarial y estatal, aunque no siempre en los puestos de mayor jerarquía ocupacional. Con todo, cerca de un tercio en las dos ciudades todavía presenta inserciones con precariedad alta.

Con mayor frecuencia, los empleos de mejor calidad, en los puestos más estables y mejor remunerados de los sectores empresarial y estatal, están restringidos a los hogares más escolarizados en La Paz, y cada vez menos hogares de este grupo presentan inserciones precarias altas. Como se adelantó, no ocurre lo mismo en El Alto, donde si bien

21 Hay que recordar que espacialmente la división entre las dos ciudades es prácticamente es inexistente; se trata de un *continuum* con flujos importantes entre ambas. Un estudio reciente del municipio paceño ha establecido que alrededor de 160 mil personas por día se mueven entre las dos ciudades, tanto por razones laborales como educativas, lo que muestra que, aun siendo la tercera ciudad más grande del país, presenta una estructura de oportunidades cada vez más divorciada de las necesidades y características de su población.

con este perfil educativo se presentan mayores oportunidades en estos mismos sectores, no logran acceder a puestos de trabajo que les aseguren inserciones plenas, sino básicamente aquellas con precariedad más atenuada; también aquí, los hogares con este perfil educativo ya han dejado atrás su trayecto de inserciones precarias altas.

De esta manera se verifica que la inserción laboral depende tanto de las características educativas de los hogares como de la estructura de oportunidades que se presentan con estas; en contextos con alta informalidad en los mercados de trabajo y/o con sectores empresariales con baja demanda de mano de obra calificada, los mayores logros educativos corren el riesgo de traducirse en un mayor subempleo antes que en inserciones plenas o, de manera cada vez más frecuente, en desempleo, en particular entre los miembros secundarios de los hogares (Gráfico 11).

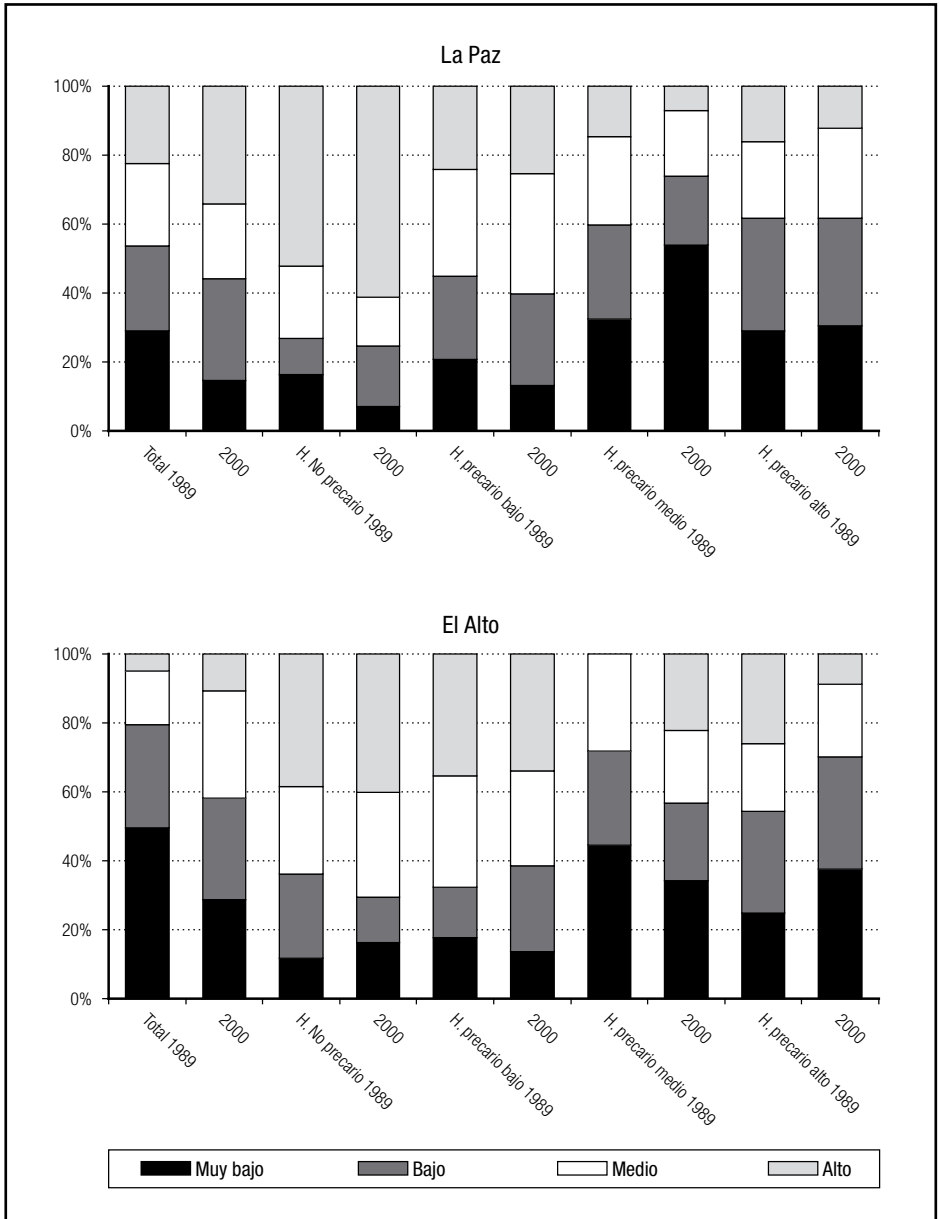
LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO

En este acápite se analizan las principales características de las EFT, su relación con la inserción laboral de los hogares –discutidas hasta ahora en un plano general– y sus resultados en la conformación del ingreso familiar.

La relación entre las EFT y la inserción laboral de los hogares debe entenderse en el contexto más amplio de crisis del empleo en el sector empresarial, que con el tiempo no solamente se origina en el sector público sino también en el sector privado, y de un aumento en las tasas de participación en la actividad económica. La mayor concurrencia al mercado laboral, entre las mujeres y los jóvenes de ambos sexos, comenzó a ser intensa a finales de la década del ochenta y mantiene un ritmo creciente hasta el año 2000, impulsado tanto por el deterioro de los ingresos laborales de los principales perceptores como por la mejora en el perfil educativo de la fuerza laboral.

Sin embargo, aunque los miembros secundarios de los hogares no solamente necesitan trabajar sino que quieren y están en capacidad de hacerlo con la escolaridad que han alcanzado, en los dos momentos se enfrentan a un escenario económico restrictivo que reduce las oportunidades de empleo; hacia 2000, a este contexto se suma la baja calidad en la oferta de empleos asalariados y una mayor polarización de la demanda de mano de obra, calificada y no calificada, ante la escasa generación de empleos que requieren calificaciones medias y bajas; asimismo, después de un crecimiento explosivo del sector familiar, se evidencia la saturación de espacios del mercado para el ingreso de nuevos trabajadores en los volúmenes antes conocidos, con su efecto de arrastre sobre las oportunidades de ocupación para otros miembros de los hogares.

Gráfico 11
Calidad de inserción laboral según clima educativo del hogar, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Frente a estas condiciones del mercado de trabajo, un primer aspecto de la discusión busca responder a los cambios en la intensidad de la concurrencia de los miembros de los hogares a la actividad económica y su composición. En 1989, como resultado de la aplicación de las políticas de estabilización y ajuste estructural en la reducción del ingreso per cápita, la tasa de participación global se había elevado a un nivel nunca conocido, tanto en el conjunto urbano nacional como en las dos ciudades consideradas en este estudio; así, el rápido aumento de la oferta laboral es parte de un proceso que se inicia a principios de los años ochenta, se acelera hacia fines de la década y se proyecta –aunque con un ritmo más pausado– a lo largo de la década siguiente.

En este contexto, la trayectoria de las tasas de participación es relativamente similar en las dos ciudades y progresa a un ritmo igual hasta asemejarse también en 2000. Las diferencias se encuentran en su composición según sexos y posición en la familia de los miembros de los hogares. En El Alto, la participación masculina es más elevada como consecuencia de un retraso en la edad de retiro de los jefes de hogar –debido a su menor acceso a las prestaciones de jubilación– y a la mayor concurrencia de los hijos mayores de 18 años en comparación con La Paz. En cambio, la participación de las mujeres es más alta en La Paz, lo que obedece, sobre todo, a una mayor concurrencia de las hijas menores y mayores de 18 años, así como de los *otros parientes* femeninos de los hogares. En ambas ciudades, la participación de las mujeres cónyuges es creciente; si bien fue más alta al inicio en La Paz, con el tiempo también las tasas tendieron a igualarse.

Mientras se evidencia que la oferta laboral se nutre crecientemente de mujeres cónyuges y jóvenes de ambos sexos, también se observa que entre períodos, sin dejar de ser muy alta, se retrae la salida de los hijos de 18 años mayormente en El Alto. Este comportamiento se asocia con la reducción de oportunidades de empleo asalariado a las que aspira este grupo poblacional y a las mayores limitaciones para mantenerse como trabajadores no remunerados. A medida que su salida al mercado laboral no se traduce en ocupación efectiva, no solamente aumenta el desempleo abierto sino también la inactividad involuntaria. De allí que la mayor permanencia en el sistema educativo guarde una estrecha relación con las dificultades que encuentran los jóvenes para incorporarse al mercado de trabajo. Esta situación también está presente en La Paz, donde la concurrencia de este grupo poblacional a la actividad económica no solamente es menor sino que se expresa también en elevadas tasas de desempleo abierto (Cuadro 4).

De esta manera, es posible concluir que en la base de las EFT se encuentra la permanencia por más tiempo de los jefes de hogar y la mayor participación de las cónyuges en la actividad económica, mientras

Cuadro 4

Tasas de participación en la actividad económica por posición en la familia según sexo, 1989-2000 (en %)

La Paz	1989			2000		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total	52,8	61,7	44,5	56,4	63,1	50,4
Jefe	86,8	91,0	68,5	83,8	89,4	64,8
Cónyuge	54,8	100,0	54,6	58,7	25,0	59,5
Hijos 10 a 17 años	6,9	5,7	8,1	11,1	8,8	13,5
Hijos 18 y más años	51,5	48,8	54,2	52,7	54,3	51,0
Otros miembros	37,5	48,7	30,8	43,0	37,8	46,6

El Alto	1989			2000		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total	53,2	65,2	41,2	57,2	66,2	48,3
Jefe	92,5	93,2	88,3	90,1	93,2	73,5
Cónyuge	45,1	0,0	45,3	60,2	0,0	60,4
Hijos 10 a 17 años	12,9	10,8	14,8	10,7	10,6	10,8
Hijos 18 y más años	60,4	65,4	52,7	55,9	62,6	46,4
Otros miembros	39,0	42,9	36,7	43,0	54,0	38,3

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

que, dependiendo de la dinámica del ciclo económico, del tamaño del hogar, de la fase del ciclo vital y de la suficiencia del ingreso familiar para satisfacer sus necesidades básicas, los hogares pueden o no desplegar a otros miembros a la actividad económica.

En lo que respecta a la capacidad efectiva de movilización, se observa que, en La Paz, los hogares que tienen un solo miembro ocupado disminuyen ligeramente con el tiempo en favor de aquellos que tienen tres o más miembros activos. En El Alto, la tendencia es más bien hacia una fuerte disminución de los hogares con un activo para engrosar el grupo de los que tienen dos, tres o más miembros en la actividad económica. Si se comparan los ingresos medios de los jefes de hogar, se encuentra que son comparativamente más altos en La Paz y se distancian mucho más hacia el año 2000; por lo tanto, esta evolución apoyaría

la hipótesis de una mayor presión de oferta de los hogares en función de los bajos ingresos de sus principales perceptores, en tanto variable intermedia definitoria del ingreso per cápita del hogar.

En efecto, considerando al grupo de hogares con tres o más activos, que hacia 2000 representaban cerca del 20% en las dos ciudades, se observa que son aquellos de mayor tamaño (1,5 veces más grandes que el promedio), con un ingreso laboral del jefe inferior al promedio en La Paz e igual al promedio, pero comparativamente más bajo, en El Alto, lo que alude a un ingreso familiar per cápita reducido. Por lo tanto, se trataría de un grupo expuesto a inserciones laborales más inestables, que no brindan seguridad en los ingresos, en puestos de trabajo menos calificados y sujetos a bajos salarios. Bajo esta modalidad de inserción, el ingreso de uno o dos perceptores es insuficiente para satisfacer sus diversas necesidades, y los hogares se ven forzados a movilizar a más miembros potencialmente activos –sea al trabajo asalariado o no asalariado– con la expectativa de mantener o alcanzar un umbral mínimo que les asegure la subsistencia.

Estos rasgos son completamente inversos entre los hogares que tienen un solo miembro activo y se ubican en un punto intermedio entre aquellos que movilizan a dos personas activas; de esta manera, se concluye que el tamaño del hogar, la edad de los activos y el ingreso per cápita del hogar son factores importantes para explicar tanto la capacidad como la necesidad de movilizar a los miembros de los hogares a la actividad económica (Cuadro 5).

Cuadro 5
Hogares según número de personas activas, 1989-2000 (en %)

Personas activas	La Paz		El Alto	
	1989	2000	1989	2000
Un activo	43,2	40,5	46,1	32,6
Dos activos	40,1	40,8	39,1	46,9
Tres y más activos	16,7	18,7	14,8	20,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Algunos autores señalan que las EFT no dependen tanto de lo que las familias quieren sino de lo que pueden lograr con la estructura de oportunidades que se presentan, dados ciertos atributos adscriptos o adquiridos de las personas (Salvia y Ticera, 2000); evidencias al respecto se

encuentran en el grupo de hogares con tres o más activos. En el año 2000, que marca una etapa de crisis económica y recesión, se observa que la mayor movilización laboral de los hogares no siempre está acompañada por el logro efectivo de una ocupación, sino también de episodios de desempleo e inactividad; asimismo, que la ocupación efectiva no siempre está asociada a la percepción de un ingreso, es decir que en buena parte depende de la existencia de una actividad económica familiar más que de oportunidades en el mercado de trabajo asalariado. Estos rasgos, que también se encuentran entre los hogares con dos activos y comprenden a las dos ciudades, no son más que una expresión de los límites que presenta el comportamiento del mercado de trabajo para el despliegue de un mayor esfuerzo laboral en el marco de las EFT.

Finalmente, desde la perspectiva de estructura social, se observa que los hogares que pertenecen a las clases empresarias y al estrato manual no proletario son los que han seguido una estrategia de mayor movilización de sus miembros hacia el año 2000, con una fuerte presencia en el grupo de tres y más, lo que parece consistente con las mayores posibilidades que tienen para combinar inserciones en el mercado de trabajo asalariado y no asalariado. Claramente, para los hogares de las clases medias, este despliegue está más limitado por la reducción de oportunidades del empleo asalariado al que aspiran (en particular en La Paz), mientras que entre los hogares de la clase obrera los límites parecen situarse en torno a los dos activos (Gráfico 12).

Un segundo aspecto de la discusión se refiere a dónde se incorporan laboralmente los miembros de los hogares; aquí se busca establecer la relación entre las características de los miembros activos y las oportunidades que tienen con estas en el mercado laboral (tipo y calidad de la inserción ocupacional), como elementos que en la práctica cotidiana de los hogares configuran las EFT. Para avanzar en este análisis se distingue a los hogares en dos grupos: con un activo y con dos o más activos.

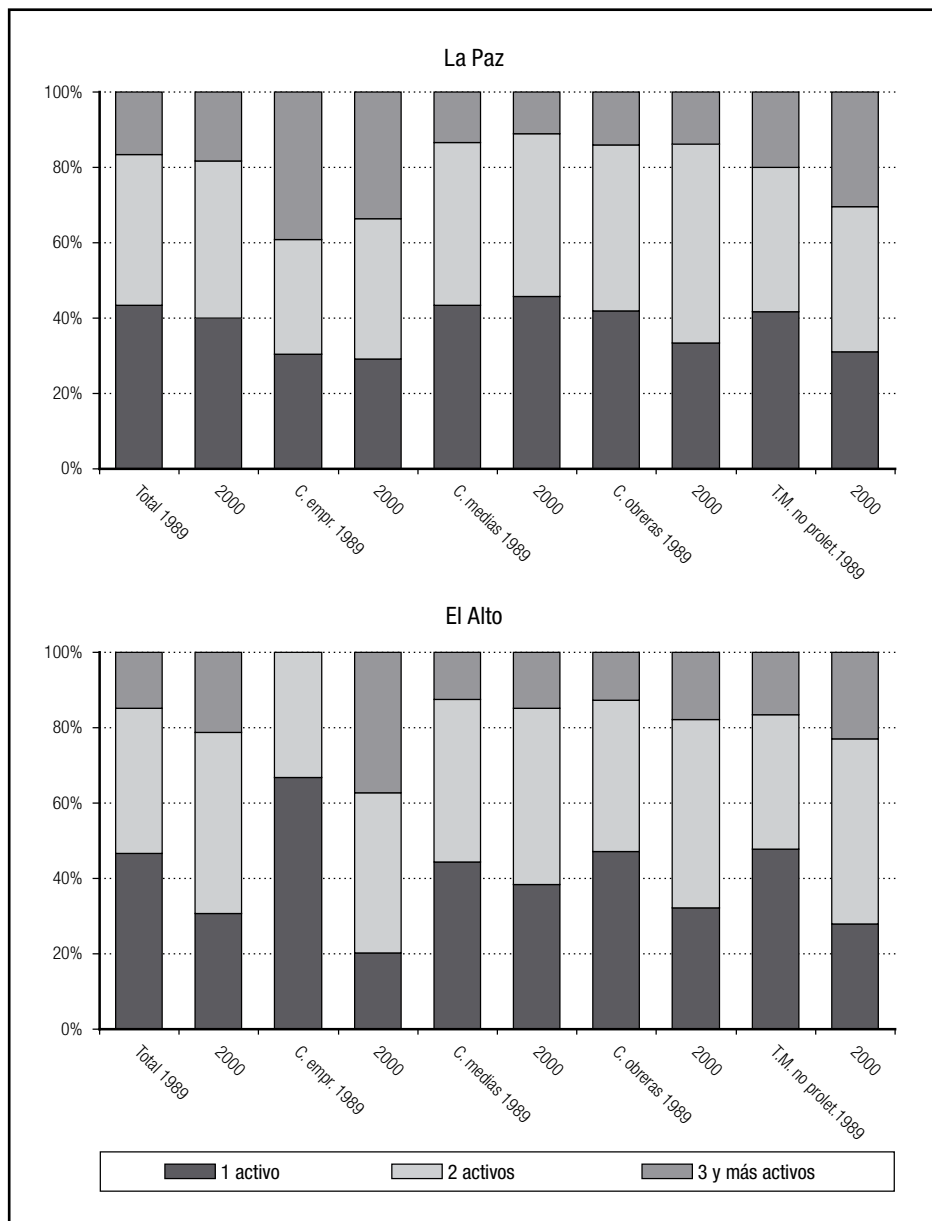
HOGARES CON UN MIEMBRO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Este grupo está compuesto por hogares con un tamaño inferior al promedio, con una fuerza laboral en edades adultas mayores (a los que se asocia mayor experiencia laboral y/o antigüedad en el empleo u oficio) y relativamente más escolarizada. Con sus especificidades, estas características son similares en las dos ciudades²² y en los dos períodos; con estos atributos diferenciales, los hogares logran formas de inserción

22 En general, en El Alto los hogares son más grandes, la población es relativamente más joven y con un perfil educativo promedio menor en comparación con La Paz.

Gráfico 12

Mobilización laboral del hogar según posición en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

laboral comparativamente más ventajosas, a medida que se suceden transformaciones en el mercado laboral.

Con el crecimiento explosivo del sector familiar originado en la caída de los ingresos familiares y la mayor movilización de los miembros de los hogares a la actividad económica hacia 1989, en La Paz, las oportunidades ocupacionales para este grupo se distribuían por igual entre los sectores empresarial e informal, con un fuerte peso en actividades de corte familiar dentro de este último (37%). En El Alto, predominaba la inserción en el sector informal (60%) también con un peso dominante en las actividades familiares (47%). En ambas ciudades, la probabilidad de contar con un empleo en el sector empresarial –público y privado– estaba en función del nivel educativo; solamente quienes contaban con una educación superior (La Paz) o por encima del ciclo básico completo (El Alto) se hallaban selectivamente incorporados en estos. Claramente, quienes no tenían, al menos, una escolaridad equivalente al básico completo se encontraban relegados a los empleos no asalariados en el sector familiar (en su mayoría mujeres) o en el sector semiempresarial (titulares y asalariados).

Hacia el año 2000, el patrón de inserción de este grupo cambia totalmente al paso en que la discriminación por criterios de escolaridad y experiencia aumenta en el mercado laboral. En La Paz, el 63% de los ocupados se incorpora al sector empresarial (con fuerte peso en el sector privado). Quienes transitan por el sector informal también presentan un perfil educativo más alto y tienen una actividad consolidada dada su antigüedad en la ocupación. En El Alto, la propensión al empleo en el sector empresarial disminuye (38%), pasando a concentrar solamente a quienes tienen un perfil educativo superior o medio, es decir más alto que en 1989; mientras el peso de las inserciones en el sector informal es mayor (62%), ocurre un cambio en su composición interna, puesto que la probabilidad de insertarse en el sector semiempresarial es mayor respecto al familiar.

A partir de estas tendencias, es posible arribar a dos conclusiones importantes respecto a las EFT. En primer lugar, el hecho de que este grupo se mantenga con un solo activo parece responder a una situación privilegiada de la inserción laboral de sus miembros, ya sea en términos de la posición que ocupan en la estructura ocupacional o en términos de la calidad de su ocupación. En general –aunque no exclusivamente– se trataría de jefes de hogar ubicados en empleos estables o que ofrecen mayor seguridad en los ingresos y que perciben un salario o ingreso más alto que el resto de los principales perceptores²³. Además, dados

23 Son miembros activos que también presentan una insignificante exposición a situaciones de desempleo abierto.

su tamaño y estructura de edades promedio, se trataría de un grupo compuesto básicamente por hogares en consolidación o expansión que presentan una menor tasa de dependencia²⁴ y, por lo tanto, cuentan con un ingreso per cápita que les garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de sus miembros.

Las conclusiones anteriores se sustentan, por una parte, en el perfil educativo de los activos incorporados en el sector empresarial (superior completo en La Paz y medio en El Alto), con los que se asocian mejores posiciones y calidad del empleo. Pero también, y más aún en El Alto, con la mayor probabilidad de ubicarse en ocupaciones no precarias en los sectores semiempresarial y familiar. El tránsito desde lo familiar a lo semiempresarial en la estructura de inserción en El Alto no es más que una de las expresiones de la presencia de actividades más consolidadas y *exitosas* entre quienes se ocupan en el sector informal²⁵. Por último, se trata también de hogares que por su consolidación ya han satisfecho necesidades de vivienda y otros bienes duraderos del hogar o que cuentan con recursos complementarios al ingreso que provee el único perceptor²⁶.

En efecto, los indicadores de la calidad de inserción laboral de estos hogares muestran que desde 1989, y todavía más con el paso del tiempo, esta es predominantemente no precaria o precaria baja en las dos ciudades (más del 66%), mientras tiende a desaparecer la precariedad alta, lo que lleva a reafirmar la relación que existe entre la calidad de inserción de los principales perceptores de ingreso del hogar y las EFT que despliegan los hogares (Gráfico 13).

HOGARES CON MÁS DE UN MIEMBRO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

A diferencia del grupo anterior, en las dos ciudades estos hogares tienen un mayor número de miembros, una estructura de edades más joven de su fuerza laboral y un clima educativo más bajo. A pesar de una mejora sustantiva en el promedio general, hacia el año 2000, la brecha educativa absoluta respecto a los hogares con un solo activo se amplía en más de 2,5 años de estudio. El promedio de activos (2,5) es cada vez mayor en La Paz, aunque con mayores índices de desempleo; este promedio disminuye en El Alto (de 2,4 a 2,0), lo que estaría asociado con

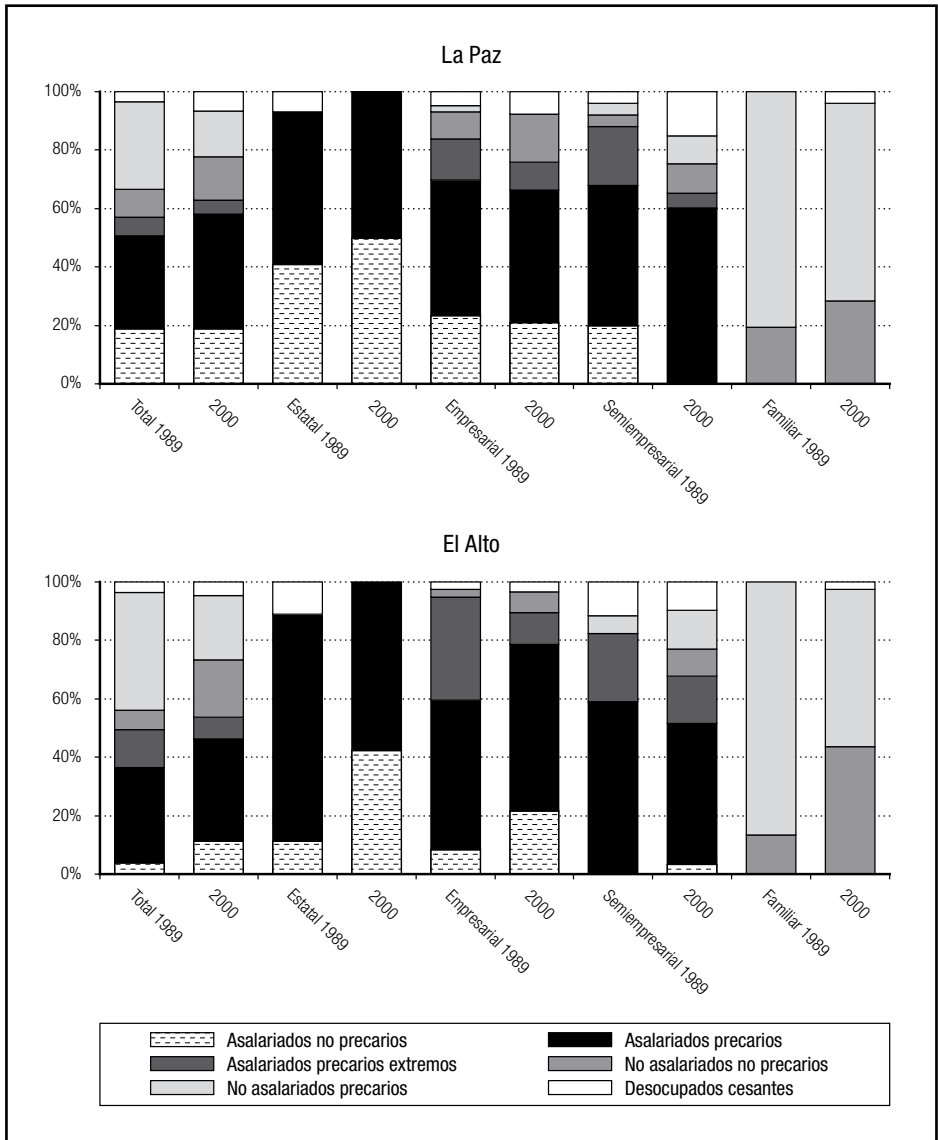
24 La tasa de dependencia es la relación entre los perceptores de ingreso y el número de personas en el hogar.

25 Generalmente, el origen de los pequeños talleres semiempresariales es una actividad familiar próspera que con su expansión lleva a demandar fuerza de trabajo asalariada.

26 En estos hogares existen perceptores de ingreso por concepto de jubilación (generalmente, jefes de hogar), lo que también reduce la urgencia para desplegar a un mayor número de activos.

Gráfico 13

Hogares con un activo: calidad de inserción laboral por sector del mercado de trabajo, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

una mayor inactividad involuntaria, tal como sugiere la reducción de los índices de desempleo entre los dos períodos.

Con estas características, las probabilidades de que todos los miembros de los hogares se incorporen en un solo sector son muy escasas y disminuyen con el tiempo, salvo en situaciones donde existe una actividad económica familiar²⁷. Así se refuerza un patrón de inserción que, desde las estrategias de trabajo de los hogares, genera articulaciones muy diversas entre los sectores empresarial e informal.

En La Paz, después de haber tenido un peso igual, pasan a predominar las inserciones combinadas en los sectores informal y empresarial (60%), posiblemente por un mayor acceso de los jóvenes a este último. A diferencia del grupo con un solo activo, el vínculo con lo informal sigue siendo la característica dominante, tanto en inserciones combinadas como completas en un solo sector. Con este trayecto, las inserciones completas en el sector empresarial se reducen del 20 al 17%. En El Alto, esta tendencia es similar, puesto que las inserciones combinadas aumentan hasta alcanzar al 62% de los hogares; sin embargo, el vínculo con lo informal es dominante, de manera que solamente el 5% de los hogares (menos que en 1989) logra inserciones completas en el sector empresarial.

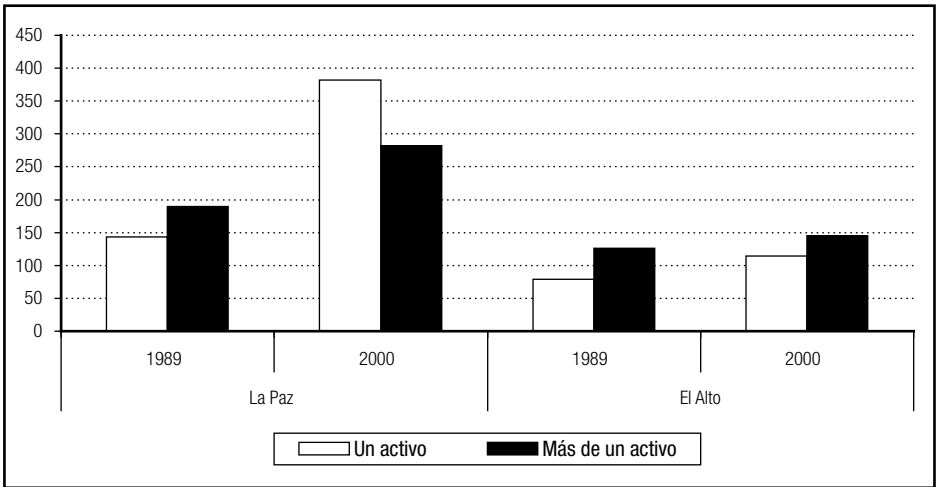
Con este panorama que muestra un mayor deterioro de la inserción laboral en este grupo, no resulta sorprendente que una fracción importante de los hogares –sobre todo aquellos que tienen un ingreso familiar per cápita más bajo o ingresos inestables– se vean obligados a seguir movilizándose a su fuerza laboral para garantizar la satisfacción de sus más diversas necesidades; asimismo, se advierte que en las EFT ya no parece interesar tanto dónde se ocupa la gente sino, básicamente, la posibilidad de generar algún ingreso por muy reducido que este sea (Gráfico 14).

De esta manera, a partir de las restricciones y discriminaciones que se presentan en el mercado laboral y el contenido de las EFT, en este grupo se configura un patrón de inserción laboral orientado por la búsqueda de condiciones mínimas para la reproducción de la fuerza de trabajo, esquivando, cuando se puede, al desempleo abierto y aprovechando todos los resquicios posibles en los mercados de trabajo y de bienes y servicios para mejorar sus ingresos (Gráfico 15).

Los indicadores de calidad del empleo muestran las mayores dificultades que enfrenta este grupo de hogares para el logro de inserciones plenas o no precarias. A pesar de un aumento en su proporción, en La Paz, apenas en uno de cada cuatro hogares y, en El Alto, en uno de cada diez (muy por debajo del grupo anterior), todos sus miembros

27 Si bien las inserciones completas en torno al sector familiar son cada vez menores, en El Alto todavía abarcan a uno de cada cuatro hogares de este grupo.

Gráfico 14
Ingreso per cápita en hogares con un activo y más de un activo, 1989-2000



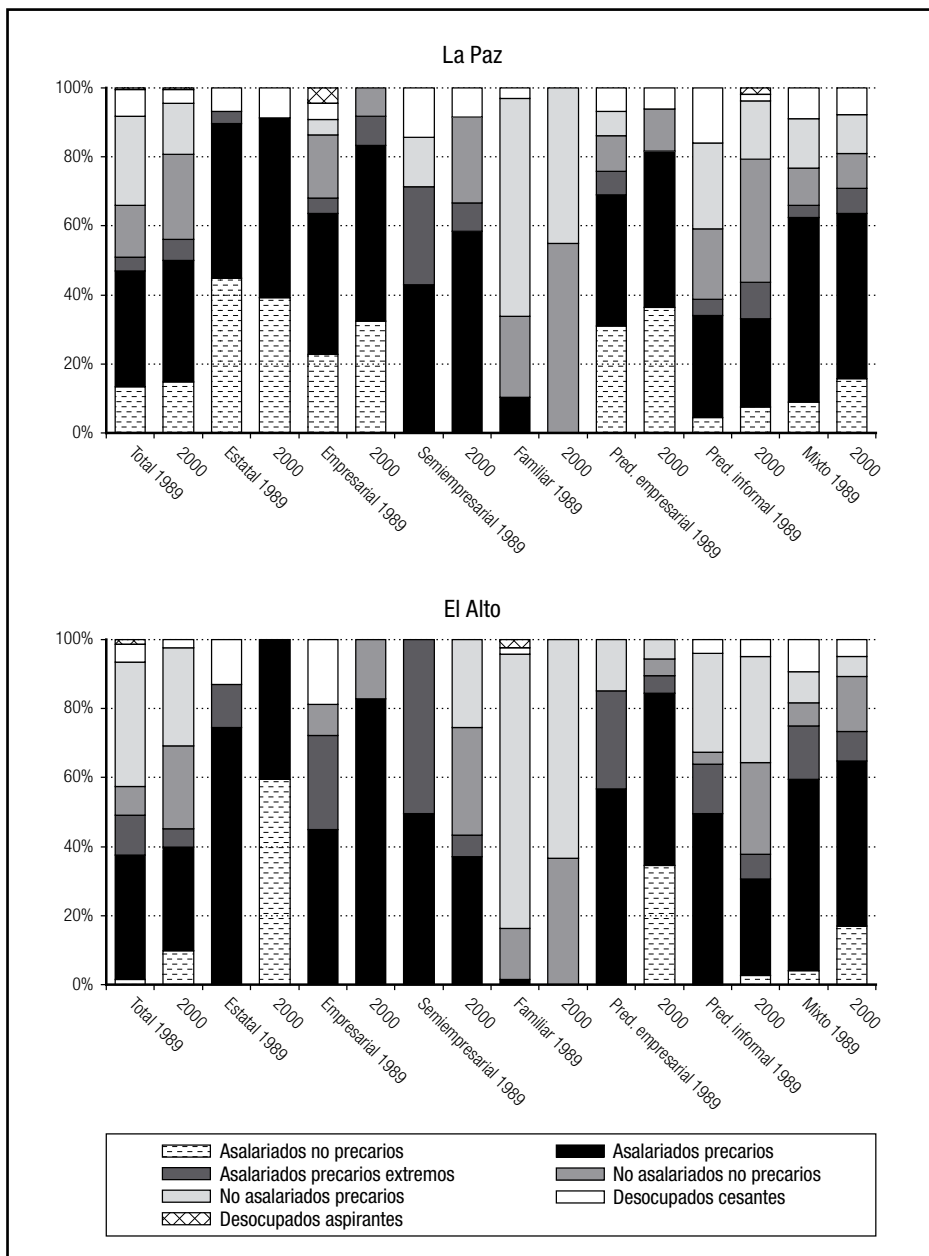
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

trabajan en esta condición. Asimismo, mientras en La Paz los hogares con inserción precaria aparecen menos concentrados en el estrato de precariedad alta (del 53 al 28%), en El Alto este todavía abarca al 53% de los hogares. Nuevamente las probabilidades de lograr inserciones plenas o con precariedad baja se vinculan con un mayor perfil educativo promedio; sin embargo, esta variable es menos explicativa en el caso de los hogares con situación precaria media y alta, lo que estaría mostrando que existen otros factores de discriminación y exclusión en el funcionamiento del mercado de trabajo, como pueden ser el sexo, la edad de los activos o el origen social o étnico del hogar.

Otro aspecto a tomar en cuenta para explicar la situación laboral más desventajosa en este grupo de hogares tiene que ver con las características de las unidades económicas familiares y semiempresariales que lideran y cuya importancia es cada vez mayor para la ocupación de la fuerza laboral de las dos ciudades, tanto bajo modalidades completas como mixtas. Si bien estas son más diversas en el uso de recursos complementarios al trabajo y, por lo tanto, en términos de productividad y acceso a los mercados, en su mayoría operan con muy bajo capital, con base en la mano de obra familiar no remunerada y/o con un número flotante de trabajadores asalariados. Debido a estos factores, que aluden a una menor capacidad competitiva, ofrecen las peores condiciones laborales tanto a los asalariados como a los no asalariados, lo que explica la persistencia de hogares con extrema precariedad laboral, en particular en El Alto.

Gráfico 15

Hogares con más de un activo: calidad de inserción laboral por sector del mercado de trabajo, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

ESTRATEGIAS DE TRABAJO E INGRESOS DE LOS HOGARES

Una vez conocidas las estrategias de trabajo que despliegan los hogares, se busca precisar el resultado o retorno que estas tienen sobre el nivel del ingreso familiar. La hipótesis que se plantea es que una mayor movilización de los miembros de los hogares a la actividad económica no asegura por sí misma un mayor nivel de ingresos y que este depende, en último término, del tipo y la calidad de la inserción laboral del jefe de hogar y de los miembros secundarios.

MOVILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Y COMPOSICIÓN DEL INGRESO FAMILIAR

Un primer aspecto para adelantar esta discusión se refiere a los cambios en la composición del ingreso familiar según la posición en la familia de los perceptores. Esta aproximación permitirá establecer los retornos de un mayor esfuerzo laboral, en particular entre los no jefes, expresado en su contribución porcentual al ingreso familiar. Para ello, se considera la pertenencia a una determinada clase o grupo social y la calidad de la inserción laboral de los hogares.

Considerando el conjunto de los hogares, se evidencia que, ya en 1989, el aporte de los jefes al ingreso familiar era relativamente reducido y se destaca también la importancia que comenzaba a adquirir la contribución del resto de los miembros para restaurar los niveles preexistentes o mejorarlos; en los dos años y en las dos ciudades, en promedio, no más de un tercio del ingreso familiar correspondía al aporte de los jefes de hogar; a medida que las políticas de libre contratación y las estrategias de reducción de costos laborales se difunden entre las empresas del sector privado, el ingreso único de los jefes de hogar pasa a ser absolutamente insuficiente para satisfacer las diversas necesidades en más del 60% de los hogares.

Una segunda constatación se refiere a la reducida contribución promedio de las cónyuges en la composición del ingreso familiar y su disminución porcentual hacia el año 2000 (no más del 17%), lo que remite a un cuadro crítico de exposición a las formas de empleo precario de las mujeres adultas, cuya importancia en la movilización de la fuerza de trabajo familiar es crucial²⁸. De esta manera, un alto porcentaje de los hogares enfrenta la urgencia de movilizar a los hijos y *otros miem-*

28 Esta característica es apenas un indicador de cómo, sobre la base de la división sexual del trabajo, se continúa construyendo la inequidad en las oportunidades de mujeres y hombres en el mercado laboral y se refuerza el mito del proveedor masculino y el *salario complementario* femenino, lo que otorga a las mujeres un lugar periférico en el mercado de trabajo y explica, en buena medida, las diferencias de la contribución entre hombres y mujeres.

bros, quienes con una presencia creciente han pasado a contribuir con cerca de la mitad del ingreso familiar en promedio, y donde el aporte específico de los hijos representa entre el 30 y el 36% en La Paz y El Alto, respectivamente. En otros términos, la centralidad del aporte de los jefes de hogar estaría en descenso, mientras que el aporte de los hijos cobra una importancia equivalente en la constitución del ingreso familiar²⁹. Salvando el caso de los hogares de clase media en La Paz, donde los jefes participan, en el año 2000, con el 44% del ingreso total, y el de los trabajadores manuales en El Alto, donde este porcentaje es muy inferior al promedio (28%), estas características son similares en los hogares de todos los estratos sociales³⁰ (Gráfico 16).

Esta aparente homogeneidad se matiza cuando se considera la calidad de la inserción del hogar. Se encuentra, nuevamente, una situación de clara ventaja entre los hogares con inserción plena, donde la contribución superior al promedio de los distintos miembros activos de los hogares se expresa también en un nivel de ingresos más elevado. Debido a estas condiciones, las EFT en estos hogares no abarcan, por ejemplo, a los hijos menores de edad. No obstante, si se tiene en cuenta que solamente una quinta parte del conjunto de los hogares se beneficia de esta situación, es posible concluir que para el 80% restante, la persistencia o aumento de inserciones laborales precarias, en particular entre los jefes de hogar y cónyuges, es un factor que induce a una mayor movilización de nuevos miembros a la actividad económica en un proceso de ajuste constante de sus EFT.

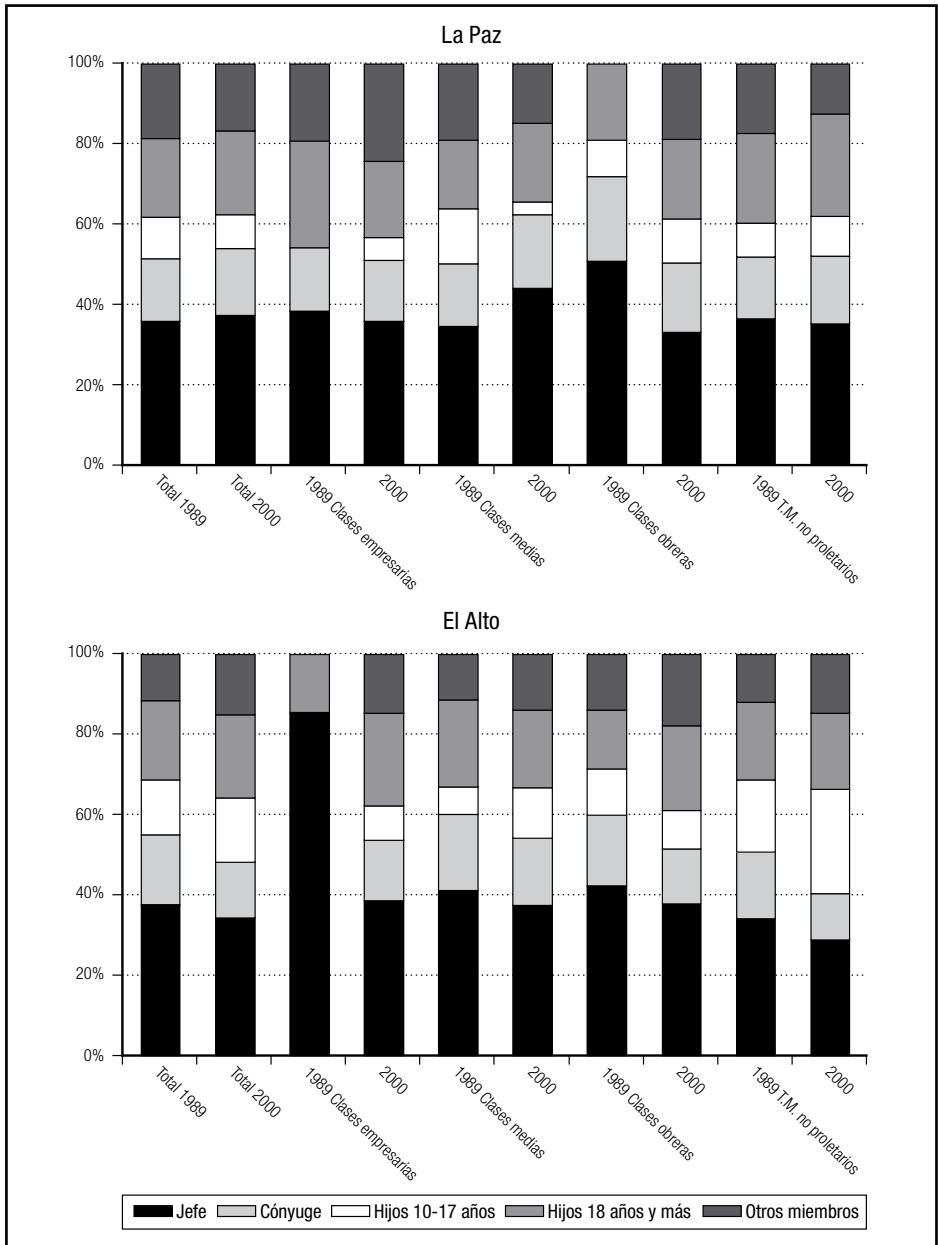
Sin embargo, en un proceso de ida y vuelta, así como la dinámica y las condiciones del mercado de trabajo estructuran las condiciones de constitución, modificación o reproducción de las EFT, los arreglos resultantes también están modificando las condiciones en que se desenvuelve el mercado de trabajo; de esta manera, las EFT parecen haber sido ampliamente funcionales a las estrategias de abaratamiento de costos laborales en los sectores que demandan mano de obra asalariada, en particular no calificada.

El aumento en la fuerza laboral de los hogares, específicamente entre aquellos que pertenecen a los estratos más pobres de la distribución, intensifica la competencia laboral por los escasos puestos de trabajo disponibles, actuando como depresor de los salarios y facilitando las

29 Esto es posible no solamente por la elevada participación de los hijos en la actividad económica sino también por una nupcialidad tardía provocada por la permanente inseguridad en el empleo.

30 Excepto en las clases medias, en La Paz es notoria la reducción del aporte de los jefes de hogar entre 1989 y 2000, lo que ha llevado a que los ingresos en estos hogares pasen a depender fundamentalmente de los otros miembros.

Gráfico 16
Composición del ingreso familiar por posición en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

más diversas formas de flexibilidad salarial, en un escenario en el que la libre contratación ha abierto paso a la negociación entre las partes en desmedro de la negociación colectiva y la acción sindical. El resultado es una distribución funcional regresiva del ingreso, donde las altas tasas de ganancia y acumulación contrastan con el estancamiento o la lenta evolución de los salarios para la mayor parte de los trabajadores.

En el marco de estos procesos que permiten objetivar la relación entre la dinámica macroeconómica y social y las EFT, se analizan sus resultados sobre el comportamiento de evolución de los ingresos familiares.

TIPO Y CALIDAD DE LA INSERCIÓN E INGRESOS LABORALES

Vinculando el análisis de las EFT con la evolución de los ingresos familiares, en un nivel general, se destacan dos tendencias: el aumento en el número promedio de perceptores de ingreso³¹ y un crecimiento importante en el ingreso real promedio de los hogares, sin que se pueda establecer una relación lineal entre uno y otro. En efecto, si bien se puede constatar que la mayor concurrencia a la actividad económica entre los miembros de los hogares ha estado acompañada de un mayor número de perceptores de ingreso –en comparación con 1989, cuando la brecha entre ocupados y perceptores de ingreso era más amplia–, este factor no explica de manera suficiente la evolución positiva de los ingresos familiares reales.

Existen otros factores macroeconómicos y de las EFT que permiten enmarcar la discusión sobre su crecimiento; en primer lugar, la diferencia en la tasa de inflación entre 1989 (16%) y 2000 (4%) cuya incidencia en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios e ingresos es significativa; en segundo lugar, la recuperación de los ingresos reales hacia el año 2000, que sigue a una fase de fuerte disminución de la mano de obra no calificada y específicamente de los trabajadores eventuales (luego de un aumento sostenido hasta 1997) –habida cuenta de los bajos salarios que rigen en la economía para este núcleo de trabajadores, su disminución tiene un efecto “hacia arriba” en el nivel de los salarios medios; y, finalmente, la ampliación de la jornada mensual de trabajo del conjunto de los miembros de los hogares, lo que muestra que un incremento en el ingreso promedio estaría también en función de un mayor esfuerzo laboral, asociada tanto a un mayor número de ocupados como al aumento efectivo de las jornadas de trabajo.

Sin embargo, como se puede apreciar a partir de la comparación entre ciudades, más trabajo y más extensión e intensidad de trabajo

31 Siempre por debajo del número de ocupados por hogar debido a la presencia de trabajadores familiares sin remuneración que contribuyen indirectamente en la conformación del ingreso total de los hogares.

tienen una incidencia menor en la evolución de los ingresos en El Alto en comparación con La Paz, lo que exige continuar explorando las condiciones bajo las cuales un mayor nivel de ingreso familiar medio se vincula con otras características de las EFT, entendidas en un sentido amplio de arreglos de trabajo donde interactúan el entorno y las prácticas de los hogares.

Para este propósito, se recurre al uso de indicadores de ingreso laboral diferenciados según el tipo y la calidad de la inserción laboral de los hogares, distinguiendo entre las dos ciudades; a pesar de que tienen en común arreglos laborales y funciones económicas de sus miembros, la brecha de ingresos familiares promedio entre ambas es notable en favor de La Paz, lo que alude a especificidades que exigen un análisis particular para cada ciudad.

Con referencia a La Paz, tomando en cuenta el tipo de inserción de los hogares en el mercado de trabajo, se constata que un mayor ingreso familiar promedio depende, en los dos momentos, del logro de una inserción completa en el sector empresarial –público o privado– o de combinaciones con un ancla en lo empresarial, la misma que se encuentra al alcance de cerca del 40% de los hogares. Además, la situación parece más ventajosa para este grupo hacia el año 2000, por cuanto se pueden lograr mejores niveles de ingreso manteniendo o reduciendo el número medio de perceptores y sin un incremento en la jornada laboral del hogar. Es el caso de aquellos con inserción completa en el sector empresarial privado quienes, con menos perceptores y con una jornada inferior al promedio, han logrado alcanzar un ingreso superior al promedio general en un 60%.

En contraste, al tipo de inserción completa en los sectores familiar, semiempresarial o con un ancla en lo informal sigue correspondiendo un ingreso familiar muy por debajo del promedio (60% de los hogares), aun a pesar de un mayor esfuerzo laboral tanto a través de un aumento en el número de perceptores como de la ampliación en las jornadas laborales mensuales promedio hacia 2000. El caso extremo se ubica entre los hogares con inserción completa en el sector familiar, donde incluso con extensas jornadas laborales de su mano de obra ocupada (más de 100 horas por encima del promedio en 2000), apenas logran alcanzar un monto equivalente a un tercio del ingreso promedio total³².

32 En estos hogares el número de perceptores es inferior al promedio, lo que no significa una menor movilización de su fuerza de trabajo, puesto que una parte de sus miembros se encuentra ocupado como familiares no remunerados cuya contribución al ingreso familiar es indirecta. Es precisamente al aumento en esta categoría de trabajadores que obedece la elevada la carga horaria mensual de trabajo en este grupo de hogares.

En medio de estos dos extremos, los hogares que han logrado una inserción mixta (15% del total), con un mismo esfuerzo laboral en los dos años, presentan ingresos por encima del promedio. En general, cuando las oportunidades así lo permiten, la articulación de los sectores empresarial y familiar parece repercutir en mejores ingresos familiares en comparación con inserciones completas en los sectores semiempresarial y familiar (Cuadro 6a).

Cuadro 6a

La Paz: indicadores de ingresos por tipo de inserción laboral del hogar, 1989-2000 (en Bs. de 1990)

Indicadores de ingresos	Tipo de inserción del hogar															
	Estatatal		Empresarial		Semiempresarial		Familiar		Pred. empresarial		Pred. informal		Mixto		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Perceptores de ingresos*	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	2,5	2,7	2,5	2,3	1,9	1,9	1,6	1,7
Ingreso por perceptor	560,4	1.144,6	577,7	1.412,2	483,7	373,1	282,9	318,4	410,9	560,3	286,9	341,9	448,7	669,7	418,2	748,7
Ingreso jefe	711,4	1.283,8	621,9	1.548,5	488,0	444,0	352,6	353,8	486,7	1.018,8	407,6	463,1	557,4	958,5	505,7	888,3
Ingreso horario jefe	3,6	7,0	3,1	8,1	3,2	2,0	2,1	1,6	2,8	4,9	2,5	2,0	3,1	4,6	2,8	4,4
Ingreso familiar	787,5	1.512,5	736,9	1.938,7	537,6	481,2	431,1	449,6	983,4	1.529,2	661,2	759,3	867,1	1.315,5	661,8	1.170,5
Ingreso per cápita	200,1	469,7	220,8	601,1	155,4	135,7	123,8	119,1	186,4	285,9	138,5	158,5	211,6	330,5	170,4	323,1
Jornada/horas mes del hogar	280,8	214,2	305,8	217,7	269,2	237,8	285,5	247,6	494,9	205,0	493,9	247,1	407,6	231,0	337,9	231,2
Total hogares (%)	17,2	12,1	15,1	23,7	7,4	9,3	30,8	18,3	7,2	5,6	9,6	16,0	12,7	15,1	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Promedio por hogar.

Estas primeras evidencias se matizan considerando simultáneamente el tipo de inserción laboral y la calidad de la inserción de los hogares; distinguiendo entre los que tienen una inserción plena y precaria (todos los grados de precariedad), se encuentra una profunda brecha de ingresos entre ambos tipos de hogares dentro de un mismo sector, que aumenta con el tiempo, al ritmo en que los diferenciales de salarios e ingresos entre puestos de trabajo que requieren mayor o menor calificación o entre actividades informales consolidadas o no consolidadas se acentúan.

Con la única excepción de los hogares con inserción completa en el sector estatal, donde las diferencias en función de la calidad se anulan con el tiempo, en todos los demás sectores los hogares con inserción precaria generan ingresos familiares muy por debajo del promedio sectorial. Así, por ejemplo, los hogares con inserción plena en el sector empresarial logran un ingreso tres veces mayor a sus homólogos precarios; lo mismo ocurre entre los hogares con inserción en el sector familiar, donde, si bien la brecha se reduce con el tiempo, sigue siendo equivalente a 2,5 respecto de los hogares precarios.

Sin embargo, una vez marcadas estas diferencias intrasectoriales, persisten las brechas entre sectores; los hogares precarios articulados a los sectores empresariales tienen todavía mayores probabilidades de alcanzar un ingreso familiar promedio superior al de los hogares con inserción plena en los sectores familiar, semiempresarial o predominantemente informal. En este comportamiento influyen los ajustes que, por el lado del empleo, han tenido lugar en el sector estatal que gradualmente se fue vaciando de empleos manuales calificados y no calificados debido a la privatización, así como la reducción de empleos eventuales menos calificados en el sector empresarial como respuesta a la contracción del mercado interno. De este modo, un ingreso medio más alto de los hogares articulados a estos sectores se vincula con la recomposición del empleo en favor de las categorías no manuales calificadas y no calificadas, por efecto de la crisis económica. En el Cuadro 6b se muestra la situación al año 2000.

Cuadro 6b

La Paz: indicadores de ingreso según tipo y calidad de inserción del hogar, 2000 (en Bs. de 1990)

Indicadores de ingresos	Tipo de inserción del hogar													
	Estatal		Empresarial		Semiempresarial		Familiar		Pred. empresarial		Pred. informal		Mixto	
	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria
Perceptores de ingresos*	1,2	1,4	1,4	1,4	1,0	1,3	1,4	1,5	2,6	2,7	2,2	2,3	1,8	2,0
Ingreso por perceptor	1.306,5	953,6	2.549,5	658,6	702,3	350,3	587,6	246,9	703,8	510,8	653,8	312,2	1.703,5	542,2
Ingreso del jefe	1.313,6	1.260,9	2.749,2	734,4	702,3	424,1	544,6	300,3	1.256,2	928,3	865,5	420,7	2.559,6	726,0
Ingreso horario	6,9	7,1	14,8	3,5	3,0	1,9	2,5	1,4	6,2	4,5	3,0	1,9	13,4	3,4
Ingreso familiar	1.521,3	1.502,1	3.347,5	1.005,1	702,3	465,9	835,4	347,0	1.837,7	1.422,7	1.386,2	699,5	3.338,5	1.066,2
Ingreso per cápita	499,9	434,1	1.019,7	323,7	175,6	132,9	257,6	82,2	427,3	237,1	296,8	145,4	649,0	291,3
Jornada/horas mes del hogar	260,6	317,9	293,1	326,9	236,5	322,0	412,8	365,2	405,9	521,5	669,8	559,2	416,2	431,3

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Promedio por hogar.

Tomando en cuenta estas evidencias, se puede concluir que las EFT con mayores retornos en términos de los ingresos familiares promedio para los hogares paceños son aquellas que, por las características de los miembros de los hogares y las oportunidades que con estas se presentan en el mercado de trabajo, permiten inserciones plenas o precarias en el sector empresarial público o privado.

En El Alto, la situación se plantea más diversa y compleja, partiendo de dos hechos incontestables; por una parte, la conformación de una estructura productiva asentada en los sectores tecnológicos más atrasados, mucho más que en La Paz u otras ciudades capitales de departamento en el país; por otra, la consolidación de una estructura

ocupacional sesgada hacia la demanda de mano de obra semicalificada o no calificada; por lo tanto, los hogares enfrentan dos factores restrictivos que hacen cada vez más improbable la inserción completa en los sectores estatal o empresarial, así como en empleos que demandan mayor calificación.

Bajo estas condiciones, la probabilidad de alcanzar un ingreso familiar superior al promedio depende tanto de la movilización de un mayor número de perceptores como de las oportunidades que esto representa para el logro de una inserción combinada entre los sectores empresarial e informal (27 y 28% de los hogares en los dos momentos). Hacia el año 2000, esta posibilidad se amplía para el grupo con inserciones completas en el sector estatal (6% del total de los hogares). En todos los casos, un mayor nivel de ingreso familiar también está asociado con un importante aumento en la jornada mensual de los hogares; así, por ejemplo, los hogares del grupo “predominantemente empresarial” tienen un ingreso superior en un 40% al promedio general, pero este logro se explica más por un mayor esfuerzo laboral (un mayor número de perceptores) antes que por la presencia de algún miembro ocupado en el sector empresarial.

También aquí, quienes se ocupan como núcleos completos en los sectores semiempresarial y familiar exhiben ingresos familiares muy inferiores al promedio (más del 40% de los hogares). Con el tiempo, los que tienen una presencia completa en el sector familiar han pasado a constituir el grupo de menores ingresos familiares (29% por debajo del promedio general).

A diferencia de La Paz, en los dos años tomados como referencias, los hogares que han logrado una inserción en el sector empresarial (su participación en el total se reduce del 16 al 10%) presentan ingresos familiares promedio inferiores al total general, con un repunte hacia el año 2000, aunque por efecto de un mayor esfuerzo laboral (más perceptores y una mayor jornada mensual de trabajo), antes que por mejoras en la calidad de su inserción laboral. Los bajos ingresos de los hogares con inserciones completas en los sectores estatal y empresarial en esta ciudad, incluso por debajo de los hogares con inserciones combinadas precarias, solamente reafirman el predominio de un perfil de demanda de fuerza de trabajo cada vez más asentada en el trabajo semicalificado y no calificado en las actividades empresariales (Cuadro 7a).

Cuadro 7a

El Alto: indicadores de ingresos por tipo de inserción laboral del hogar, 1989-2000 (en Bs. de 1990)

Indicadores de ingresos	Tipo de inserción del hogar															
	Estatal		Empresarial		Semiempresarial		Familiar		Pred. empresarial		Pred. informal		Mixto		Promedio	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Perceptores de ingresos*	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,4	1,4	3,0	2,7	2,6	2,5	1,9	2,0	1,6	1,7
Ingreso por perceptor	267,4	445,8	340,3	443,5	260,9	392,6	236,2	296,5	258,3	398,6	265,5	288,3	275,9	318,0	266,9	339,4
Ingreso jefe	272,5	492,9	348,3	485,3	282,0	400,6	251,3	322,8	294,5	441,3	280,2	395,0	369,3	401,2	292,4	392,6
Ingreso horario jefe	1,8	3,1	1,5	2,1	1,6	2,1	1,4	1,5	1,8	2,1	1,4	1,8	1,8	1,9	1,5	1,9
Ingreso familiar	327,5	612,3	408,6	540,0	276,2	481,6	329,1	411,3	729,3	997,0	653,6	708,8	527,8	637,5	411,7	575,1
Ingreso per cápita	87,2	146,0	99,0	147,6	60,2	133,1	90,8	103,2	107,5	199,9	145,6	141,2	147,0	153,3	104,2	135,6
Jornada mensual del hogar	205,3	216,4	270,7	286,6	199,5	321,4	270,4	370,2	544,5	526,3	569,0	611,5	341,5	421,6	309,9	410,1
Total hogares (%)	8,6	5,7	16,6	10,2	7,0	12,3	40,2	29,7	2,7	5,5	10,0	18,3	15,0	18,3	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Promedio por hogar.

Finalmente, distinguiendo entre los que tienen una inserción plena o precaria, las brechas de ingresos medios entre ambos tipos de hogares se encuentran en todos los sectores del mercado de trabajo; así por ejemplo, los hogares con inserción plena en el sector predominantemente informal y mixto tienen un ingreso familiar superior en 2,5 y 2 veces con relación a sus homólogos con inserciones precarias, tal como se ejemplifica en el Cuadro 7b, con referencia al año 2000.

Cuadro 7b

El Alto: indicadores de ingresos según tipo y calidad de inserción del hogar, 2000 (en Bs. de 1990)

Indicadores de ingresos	Tipo de inserción del hogar													
	Estatal		Empresarial		Semiempresarial		Familiar		Pred. empresarial		Pred. informal		Mixto	
	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria	No precaria	Precaria
Perceptores de ingresos*	1,5	1,2	1,0	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	3,0	2,6	2,9	2,4	1,8	2,0
Ingreso por perceptor	620,5	285,5	835,5	335,3	592,4	348,1	471,1	247,0	708,7	365,9	540,8	259,6	629,1	288,9
Ingreso del jefe	733,0	276,9	835,5	373,3	590,8	358,1	489,2	279,9	574,6	426,5	622,3	367,5	707,8	376,0
Ingreso horario	4,7	1,7	3,8	1,5	2,4	2,0	2,4	1,3	2,3	2,1	2,6	1,7	3,1	1,8
Ingreso familiar	905,6	343,0	835,5	458,5	771,7	417,0	590,7	360,3	2.126,1	878,2	1.521,1	616,8	1.065,4	597,3
Ingreso per cápita	200,5	96,0	279,8	111,2	206,8	116,6	146,0	91,0	354,3	183,7	313,9	121,7	260,0	143,3
Jornada/horas mes del hogar	231,3	203,9	212,4	316,3	374,6	309,6	310,0	386,5	782,5	499,3	673,9	603,4	432,9	420,5

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Promedio por hogar.

Siguiendo la trayectoria de los ingresos en las dos ciudades, se puede concluir que, desde el ámbito del hogar, las EFT con mayores retornos en términos de los ingresos familiares promedio son aquellas que se basan en un mayor esfuerzo laboral –sea a través de un aumento en el número de perceptores, de las jornadas mensuales del hogar o ambas–; en cambio, desde el ámbito del mercado o de las formas de inserción laboral, los resultados de las EFT dependen de la estructura de oportunidades que ofrece la configuración del aparato productivo local, de los perfiles de demanda de fuerza de trabajo asociada con esta y de la calidad de los empleos a los que acceden los hogares tanto en los sectores empresarial como informal. Ambos factores condicionantes interactúan para configurar los resultados de las EFT sobre el nivel de los ingresos familiares.

Un ejemplo que permite vincular ambos factores y su incidencia en el mantenimiento o mejora de los ingresos familiares proviene de la comparación entre los hogares con un activo y con más de un activo, considerando el tipo y la calidad de inserción laboral en el año 2000. Los hogares con más de un activo presentan un aumento similar en el número de perceptores desde 1 a 2,1 en promedio y de 260 a 270 horas en las jornadas laborales mensuales en las dos ciudades; con este mayor esfuerzo laboral, los ingresos en estos hogares son más altos en un 20% en La Paz, y un 70% en El Alto, respecto a los hogares con un solo activo.

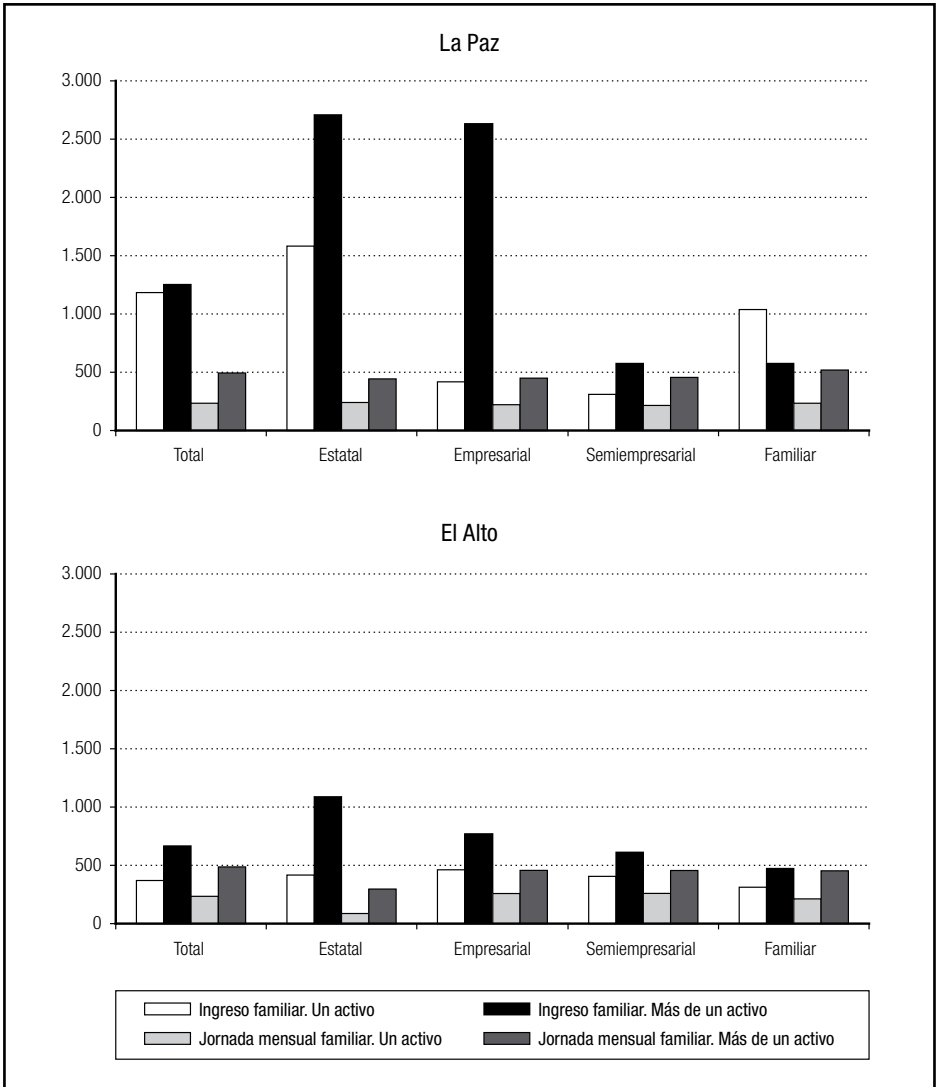
No habiendo diferencias en el tipo de inserción de los hogares con más de un activo, esta situación puede atribuirse a que, en El Alto, los hogares con un solo miembro ocupado se concentran en los sectores familiar y semiempresarial donde se obtienen los más bajos ingresos por trabajo; por lo tanto, un ingreso adicional, por muy reducido que sea, tiene una mayor incidencia porcentual, en tanto que en La Paz ocurre un fenómeno inverso de concentración en el sector empresarial, donde los ingresos son muy superiores al promedio, de modo tal que un ingreso adicional tiene una incidencia porcentual menor (Gráfico 17).

PRECARIEDAD LABORAL, ESTRUCTURA SOCIAL E INGRESOS FAMILIARES

La difusión de las más diversas formas de empleo precario y el avance en la flexibilidad salarial a partir de la mitad de la década del noventa fueron configurando un escenario donde la inseguridad en los ingresos y sus bajos niveles se traducen en una extrema explotación de la fuerza de trabajo, que repercute en un crecimiento diferenciado de los ingresos laborales en función del tipo y calidad de su inserción laboral. Dadas las relaciones que se establecen entre sectores en el ámbito de las EFT, estos procesos favorecen ampliamente a la acumulación de capital, ahondando los costos sociales para los trabajadores.

Gráfico 17

Ingreso y jornada familiar mensual según tipo de inserción laboral y número de activos, 2000
(en Bs. de 1990)



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

En el lapso de los once años que abarca el período considerado, el ingreso promedio del conjunto de los hogares aumentó en un 43% en La

Paz y un 29% en El Alto, con una jornada mensual promedio superior en el 14 y el 23%, respectivamente. Esto significa que la evolución de los salarios e ingresos fue relativamente lenta, en particular en El Alto, puesto que una menor tasa de inflación y la mediación de un mayor esfuerzo laboral hacia 2000 explican una parte importante del nivel en que se sitúan los ingresos familiares.

Los hogares en los cuales todos los miembros presentan una inserción precaria (40% en El Alto y 29% en La Paz) apenas han elevado sus ingresos en un 10 y un 20%, respectivamente. Se trata de hogares que pertenecen a los quintiles más bajos de la distribución del ingreso y entre los cuales un mayor esfuerzo laboral ha tenido los más bajos retornos. En el otro extremo, los hogares con inserción laboral no precaria (menos del 25% en La Paz y 17% en El Alto) han visto mejorar notablemente su ingreso familiar en La Paz (44%), mientras que en El Alto ni siquiera la calidad de su inserción pudo evitar su deterioro, ya que el ingreso familiar cayó un 13% durante el período. Esto puede deberse a un mayor peso de hogares con un solo miembro activo en este grupo y a una menor movilización de su mano de obra, puesto que también presentan el aumento más bajo en las jornadas laborales medias.

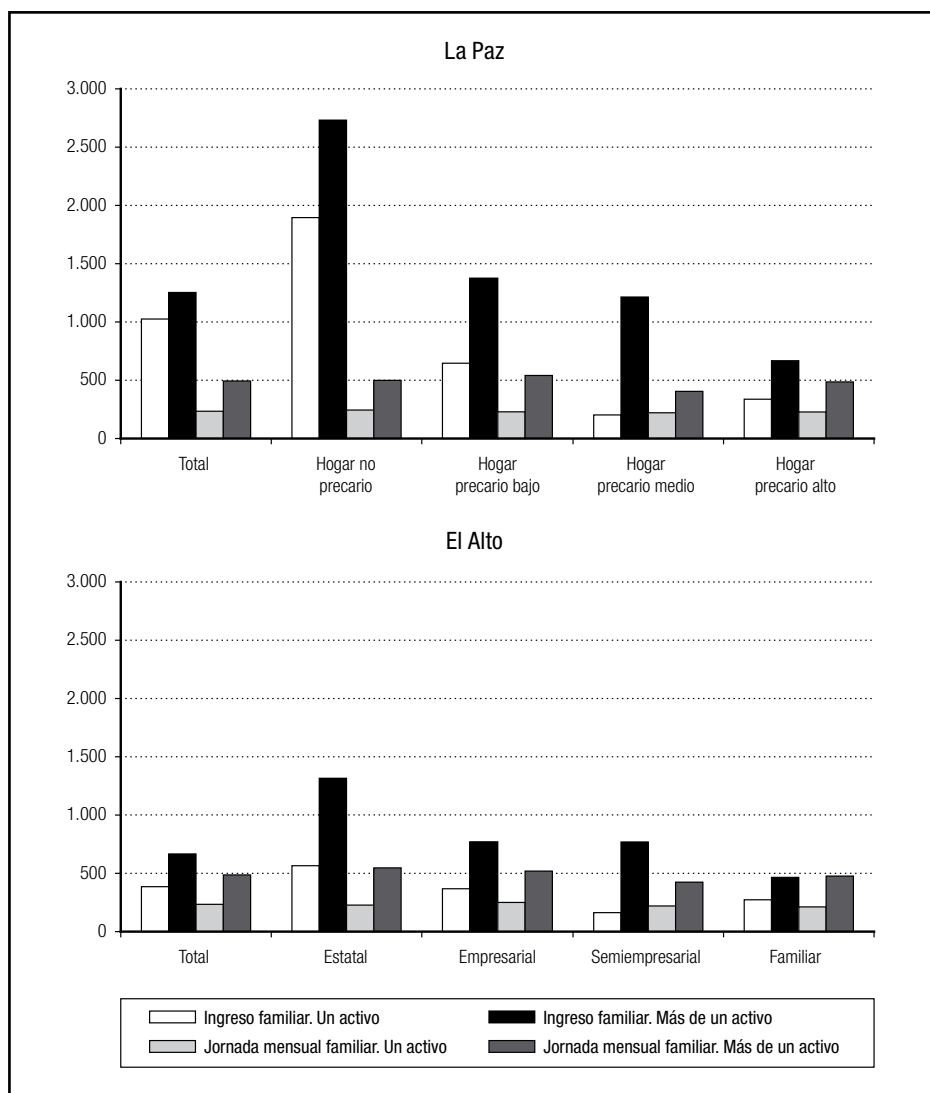
En una posición más expectable se ubican los hogares con precariedad laboral media, que han logrado mejorar sus ingresos en porcentajes que van desde el 45% en El Alto al 57% en La Paz. A diferencia del grupo anterior, esta mejora se asocia con un aumento del esfuerzo laboral superior al promedio. Finalmente, los hogares con precariedad baja presentan un ingreso superior en un 28% en El Alto y un 33% en La Paz, en ambas ciudades con un aumento de sus jornadas mensuales muy por encima del promedio.

De esta manera, queda demostrado que, con excepción de los hogares con inserción plena, el resto de los grupos familiares requiere de un esfuerzo laboral cada vez mayor –que se amplía hasta los hijos menores– para atenuar los efectos negativos de la precarización del trabajo sobre la dinámica de los ingresos familiares (Gráfico 18).

Por último, y no menos importante, es que dados determinados factores estructurales, macroeconómicos y sociales que condicionan las formas de inserción laboral, las oportunidades diferenciadas según la posición de los hogares en la estructura de relaciones de clase inciden también diferencialmente en la situación de los ingresos familiares. Las evidencias que se encuentran en las dos ciudades son muy expresivas al respecto, con la distancia que se origina en las características específicas de la base productiva y del mercado de trabajo entre ambas.

Se puede constatar que los grupos sociales más afectados por el avance de la precarización laboral han sido aquellos que pertenecen a la clase obrera y manual no proletaria, por el efecto indirecto de los

Gráfico 18
 Ingreso y jornada mensual según calidad de inserción laboral y número de activos, 2000
 (en Bs. de 1990)



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

continuos ajustes en el empleo y la masa salarial en el sector empresarial que repercutieron en la caída de sus ingresos medios (aumento en el nú-

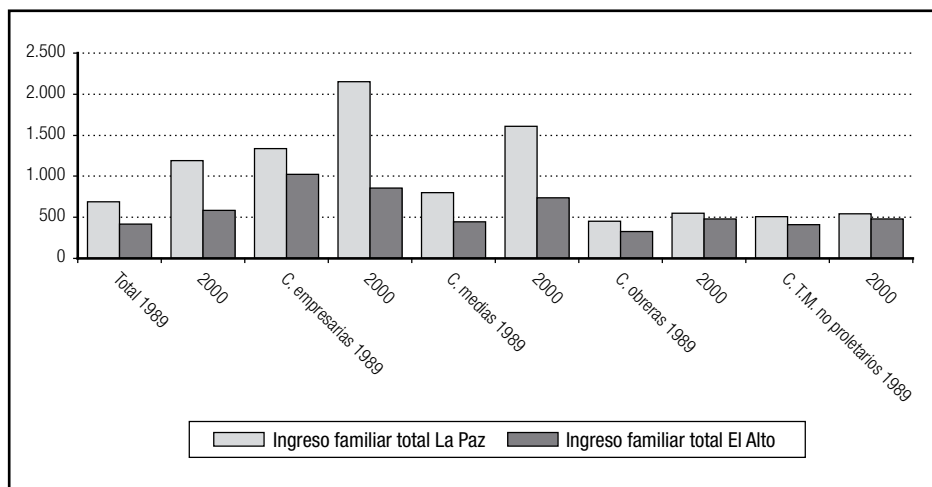
mero de ocupados) y volúmenes de venta (deterioro de la capacidad de consumo de los hogares). En consecuencia, los ingresos más bajos y con ritmos de crecimiento lento corresponden a ambos grupos de hogares.

En El Alto, los diferenciales de ingreso familiar de ambos grupos sociales respecto a los que forman parte de las clases medias y empresarias se han ampliado con el tiempo; en el año 2000, apenas representaban el 56% del que obtienen los hogares de las clases empresariales y el 64% del que generan los hogares de las clases medias. En La Paz, las brechas son todavía mayores hacia 2000, puesto que la distancia, en particular respecto al ingreso de las clases medias, se amplía dramáticamente; ambos grupos apenas logran un ingreso familiar equivalente a una cuarta parte del que exhiben las clases empresarias y menos de un tercio del que obtienen las clases medias.

A partir de esta dinámica, se puede concluir que las EFT inciden diferencialmente en las condiciones de vida de las clases y grupos sociales subalternos. Así, para cerca de la mitad de los hogares en La Paz y más de dos tercios en El Alto, las EFT dependen, en último término, de lo que se puede hacer frente a las restricciones y discriminaciones que se presentan en el mercado laboral, en particular cuando las políticas públicas y las estrategias empresariales colocan todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores (Gráfico 19).

Gráfico 19

Ingreso familiar según posición en la estructura social, 1989-2000 (en Bs. de 1990)



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Capítulo IV

ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO Y BIENESTAR DE LOS HOGARES

HASTA AQUÍ SE HA PODIDO CONSTATAR una dinámica de crecimiento de los salarios e ingresos reales con incidencia sobre una mejora de los ingresos familiares promedio y su magnitud diferenciada en función de la pertenencia a la estructura de relaciones de clase con la que se asocian formas distintas de (des)integración de los hogares en la estructura económica y laboral. En este capítulo, se busca conocer si las EFT cumplen alguna función para contrarrestar o mitigar el deterioro en las condiciones de bienestar causado por las políticas de ajuste estructural y la recesión, considerando la evolución de la línea de pobreza.

Para avanzar en este propósito, se abordan, en primer lugar, las variaciones en la desigualdad distributiva, por cuanto la apropiación diferenciada de la renta generada por el esfuerzo colectivo se interrelaciona con los resultados de las estrategias o arreglos de trabajo para reforzar o atenuar la incidencia, intensidad y/o severidad de la pobreza; en segundo lugar, se intenta develar cómo ambos procesos interactúan para la persistencia de la pobreza y su evolución entre los dos períodos.

DESIGUALDAD DEL INGRESO

Bolivia se caracteriza por una desigualdad significativa en comparación con otros países de América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,58 (UDAPE, 1998). Sin embargo, los dos contextos locales estudiados son

una muestra de los grados distintos de desigualdad que se presentan en las ciudades capitales del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), donde se concentran la propiedad, la generación de riqueza y la fuerza de trabajo, *vis-à-vis* con el resto de las ciudades capitales, donde se incluye El Alto.

En La Paz, la desigualdad del ingreso de las personas es mayor al promedio y adopta un carácter más regresivo con el tiempo; por un lado, el 20% más pobre de la población reduce su participación relativa en el ingreso total (del 4,2 al 3,1%) mientras que el 20% más rico se apropia de un porcentaje cada vez mayor (del 46 al 60%); el aspecto más destacable en esta evolución es que el 10% de ingresos más altos ha pasado a apropiarse del 52% del ingreso total (14% por encima de 1989), lo que remite a una distribución del ingreso altamente desigual hacia el año 2000. Esta tendencia se halla en absoluta consonancia con el desplazamiento de la generación de riqueza hacia la empresa privada y de los ingresos laborales altos y medios al polo de ocupaciones calificadas que, desde el Estado y el sector privado, cumplen el rol de asegurar las tasas de ganancia de los inversores, limitando la redistribución.

En El Alto, la desigualdad en el ingreso de las personas es menor que el promedio y, a diferencia de La Paz, presenta una evolución redistributiva entre los dos períodos, aunque en beneficio de los estratos medios; el 20% más pobre disminuye su participación en la renta (del 5,6 al 4,8%); también los ricos son menos ricos, pues la renta de la que se apropian se reduce (del 41 al 37%), mientras que aquellos que se sitúan en el cuarto y tercer quintil, en ese orden, ven mejorar su participación relativa (del 31,6 al 35,3%). En ausencia de un sector empresarial dinámico en la generación de empleo estable y adecuadamente remunerado, esta orientación redistributiva parece estar vinculada con la expansión y permanencia competitiva de una parte de las unidades económicas familiares y semiempresariales que emergieron a finales de los años ochenta, favorecidas por el rápido crecimiento de la población alteña y la provisión de bienes y servicios a los pobladores de su entorno rural.

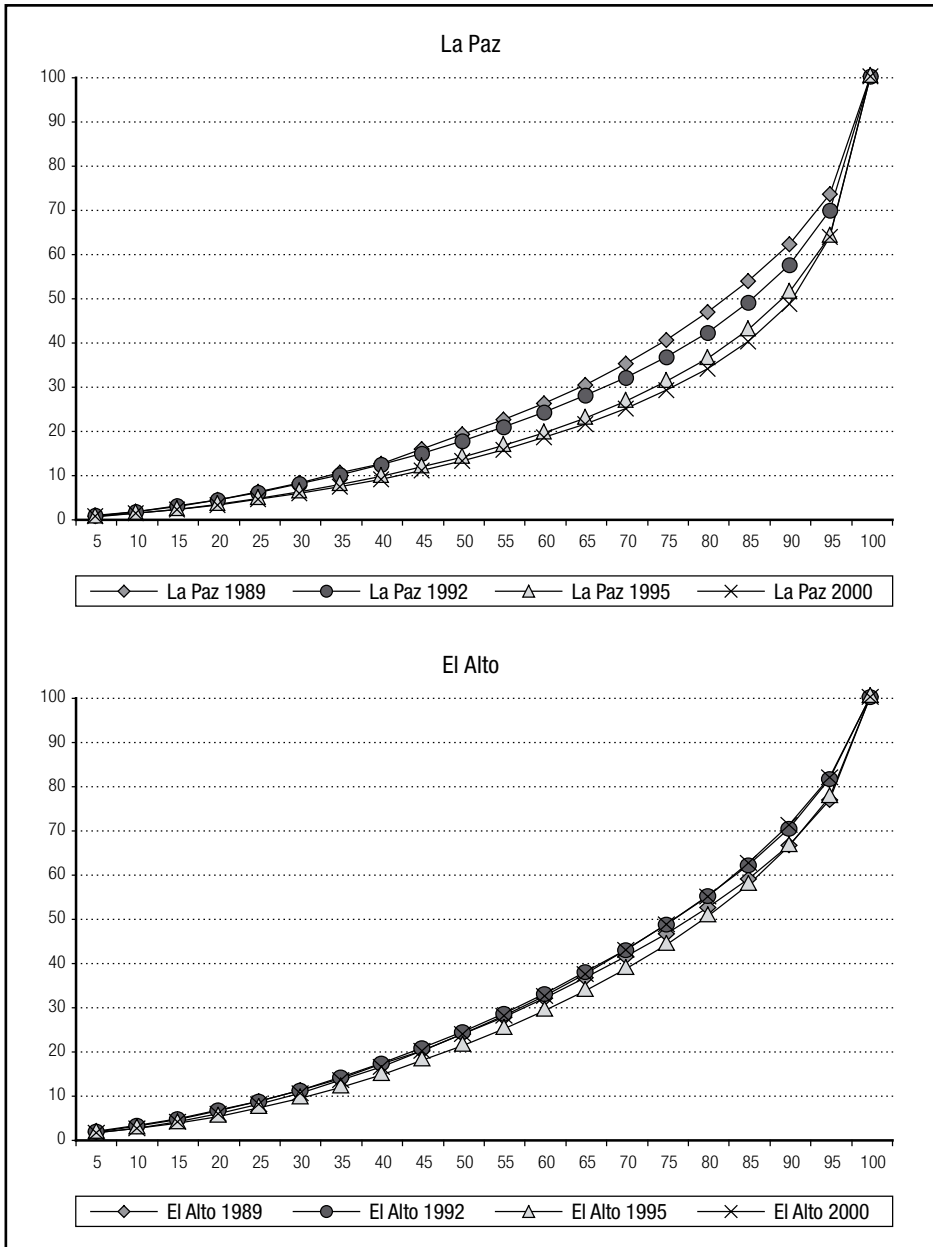
Este recuento es pertinente en la perspectiva de comparar la distribución de los ingresos personales y de los hogares. De este modo, se puede observar que las EFT y los arreglos resultantes contribuyen a contrarrestar el carácter regresivo del ingreso en La Paz, suavizando la concentración en el quintil más rico (incluido el 10% de ingresos más altos) pero en beneficio casi exclusivamente de los quintiles medios. En cambio, en El Alto, las EFT apenas modifican la estructura de la distribución. Por lo tanto, es posible concluir que las EFT pueden contribuir a atenuar la situación de vulnerabilidad de los hogares, pero no cumplen ni pueden cumplir una función orientada a resolver los problemas de desigualdad, dadas las condiciones estructurales que generan la inequidad.

El grado de desigualdad del ingreso de los hogares medido por el coeficiente de Gini y su evolución muestra que, en La Paz, la desigualdad en los ingresos de los hogares se profundiza pasando de moderada a alta (0,49 a 0,61), mientras que el 20% más rico se apropia de un ingreso casi 12 veces mayor en comparación con el 20% más pobre. En cambio, en El Alto, la desigualdad se atenúa para pasar de moderada a baja (0,46 a 0,40), en tanto que la relación entre el ingreso del 20% más rico es 6 veces mayor al que concentra el quintil más pobre. La evolución diferenciada de la desigualdad en los dos contextos locales puede atribuirse exclusivamente a las fuertes disparidades de ingreso entre los ocupados con mayor o menor calificación observadas en La Paz. Por lo demás, ambas ciudades comparten una estructura del empleo asentada en ocupaciones de baja productividad y/o de bajos ingresos, con modalidades cada vez más flexibles en el uso de mano de obra y con elevados niveles de desempleo abierto.

En la medida en que esta estructura es el saldo de un período anterior caracterizado por mayores niveles de crecimiento económico, es muy poco probable esperar cambios en el perfil configurado; la crisis económica que se desata a fines de los noventa no hace más que reflejar las mayores dificultades que se presentan para mejorar la inserción del país en el comercio internacional y para reactivar el circuito de la inversión, producción y consumo. Por lo tanto, las condiciones para avanzar en una distribución más equitativa del ingreso en La Paz o para elevar los ingresos manteniendo una orientación redistributiva en El Alto no están dadas ni lo estarán durante muchos años, ya que los ingresos laborales, que son el principal componente de la distribución, dependen de un perfil ocupacional que tiende a consolidarse e incluso a tornarse más precario por efecto de las prácticas empresariales de competitividad espuria basadas en el abaratamiento de los costos laborales.

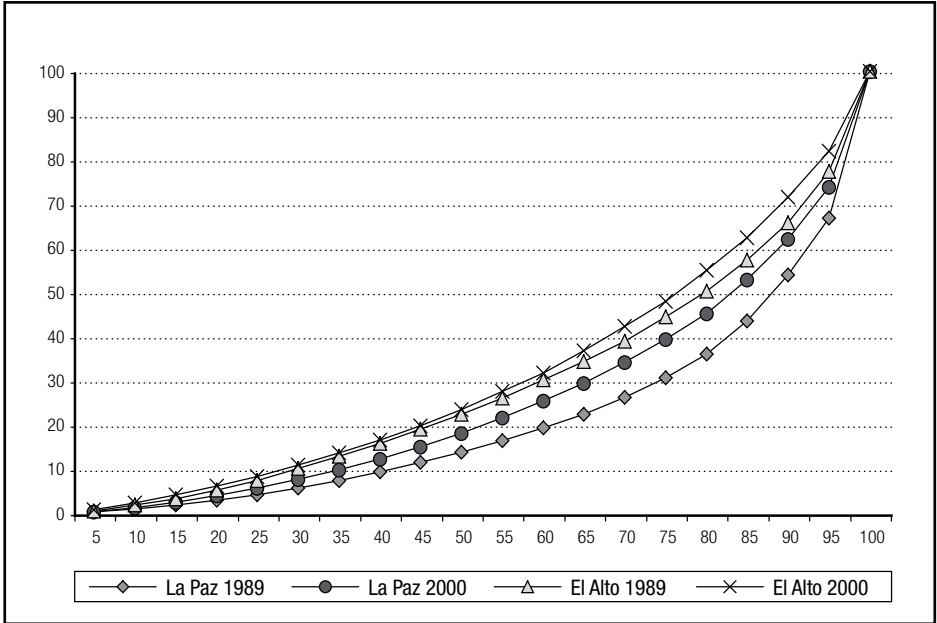
Es en el marco de estas tendencias diferenciadas que pueden explicarse mejor las variaciones en la evolución de la pobreza en las dos ciudades (gráficos 20a y 20b).

Gráfico 20a
Distribución de los ingresos laborales personales, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Gráfico 20b
Distribución de los ingresos laborales de los hogares, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

ESTRATEGIAS FAMILIARES DE TRABAJO Y LÍNEA DE POBREZA

En este acápite, se analiza la evolución de los principales indicadores de pobreza, intentando una aproximación a los efectos que han tenido las estrategias familiares de trabajo para mitigar su incidencia e intensidad. La línea de pobreza ha sido definida a partir de patrones de consumo observados en las dos ciudades y, por lo tanto, con costos diferenciados de la canasta total y de la canasta alimentaria.

INCIDENCIA DE LA POBREZA

Como los ingresos por trabajo son la fuente principal de sustento de los hogares, los problemas analizados hasta ahora –crecimiento económico lento, desigualdad en la distribución del ingreso y, en particular, los bajos ingresos entre los trabajadores no calificados– se combinan para la persistencia de índices de pobreza elevados, a pesar de su disminución entre 1989 y 2000.

En las dos ciudades, se ha verificado una importante reducción en la incidencia de la pobreza relativa. No obstante, en La Paz, la pobreza todavía afecta al 57% de los hogares y apenas ha disminuido en un 12%

respecto a 1989. En El Alto, el porcentaje de hogares en situación de pobreza es del 60%, con una incidencia inferior en 26% a la observada en el año base. En este recorrido, dos aspectos llaman la atención; primero, las diferencias en el ritmo de reducción de la pobreza; segundo, el nivel relativamente similar de su incidencia en las dos ciudades en el año 2000. Esto puede atribuirse tanto a un menor grado de desigualdad como al carácter más redistributivo de los ingresos en El Alto, lo que habría repercutido en una mejora relativa en el bienestar de los hogares, sobre todo entre aquellos situados en los quintiles medios de la distribución, a diferencia de La Paz, donde la desigualdad aumenta –a pesar de una redistribución que beneficia a los estratos medios–, lo que limita un mayor avance en la superación de la pobreza y, sobre todo, de la indigencia.

En efecto, lo que sucede en El Alto es que la menor incidencia de la pobreza obedece a una drástica reducción de los hogares en situación de indigencia del 68 al 33%, en tanto que en La Paz, la probabilidad de salir de la indigencia ha sido mucho menor, ya que esta se reduce apenas del 37 al 30%. En ambas ciudades, los hogares pobres han disminuido en muy baja proporción.

Vista esta evolución, en términos absolutos el panorama es menos optimista, puesto que, después de un fuerte crecimiento de la población en El Alto, los hogares pobres e indigentes han aumentado desde 56 mil en 1989 a 80 mil en 2000; a su vez, en La Paz, la pobreza e indigencia siguen afectando a 90 mil hogares. Por lo tanto, la persistencia de la pobreza sigue siendo un problema crítico de inequidad que ubica a estas dos ciudades –lo mismo que a otras ciudades capitales del país– entre aquellas con mayor incidencia de la pobreza e indigencia en la región (Cuadro 8).

Cuadro 8
Hogares según incidencia de la pobreza, 1989-2000

Nivel de pobreza	La Paz				El Alto			
	1989		2000		1989		2000	
	Absoluta	Relativa (%)	Absoluta	Relativa (%)	Absoluta	Relativa (%)	Absoluta	Relativa (%)
Indigente	72.407	37,1	47.716	30,2	45.239	68,5	44.004	32,8
Pobre	62.453	32,0	42.818	27,1	11.558	17,5	35.955	26,8
No pobre	60.307	30,9	67.466	42,7	9.246	14,0	54.201	40,4
Total	195.167	100,0	158.000	100,0	66.043	100,0	134.160	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Con los cambios en la inserción ocupacional de los hogares y la creciente pérdida de calidad de los empleos, se puede concluir que una mayor movilización de los miembros de los hogares en La Paz no redonda necesariamente en una menor incidencia de la pobreza, pero sirve para

mitigar la situación de indigencia, a condición de que los hogares desplieguen a tres o más activos. En cambio, en El Alto, la incidencia de la pobreza, y en particular de la indigencia, es significativamente menor a medida que aumenta el número de activos de los hogares, lo que –además de una evolución más redistributiva del ingreso– se asocia con la importancia relativa que adquiere un aumento en los perceptores en el ingreso familiar, en comparación con La Paz (Cuadro 9).

No obstante, la otra cara de un mayor esfuerzo laboral de los hogares para salir de la indigencia es la incorporación temprana de los niños y adolescentes al mercado de trabajo, lo que podría tener efectos sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, tanto por el carácter precario de las primeras ocupaciones que marcan la trayectoria laboral de las personas como por el hecho de estar acompañadas por altas tasas de deserción escolar³³.

Cuadro 9

Línea de pobreza en hogares con un activo y con más de un activo, 1989-2000 (en %)

La Paz	Nivel de pobreza				El Alto	Nivel de pobreza			
	Indigente	Pobre	No pobre	Total		Indigente	Pobre	No pobre	Total
2000					2000				
Un activo	31,9	25,4	42,7	100,0	Un activo	42,1	28,5	29,4	100,0
Dos activos	30,9	25,1	44,0	100,0	Dos activos	31,1	26,0	42,9	100,0
Tres y más activos	25,5	34,8	39,7	100,0	Tres y más activos	22,4	26,1	51,5	100,0
Total	30,2	27,1	42,7	100,0	Total	32,8	26,8	40,4	100,0
1989					1989				
Un activo	44,8	27,9	27,3	100,0	Un activo	75,2	15,8	9,0	100,0
Dos activos	29,9	33,3	36,7	100,0	Dos activos	66,7	15,3	18,0	100,0
Tres y más activos	35,2	39,4	25,4	100,0	Tres y más activos	52,4	28,6	19,0	100,0
Total	37,1	32,0	30,9	100,0	Total	68,5	17,5	14,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

INTENSIDAD DE LA POBREZA

En la evolución de los ingresos de los hogares según el nivel de pobreza es notoria la distancia que separa a los ingresos de los pobres respecto a los no pobres. En las dos ciudades, los hogares indigentes y pobres apenas aumentan sus ingresos familiares reales entre 1989 y 2000, mientras que los hogares no pobres presentan una mejora significativa, en particular en La Paz. De esta manera, en el año 2000, el ingreso de los

33 De acuerdo con la CEPAL (2000), tres de cada cuatro jóvenes en esta situación dejan de estudiar.

hogares no pobres llega a ser 4 veces mayor al de los pobres y 8 veces mayor al de los indigentes, mientras que, con un menor margen, en El Alto pasan a representar 2 y 3,5 veces más. Además de los bajos ingresos laborales, en particular entre sus principales aportantes, el nivel del ingreso per cápita que presentan los hogares pobres estaría mostrando también una mayor tasa de dependencia (menores en relación con adultos activos), lo que agrava su situación (Cuadro 10).

Cuadro 10

Indicadores de ingresos de los hogares por líneas de pobreza, 1989-2000 (en Bs. de 1990)

La Paz	Nivel de pobreza							
	Indigente		Pobre		No pobre		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Perceptores de ingreso*	1,4	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7
Ingreso por perceptor	184,8	202,9	318,4	327,4	803,4	1.395,9	418,4	745,7
Ingreso jefe	209,9	237,3	359,6	374,3	957,2	1.654,1	508,5	887,1
Ingreso horario jefe	1,4	1,2	2,0	1,8	5,1	8,3	2,8	4,4
Ingreso familiar	243,7	279,9	514,9	517,1	1.307,8	2.206,5	658,9	1.166,3
Ingreso per cápita	48,8	55,4	118,1	122,6	373,0	637,2	171,1	321,9
Jornada/Horas mes del hogar	272,9	241,8	352,4	229,8	377,3	221,8	330,7	229,7
Total hogares (%)	37,1	30,2	32,0	27,1	30,9	42,7	100,0	100,0

El Alto	Nivel de pobreza							
	Indigente		Pobre		No pobre		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Perceptores de ingreso*	1,5	1,4	1,7	1,9	2,0	1,9	1,8	1,6
Ingreso por perceptor	194,4	190,8	277,1	290,8	496,9	604,6	338,9	293,0
Ingreso jefe	220,6	208,1	324,8	321,9	573,7	640,5	392,8	1,5
Ingreso horario jefe	1,1	1,2	1,5	1,8	2,7	2,9	1,9	307,0
Ingreso familiar	263,2	255,4	441,1	493,9	914,1	1.058,7	574,0	103,8
Ingreso per cápita	49,2	53,4	93,7	117,5	232,9	333,9	135,4	266,2
Jornada mensual hogar	331,0	271,7	397,1	366,4	484,4	405,8	410,8	1,6
Total hogares (%)	68,5	32,8	17,5	26,8	14,0	40,4	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

* Promedio por hogar.

Con esta evolución, se observa que los hogares pobres siguen siendo muy pobres, ya que el déficit medio de sus ingresos disminuye levemente, lo mismo que la desigualdad de sus ingresos; el coeficiente de Gini de los pobres apenas se reduce en las dos ciudades: en La Paz, de 0,29 a 0,26; y en El Alto, de 0,27 a 0,22 (Cuadro 11).

Cuadro 11
La Paz y El Alto: indicadores de pobreza de los hogares, 1989-2000

La Paz	1989	2000	El Alto	1989	2000
Incidencia de pobreza (H)	0,6914153	0,5732796	Incidencia de pobreza (H)	0,8601399	0,5960000
Intensidad de pobreza (I)	0,0390947	-0,7443493	Intensidad de pobreza (I)	0,5571711	0,4180000
Coefficiente de Gini pobres	0,2900619	0,2647302	Coefficiente de Gini pobres	0,2747663	0,2220015
Índice de Sen	0,2197434	-0,1619901	Índice de Sen	0,5839021	0,3261341
Brecha de pobreza (H*I)	0,0270307	-0,4267203	Brecha de pobreza (H*I)	0,4792450	0,2491280
Coefficiente de Gini	0,4912195	0,6102782	Coefficiente de Gini	0,4629359	0,4039182

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

La intensidad de la pobreza es precisamente un indicador que muestra el déficit promedio de ingresos de los hogares pobres como una proporción de la línea de pobreza, indicando qué tan pobres son los pobres. El examen de este índice deja ver que con el tiempo la brecha de ingresos se reduce en las dos ciudades, pero sigue siendo extremadamente alta; en La Paz, los hogares indigentes tienen un ingreso que equivale a 0,70 líneas de pobreza (0,73 en 1989), mientras que en El Alto la brecha es menor con un índice de 0,59 (0,64 en 1989); la situación es menos crítica en el caso de los hogares pobres, a pesar de que no han visto reducir la proporción del déficit entre los dos momentos; con un mismo índice en 1989 y 2000, esta brecha es mayor en La Paz (0,34) en comparación con El Alto (0,22 en 1989 y 0,21 en 2000). En otros términos, los hogares indigentes son extremadamente pobres en las dos ciudades y no es posible vislumbrar, al menos, su tránsito hacia niveles más atenuados de pobreza (Cuadro 12).

Nuevamente, el examen de las características laborales asociadas a la pobreza muestra que los hogares con inserciones precarias altas y medias son los que presentan mayores brechas o déficits de ingresos, tanto entre los indigentes como entre los pobres. En el otro extremo, los hogares con inserciones plenas se han beneficiado con una mejora sustantiva de sus ingresos familiares; es decir que opera una transferencia desde los grupos indigentes a los no pobres con diferencias de magnitud atribuibles al grado distinto de desigualdad del ingreso en las dos ciudades. En La Paz, los hogares no pobres han visto aumentar sus ingresos desde el equivalente a 1,09 líneas de pobreza a 2,46 y, en El Alto, desde 0,95 a 1,23, lo que significa que, para estos hogares que hoy han esquivado la pobreza, existen mayores riesgos de volver a caer en esta situación. Finalmente, se puede apreciar también que, con el tiempo, los hogares no pobres con inserciones laborales no precarias o precarias bajas han

capitalizado en su favor ingresos por encima de la línea de pobreza, puesto que sus homólogos con precariedad media y alta obtienen ingresos apenas por encima de la línea de pobreza (Cuadro 12).

Cuadro 12

Intensidad de la pobreza según calidad de la inserción laboral del hogar, 1989-2000

La Paz	Nivel de pobreza							
	Indigente		Pobre		No pobre		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Hogar no precario	0,60	0,60	0,33	0,26	-1,53	-3,16	-0,84	-2,49
Hogar precario bajo	0,72	0,68	0,29	0,33	-0,97	-2,46	0,02	-0,59
Hogar precario medio	0,78	0,74	0,39	0,43	-0,47	-2,01	0,48	0,03
Hogar precario alto	0,70	0,70	0,34	0,33	-0,75	-0,80	0,30	0,19
Total	0,73	0,70	0,34	0,34	-1,09	-2,46	0,04	-0,75

El Alto	Nivel de pobreza							
	Indigente		Pobre		No pobre		Total	
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	1989	2000
Hogar no precario	0,50	0,54	0,20	0,20	-2,09	-1,35	-0,70	-0,79
Hogar precario bajo	0,65	0,54	0,22	0,21	-1,35	-0,75	0,11	-0,21
Hogar precario medio	0,68	0,67	0,22	0,16	-0,54	-1,81	0,59	0,03
Hogar precario alto	0,63	0,58	0,22	0,23	-0,77	-0,60	0,38	0,16
Total	0,64	0,59	0,22	0,21	0,95	-1,23	0,31	-0,14

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

PRECARIEDAD LABORAL, (DES)INTEGRACIÓN SOCIAL Y LÍNEA DE POBREZA

La magnitud relativa de la pobreza también está asociada con el tipo y la calidad de la inserción laboral de los hogares. Es decir que, dependiendo de los arreglos resultantes, las probabilidades de salir del circuito de la pobreza son diferenciadas; a su vez, estos arreglos interactúan con la pertenencia a una determinada posición en la estructura de clase. A continuación, se analiza la incidencia de estos factores en su conjunto sobre el bienestar de los hogares.

Dada la mayor precariedad del empleo y las bajas remuneraciones en los estratos medios e inferiores de la estructura ocupacional, solamente los hogares que han logrado una ocupación plena de sus miembros, o aquellos en los cuales al menos los jefes de hogar logran

esta condición siendo asalariados (precariedad baja y media), han tenido mayores probabilidades de salir de la pobreza. Así, en todos los grupos sociales, son los hogares cuyos miembros sólo tienen acceso a ocupaciones precarias (precariedad alta) quienes mantienen altos índices de pobreza e indigencia.

Cuadro 13

Incidencia de la pobreza según calidad de la inserción laboral del hogar, 1989-2000 (en %)

La Paz	Incidencia de la pobreza						1989-2000 Total
	Indigente		Pobre		No Pobre		
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	
Hogar no precario	4,8	8,3	31,3	10,5	63,9	81,3	100,0
Hogar precario bajo	39,3	25,2	25,6	38,5	35,0	36,4	100,0
Hogar precario medio	61,6	55,6	20,9	20,9	17,4	23,5	100,0
Hogar precario alto	39,3	41,8	44,1	32,0	16,6	26,3	100,0
Total	37,1	30,2	32,0	27,1	30,9	42,7	100,0

El Alto	Incidencia de la pobreza						1989-2000 Total
	Indigente		Pobre		No pobre		
	1989	2000	1989	2000	1989	2000	
Hogar no precario	21,1	10,8	36,8	23,1	42,1	66,2	100,0
Hogar precario bajo	63,2	24,2	12,3	23,5	24,6	52,4	100,0
Hogar precario medio	86,3	57,3	11,0	21,3	2,7	21,3	100,0
Hogar precario alto	67,9	41,0	20,4	32,7	11,7	26,3	100,0
Total	68,5	32,8	17,5	26,8	14,0	40,4	100,0

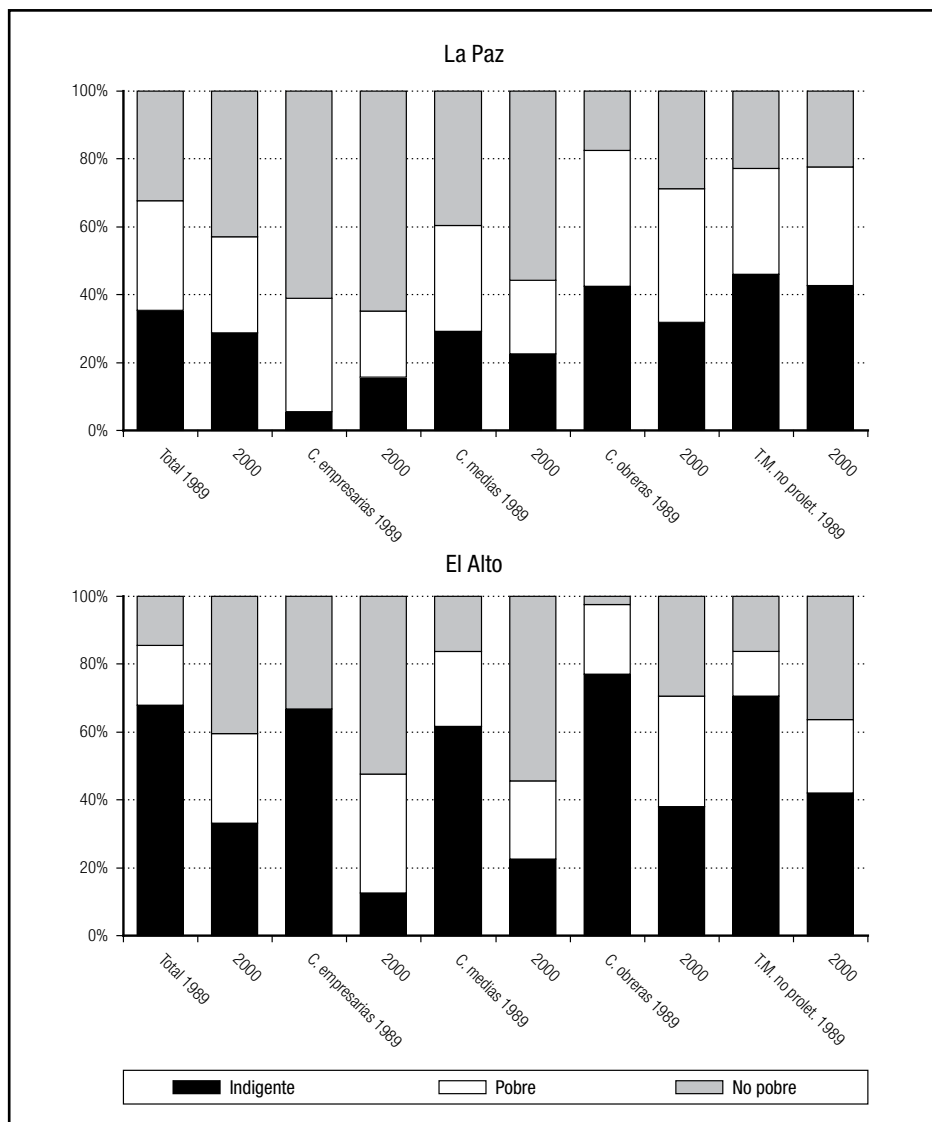
Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Por lo tanto, dadas las trayectorias laborales analizadas hasta aquí, la probabilidad de ubicarse sobre la línea de pobreza es cada vez mayor solamente para los hogares que pertenecen a las clases empresariales y clases medias en las dos ciudades, aumenta levemente para los que pertenecen a la clase obrera y es prácticamente inexistente para el grupo manual no proletario en La Paz (que sigue manteniendo altos índices de pobreza). En cambio, en El Alto, habiendo sido los grupos más afectados por la pobreza en 1989 (en particular, aquellos que pertenecen a la clase obrera), sin salir de esta situación dominante, han logrado mejorar su posición relativa aumentando su presencia entre los hogares no pobres. A pesar de las mejoras observadas, los mayores índices de

pobreza entre los hogares obreros y manuales no proletarios dejan ver la persistencia de las peores condiciones de bienestar para el 45% de los hogares en La Paz y el 63% en El Alto que conforman estos grupos sociales (Gráfico 21).

Gráfico 21

Incidencia de la pobreza según posición del hogar en la estructura social, 1989-2000



Fuente: Elaboración propia con base en INE (1989); CEDLA (2000).

Considerando que bajo el concepto de precariedad laboral se agrupa a un sinnúmero de formas de trabajo –algunas antiguas y otras novedosas–, es posible concluir que la pobreza está cada vez más asociada con el predominio de empleos asalariados y no asalariados que presentan todas o algunas de las siguientes características: *discontinuidad del trabajo*, duración corta, riesgo elevado de pérdida, incertidumbre y temporalidad como norma; *incapacidad de control sobre el trabajo*, disponibilidad permanente, jornadas extensas, subordinación, elevado índice de rotación; *desprotección social del trabajador*, ausencia de prestaciones sociales, alta discriminación y segregación; *bajas remuneraciones*, salarios o ingresos mínimos, variables, sin promoción ni incentivos, etcétera.

En La Paz, el 70% de los hogares obreros, el 52% de los de clases medias y el 40% del grupo de trabajadores manuales no proletarios presenta inserciones altamente precarias; una situación parecida se encuentra en El Alto, donde los hogares obreros en un 60%, los de las clases medias en un 33%, el grupo manual no proletario en un 44% e incluso las clases empresariales en un 50% están concentrados en empleos altamente precarios. Esto alude a una situación crónica de inseguridad en el empleo y/o en los ingresos en el mercado laboral de donde emergen con más fuerza que antes situaciones de (des)integración social, en un movimiento constante de inclusión y desafiliación que lleva al empobrecimiento de la mayor parte de los hogares en ambas ciudades.

Reconociendo que estas tendencias se han generalizado en los diferentes países de América Latina, queda en evidencia que la intencionalidad integradora no forma parte del proyecto neoliberal (Pérez Sainz, 2003); todo lo contrario, el empleo y los ingresos son, y seguirán siendo, las principales variables de ajuste para mantener una inserción subordinada en la economía mundial, a la vez que el discurso de lucha contra la pobreza continuará siendo esgrimido como instrumento para aplacar las tensiones sociales que se originan en la exclusión social y la pobreza.

Capítulo V

POLÍTICAS SOCIALES Y TENDENCIAS DISTRIBUTIVAS

EBRP: CONTINUIDAD ANTES QUE RUPTURA

A fines de 1999, las instituciones financieras internacionales comenzaron a reconocer los magros resultados de sus políticas y desarrollaron un nuevo discurso en torno a la necesidad de una mayor conexión entre las políticas económicas y sociales que promueven en nuestros países. En septiembre de 1999, los objetivos a los que se dirigen los préstamos concesionales del FMI incluyen la reducción de la pobreza como parte de un recetario ampliado de lineamientos de políticas que se suman a las vigentes en el marco del ajuste estructural y las reformas del Estado. En los hechos, se somete a los países deudores a nuevos condicionamientos que velan en lo esencial por la recuperación de los nuevos desequilibrios macroeconómicos y la restauración del ritmo de crecimiento económico fuertemente abatido en el contexto de la crisis internacional.

Estas nuevas condiciones abren paso al Programa de Facilidades para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction Growth Facility, PRGF), una versión reforzada del ajuste estructural³⁴.

34 Al decálogo de políticas originales del Consenso de Washington se añaden otros diez lineamientos de política para acceder a este nuevo servicio de facilidades crediticias. Dani Rodrick (2002) los resume en los siguientes: gobernabilidad corporativa o formalización y modernización en la gestión directiva de las empresas, lucha contra la corrup-

Para acceder a este servicio, el país interesado debe elaborar una Estrategia de Lucha contra la Pobreza (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP); la EBRP elaborada en el año 2000 y aplicada desde 2001 es la versión local de esta iniciativa global (CEDLA, 2003)³⁵.

Siguiendo con el enfoque de condicionalidad cruzada, también el Banco Mundial empieza a subordinar nuevos financiamientos (Poverty Reduction Support Credit, PRSC) a la existencia de una estrategia de reducción de la pobreza y a la aprobación de un nuevo programa de facilidades (PRGF) por parte del FMI. Con estos antecedentes, se busca poner en evidencia que, desde su concepción, la EBRP no es parte de un nuevo enfoque de políticas orientadas por objetivos de desarrollo e integración social como condición para avanzar en la reducción de la pobreza, sino un nuevo camino de sometimiento y dependencia de las políticas globales que exigen más apertura al comercio y a los flujos de capital, más privatización, así como una mayor estabilidad macroeconómica con mayor inversión y gasto fiscal.

Así lo señala el documento de la EBRP:

La estrategia estará orientada a generar crecimiento con mayor utilización de mano de obra; sin embargo, la contribución del sector privado nacional y extranjero seguirá siendo fundamental para elevar las tasas de crecimiento. Los escenarios macroeconómicos desarrollados asumen que se continuará con el proceso de creación y consolidación de un ambiente jurídico y económico apropiado para que el sector privado contribuya a los objetivos de crecimiento (EBRP, 2001: iv).

Junto a estas prioridades, se plantea mantener los criterios de focalización del gasto social, esta vez dirigidos a atender con mayor selectividad las necesidades básicas de los grupos más pobres de la población, en el marco de la política social. Sin novedades en relación con las políticas en curso y, por el contrario, una total convergencia con el enfoque de los organismos multilaterales, sometiéndose al nuevo recetario de reformas institucionales, en la perspectiva de acceder a recursos de préstamo para financiar el crecimiento económico al cual se subordinan, en último término, los objetivos de reducción de la pobreza.

ción, mercados laborales flexibles, acuerdos con la OMC, nuevos códigos y estándares financieros, apertura "prudente" de la cuenta de capitales, regímenes de intercambio no intermediados, bancos centrales independientes orientados por objetivos de control de la inflación, impulso a redes sociales de seguridad y objetivos de lucha contra la pobreza.

35 El análisis que sigue se circunscribe a esta primera formulación de la EBRP. Nuevas versiones elaboradas hasta 2003 no modifican lo esencial de la propuesta.

Los gobiernos de Bolivia siempre han cumplido con todos los requisitos para participar en estos nuevos programas, incluyendo la revisión periódica de la EBRP para las sucesivas fases de negociación. De esta manera, el país fue habilitado para acceder por segunda vez a la condonación de una parte de su deuda externa a través del Programa HIPC II, para liberar recursos con destino a los programas de reducción de la pobreza³⁶. Dadas las limitaciones financieras del Estado, el financiamiento de inversión social previsto en la EBRP se restringe básicamente al uso de los recursos liberados por la iniciativa HIPC II (CEDLA, 2003).

La estrategia distingue cuatro componentes en su aplicación: generación de empleo e ingresos; desarrollo de las capacidades productivas; redes de seguridad y protección social; y mayor participación e integración social. Para ello, define una asignación de recursos que teóricamente debían pasar a concentrarse en los ámbitos de infraestructura productiva y social (70%), salud (10%) y educación (20%). No obstante, con una inversión pública en aumento, estas proporciones no se han asumido con el tiempo. Han primado los componentes de política social dirigidos a la satisfacción de las principales carencias características de la pobreza (salud, educación y saneamiento básico). La inversión social y su distribución por sectores no presenta modificaciones significativas que apunten a fortalecer procesos en los dos primeros componentes de la estrategia. A partir de esa evidencia, se infiere el carácter discursivo que nuevamente adoptan los objetivos con mayor contenido redistributivo en el marco de la política de reducción de la pobreza.

Es decir que, mientras el objetivo de equidad sigue ausente en la concepción de la política económica, se busca compensar los efectos negativos de su aplicación por la vía del aumento en el gasto social. Si bien esto ocurre desde la segunda mitad de la década del noventa, en el contexto de la EBRP la participación del gasto social respecto al PIB alcanza su nivel más alto dentro de los límites impuestos por la escasez de recursos. Además, mientras el gasto social ha sido cubierto crecientemente con recursos internos, la inversión social ha pasado a depender del ahorro externo bajo la forma de condonación de la deuda (HIPC) y nuevos préstamos.

36 Bolivia forma parte de esta iniciativa desde 1998 en el marco del programa de alivio de la deuda para países altamente endeudados (HIPC I), cuyos pobres resultados abrieron paso a la segunda fase del mismo, sujeto a la aprobación de una carta de intenciones con el FMI y de una estrategia nacional de reducción de la pobreza. A diferencia de la iniciativa del HIPC I, en esta nueva ronda, nuevos préstamos del BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF), además de otros fondos que provienen de la cooperación bilateral, se han sujetado a los acuerdos previos con el FMI y el Banco Mundial.

La evolución del gasto y la inversión por habitante en los países de la región demuestra que, en promedio, pasó de 360 dólares en 1990 a 540 dólares en 2001 (CEPAL en OIT, 2002). Comparando este desempeño con lo que ocurre en Bolivia, se evidencia que, a pesar del aumento observado, el país sigue siendo el más rezagado en este campo; para el año 2000 este monto ascendía a 173 dólares, equivalente a un tercio del observado para el conjunto de los países de la región.

Por otra parte, distinguiendo el gasto funcional y la inversión social, se advierte que esta última evoluciona lentamente y se sitúa en un nivel muy bajo, con 50 dólares por habitante cada año, un monto absolutamente reducido para avanzar en los objetivos de lucha contra la pobreza de la EBRP. Además, es justamente en el marco de la inversión social donde se inscriben los objetivos dirigidos a estimular la generación de empleo e ingresos y la capacidad productiva; por lo tanto, su cumplimiento está sujeto a una severa restricción financiera y a condiciones que, desde las políticas de austeridad fiscal, limitan los impactos redistributivos esperados de la política social (Cuadro 14).

Cuadro 14

Bolivia: gasto e inversión social por sectores, 1995-2000 (en %)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total gasto e inversión	835ⁱ	1.037ⁱ	1.222ⁱ	1.376ⁱ	1.426ⁱ	1.496ⁱ
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Salud	25,0	23,4	21,6	21,0	19,9	20,4
Educación	42,1	40,3	38,7	35,4	36,3	35,6
Saneamiento básico	5,5	8,1	6,5	6,0	6,9	6,1
Urbanismo y vivienda	9,0	5,8	4,8	4,6	3,4	3,3
Desarrollo rural	5,5	4,7	4,9	7,2	6,9	7,3
Otros (caminos vecinales)	1,4	1,9	1,9	2,4	3,2	2,8
Pensiones	11,5	15,8	21,6	23,4	23,4	24,5
Total gasto social	593ⁱ	730ⁱ	892ⁱ	999ⁱ	1.017ⁱ	1.057ⁱ
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Salud	30,8	28,9	26,0	25,4	23,8	23,0
Educación	53,1	48,6	44,4	42,3	43,4	42,4
Pensiones	16,1	22,5	29,6	32,3	32,8	34,6

Cuadro 14 [continuación]

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total inversión socialⁱⁱ	242,2ⁱ	307,4ⁱ	330,4ⁱ	377,3ⁱ	409,4ⁱ	437,7ⁱ
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Salud	10,7	10,2	9,9	9,3	10,1	13,9
Educación	15,2	20,6	23,1	17,0	18,7	19,1
Saneamiento básico	18,9	27,3	24,2	21,9	24,1	20,8
Urbanismo y vivienda	31,2	19,7	17,5	16,9	11,8	11,4
Desarrollo rural	19,1	15,8	18,3	26,1	24,2	24,9
Otros (caminos vecinales)	4,9	6,4	7,0	8,8	11,1	9,9
Indicadores de gasto social						
Gasto e inversión social/PIB (en %)	12,4	14,0	15,4	16,2	17,2	18,1
Gasto e inversión por habitante ⁱ	120,1	-	-	-	-	172,9
Gasto social por habitante ⁱ	85,3	-	-	-	-	122,3
Inversión social por habitante ⁱ	34,8	-	-	-	-	50,6
Inversión social/Inversión total ⁱⁱⁱ	46,6	52,2	60,3	74,8	77,2	75,0
Inversión social/Inversión total ^{iv}	35,4	40,7	45,0	48,6	49,9	48,9

Fuente: Elaboración propia con base en la Unidad de Programación Fiscal, Ministerio de Hacienda.

ⁱ Gasto e inversión social en millones de dólares.

ⁱⁱ Incluye la inversión del gobierno central, las instituciones descentralizadas (prefecturas y municipios) y el Fondo de Inversión Social (FIS).

ⁱⁱⁱ Inversión social en todas las áreas consideradas.

^{iv} Excluye la inversión social en desarrollo rural y otros.

A pesar de este escenario, la mayoría de los programas de combate a la pobreza siguen dirigidos a los grupos marginados del campo y las ciudades, con resultados escasos en la satisfacción de algunas necesidades básicas (salud, educación y saneamiento básico), y sin que necesariamente se haya producido la integración social de los grupos atendidos, ni que las acciones se correspondieran con sus demandas. De acuerdo con Vilas (1996), esto obedece a la subordinación de los programas a un esquema global de acumulación que excluye a mayor velocidad que el ritmo con que esos programas compensan y al carácter accesorio asignado a la política social dentro del esquema dominante de acumulación.

Mientras tanto, la intervención del Estado, en respuesta a los intereses de las empresas transnacionales y de las empresas nacionales afectadas por los resultados negativos de las reformas sobre la capacidad de consumo de los hogares y por los cambios en el contexto económico internacional, sigue siendo muy activa en aspectos de alivio financiero y tributario y flexibilidad de los mercados laborales³⁷. Esta relación no solamente impone mayores restricciones para la disponibilidad de recursos financieros con destino a las acciones de lucha contra la pobreza, sino que genera nuevas fuentes de empobrecimiento de la población, tal como ocurre con el abatimiento de las condiciones laborales, que tienen lugar por la omisión fiscalizadora del cumplimiento de los derechos laborales o por el avance del Estado en las normas de flexibilidad laboral dictadas en apoyo a las estrategias de abaratamiento de los costos laborales en las empresas, con graves consecuencias sobre la calidad de vida de los trabajadores.

ORIENTACIONES DISTRIBUTIVAS DE LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Considerando la evolución del gasto social y su distribución por componentes, es importante evaluar sus efectos sobre la equidad y la reducción de la pobreza. Para este propósito, se recurre a un estudio de impacto de la efectividad de la gestión pública en la provisión de servicios sociales básicos realizado por la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE) del Ministerio de Hacienda, en 1998.

El análisis comienza subrayando que el acceso de los hogares a servicios sociales de salud, educación o vivienda públicos equivale a percibir un ingreso implícito por los servicios básicos; por lo tanto, se trataría de un ingreso adicional al ingreso inicial o autónomo que obtienen los hogares por concepto de trabajo. Bajo esta premisa, la evaluación del impacto distributivo del gasto social se efectúa tanto a un nivel agregado como a partir de sus componentes con referencia a los hogares diferenciados según quintiles de ingreso³⁸.

37 Como ocurre actualmente con la Ley de Reestructuración de las Empresas, la condonación de multas e intereses por concepto de deudas tributarias y a la seguridad social, o las medidas de apoyo a las exportaciones en el marco del Acuerdo Comercial de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga (ATPDEA), suscrito con Estados Unidos, donde se norma la creación de "maquicentros" para favorecer el abaratamiento de costos laborales de las empresas, sustituyendo la relación laboral por una relación civil bajo contratos por obra.

38 La insuficiencia de información estadística no permite actualizar estos indicadores; sin embargo, su utilidad para los propósitos de este análisis ha sido valorada a partir de la similitud de los indicadores de gasto entre 1998 y 2000.

Los resultados encontrados reafirman la hipótesis sobre el escaso impacto distributivo de la política social. Con excepción del componente de educación básica, el gasto fiscal tiene un carácter regresivo, es decir que los hogares más pobres son los menos favorecidos por el gasto en los servicios de salud, seguridad social y vivienda (Cuadro 15).

Cuadro 15
Bolivia: participación relativa de los hogares en el ingreso autónomo
y total según quintiles de ingreso, 1998 (en %)

Quintiles de ingreso	Gasto autónomo*	Gasto total**	Educación básica	Educación superior	Salud	Seguridad social	Vivienda
Quintil inferior	4,1	5,0	36,6	12,4	15,2	13,5	7,8
Quintil II	7,8	8,5	26,3	15,5	14,7	19,9	11,1
Quintil III	12,0	12,7	19,3	22,9	24,4	22,4	14,7
Quintil IV	18,7	18,8	12,3	25,8	24,4	19,0	20,6
Quintil superior	57,3	55,0	5,5	23,4	21,3	25,2	45,8
Coefficiente de Gini***	0,587	0,552	-0,34	0,129	0,08	0,09	0,34

Fuente: UDAPE (1998).

* Realizado con ingresos que provienen del trabajo.

** Gasto autónomo y gasto público social.

*** Índice de concentración.

Como se puede apreciar a nivel agregado, el gasto social tiene poca incidencia sobre la distribución inicial; si bien la función compensadora del gasto social se refleja en los dos quintiles más bajos de la distribución, no es suficiente para modificar el patrón distributivo, puesto que el coeficiente de Gini se reduce levemente sin ser significativo para revertir el grado de concentración del ingreso autónomo. Asimismo, la información evidencia el carácter regresivo o de refuerzo a la concentración del ingreso que cumplen cuatro de los cinco componentes del gasto público, cuyo acceso se encuentra fuertemente limitado para los estratos más pobres de la población (vivienda, seguridad social y salud). Incluso, en el sector educación se puede afirmar que sólo la educación básica tiene un carácter progresivo, mientras que la educación superior parece encontrarse limitada a los sectores de ingreso medio y alto.

Este breve recuento demuestra que, mientras se apela a la política social para compensar las inequidades que dejan los mercados, el cambio de sus funciones y su contenido pragmático llevan a una pérdida de efectividad que redundan en magros resultados en materia de equidad y redistribución. Estas constataciones llevan a revalorizar la importancia crucial que posee el ingreso autónomo o del trabajo en la conformación del ingreso de los hogares y, por lo tanto, su centralidad para el bienestar de la población. Paradójicamente, bajo el actual esquema de políticas

públicas, desde el ámbito económico y social, los objetivos de empleo y mejora de los ingresos laborales han sido relegados y son recogidos de manera discursiva para los procesos electorales o para negociar recursos financieros en nombre de la lucha contra la pobreza.

PRIVATIZACIÓN Y DESPOLITIZACIÓN DEL BIEN COMÚN: ¿HACIA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA?

Las políticas neoliberales han estado acompañadas de un discurso y una práctica orientados a la negación sistemática de una solidaridad institucionalizada en derechos a partir de políticas redistributivas. Esto ha significado que el concepto de equidad se redimensione. El mismo ya no se asienta en la distribución de los ingresos y en el rol del Estado para promover la integración social. Para el Estado, rige el principio de subsidiariedad; para los individuos “capaces”, la competencia o el mercado; y para los pobres, la solidaridad para enfrentar los efectos “no deseados” del ajuste, las fallas o discriminaciones del mercado.

Así se explicita esta lógica en la EBRP, afirmando que “no pretende que el Estado sea el único responsable de la lucha contra la pobreza, no desea impulsar un retorno al paternalismo estatal; antes bien, considera que aquella es una tarea que exige la corresponsabilidad entre los distintos actores de la sociedad y del Estado” (EBRP, 2001: Prefacio i). Para ello, propugna privatizar el bien público, trasladando a la sociedad la solución de antiguos y nuevos problemas que surgen como resultado de las reformas, mediante el respeto y el impulso a “todo el capital social que han desarrollado los bolivianos, ya sea en sus comunidades, organizaciones barriales, juveniles, religiosas o de cualquier otra índole para trabajar en temas específicos de lucha contra la pobreza” (EBRP, 2001: Prefacio ii).

En otros términos, ante la ruptura de las formas de protección y cohesión social anteriores, se apela al capital social para compensar la dificultad creciente a la que se enfrentan importantes grupos de población para reproducirse por medio de ingresos monetarios y de los aportes redistributivos del Estado. Como señala Álvarez, la promoción del capital social como alternativa a la cohesión social no es más que una estrategia funcional para compensar las fallas del mercado y el retiro del Estado; para negar a los bolivianos la condición de sujetos de derecho y avanzar hacia una mayor despolitización del bien común. La realidad muestra que, bajo las actuales condiciones de concentración del poder y de la riqueza, el único capital social que puede fortalecerse es aquel a cuyos intereses responden las políticas públicas (Álvarez, 2001).

Existen muchos ejemplos de cómo la población, en particular los pobres, a los que priorizan las políticas focalizadas, han pasado a ser sujetos de las políticas de “asistencia”, perdiendo su condición de

sujetos de “derechos”. Entre otros, los Programas de Emergencia de Empleo (PLANE) que se ejecutan en el marco de la EBRP ilustran de manera palpable esta nueva lógica, para mencionar una de las pocas acciones en este ámbito. Con un enfoque pragmático de “asistencia” se dirigen a la distribución de un salario mínimo a los más pobres por una sola vez y “por sorteo”; y ni siquiera brindan acceso a todos los que demandan esta asistencia.

Mientras la realización de derechos se traslada a la esfera del mercado y el Estado reduce su rol a la creación de condiciones para “aumentar las oportunidades” de los más pobres –no del conjunto de la sociedad–, se establece una gran paradoja. En lugar de posibilitar una reducción del papel del Estado, los efectos negativos de la aplicación de las políticas neoliberales sobre el ingreso autónomo de los hogares, es decir por concepto de trabajo, exigirían un mayor gasto social y gobiernos más activos en la adopción de políticas redistributivas y la provisión de servicios sociales básicos para responder a la pobreza estructural y a la emergencia de nueva pobreza ocasionada por la inseguridad de los ingresos y la creciente desprotección social consecuencia de la menor cobertura de la seguridad social.

LA CENTRALIDAD DEL INGRESO LABORAL EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS: UNA VISIÓN DE LOS SUJETOS

El aumento de la precariedad de los puestos de trabajo, que se convirtió en un rasgo central del mercado laboral boliviano, junto a la expansión de las tasas de desempleo abierto redundaron en ingresos familiares decrecientes con severos efectos sobre la capacidad de consumo de los hogares, lo que ha llevado a agudizar la desigualdad y la vulnerabilidad social, provocando el resquebrajamiento de la vida familiar que nutre los procesos de desintegración social.

Las reflexiones que siguen buscan llamar la atención sobre cuestiones subjetivas conexas a la persistencia de la pobreza, a partir de percepciones de los sujetos sobre sus efectos en la vida de los hombres, mujeres, jóvenes y niños que la padecen³⁹.

Centralidad del trabajo. La falta de trabajo, la calidad del mismo y los sentidos que posee son cuestiones esenciales para ubicar el lugar del individuo en la sociedad y el modo en que satisface sus necesidades esenciales. En las estrategias de vida que elaboran los miembros de

39 Este acápite contiene las percepciones recogidas en entrevistas semiestructuradas realizadas por los autores a una pequeña submuestra de hogares que respondieron a la encuesta ECEDLA (CEDLA, 2000). La selección de los hogares consideró su ubicación según línea de pobreza.

los hogares, el acceso a un trabajo como fuente regular de ingresos es señalado como el elemento central que articula a otras prácticas orientadas a garantizar la subsistencia. Por ello, ante la imposibilidad de conseguir un empleo permanente, los miembros de los hogares pobres e indigentes no desaprovechan ninguna oportunidad para generar un ingreso –por mínimo que sea–, puesto que lo que estaría en juego es la alimentación diaria. Por esta razón, aun los trabajos eventuales recurrentes son valorados como medio esencial para cubrir sus necesidades más apremiantes.

Como señalan algunos entrevistados, sin ingresos por concepto de trabajo la vida misma se encuentra amenazada. Frente al desempleo de los jefes de hogar, la inseguridad crónica o los bajos ingresos que obtienen, la salida de otros miembros de la familia a la actividad económica ya no es solamente una alternativa sino un imperativo que no reconoce sexo ni edad.

No tener trabajo en algunos momentos me afecta mucho. Para poder comprar alimentos, mi esposa tiene que trabajar en lo que sea por los niños; tiene que buscar trabajo como sea. Si lo que gano no alcanza para que mis hijos puedan comer, ellos también tienen que trabajar; si yo no encuentro en qué ganar, mis hijos tendrán que ayudar para mantenernos (Entrevista a hogares).

Cuando la capacidad de movilizar a más miembros del hogar es menor, como ocurre en algunos hogares indigentes, se hace referencia a traslados temporales al área rural para conseguir alimentos a través de su concurso en las labores agropecuarias de miembros de la familia extendida (padres, hermanos), así como también a pagos en especie por el uso de parcelas que mantienen en el campo. Esta estrategia ha sido señalada con frecuencia por miembros de los hogares indigentes en El Alto. “No alcanza para comer; a veces recibo productos del campo o voy a ayudar en la siembra, la cosecha, para traer algo que nos salve de esta situación” (Entrevista a hogares). En los hogares pobres, esta recurrencia a vínculos con el área rural es menos frecuente, pero todavía aparece como un recurso para contrarrestar la situación crítica en la que viven.

Inseguridad del ingreso; restricción de la capacidad de consumo. Además de la insuficiencia, la inseguridad en los ingresos es el aspecto más destacado de la vida cotidiana de los hogares pobres e indigentes. Cada vez más, la característica que los une son las trayectorias laborales inestables: “una persona está unos meses desocupada, luego obtiene un trabajo, después otra vez está desocupada, consigue otro puesto inestable y así; nunca se puede asegurar el ingreso del próximo mes; ni siquiera

contamos con seguro de salud y menos con la esperanza de tener jubilación en nuestra vejez” (Entrevista a hogares).

Los jóvenes en estos hogares dan cuenta de trayectorias laborales mucho más discontinuas con cambios constantes en el oficio que desempeñan. Parece no importar dónde o como qué trabajar; “lo importante es encontrar un buen trabajo”. Un buen trabajo es aquel en el que pueden percibir “ingresos buenos”, “donde se gana algo más” o “que tiene buena paga”. Así, la creciente eventualidad del trabajo desde esta perspectiva también se asocia a la insatisfacción con el ingreso; varios de estos jóvenes afirman que “por necesidad y por no estar conforme con la paga” cambiaron en varias ocasiones de empleo en el último año. En este recorrido, no logran acumular la experiencia laboral necesaria para acceder a los empleos de mejor calidad a los que dicen aspirar.

Entre los miembros adultos de los hogares, por lo general trabajadores independientes, la inseguridad en los ingresos que proviene de las variaciones de la demanda y la excesiva competencia entre sí es considerada el principal factor que agrava su situación de pobreza. Habiendo logrado asentarse en un trabajo por su cuenta, si bien valoran el hecho de tener su propio negocio, remarcan que “en muchos casos sólo sirve para sobrevivir”, expresando una situación de incertidumbre permanente que los lleva a transitar desde una situación de pobreza a la indigencia o viceversa.

La insistencia en el menor consumo alimentario como uno de los efectos más críticos en una situación de indigencia muestra un estado extremo de carencias, pues señalan que esto ocurre a pesar de haber realizado enormes sacrificios en el consumo de otros componentes, como la energía, el agua, la salud, el transporte, el vestuario y las condiciones de la vivienda (propias o alquiladas de muy baja calidad). En los hogares pobres que logran, al menos, cubrir el costo de la canasta alimentaria, las restricciones en el consumo afectan sobre todo a la mejora de la vivienda, el transporte y la recreación.

Ingreso regular: buena paga. Ante la imposibilidad de encontrar trabajo, muchos de los miembros de hogares de indigentes buscan trabajo en el PLANE; esta experiencia es vivida por estos trabajadores como negativa, porque se señala que es “mucho trabajo, poca paga y poca duración (entre uno y tres meses)” o “el pago retrasado y trabajo en exceso”. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, señalan que volverían a trabajar en el PLANE debido a la urgencia por procurarse un ingreso, aunque las oportunidades son muy limitadas dado el enfoque de “reparto” entre la mayor cantidad de población y las limitaciones de acceso a recursos externos de donación y crédito con los que opera este programa.

Quienes trabajan esporádicamente en el PLANE son básicamente las esposas y las jefas de hogar, lo que puede atribuirse a las condiciones de trabajo y de salarios (equivalente a un mínimo nacional), que llevan a movilizar a la población inactiva antes que a los cesantes o aspirantes.

A partir de este tema, los entrevistados dejan ver que su demanda se dirige a la posibilidad de contar con una “entrada segura” y “buena paga” como medio para salir de la pobreza, por las posibilidades que brinda para prever el futuro. Algunos van más allá y plantean su aspiración a lograr un trabajo fijo; “quisiera tener un trabajo que me permita tener jubilación” o “me gustaría tener un empleo con sueldo fijo” son las expresiones comunes al juzgar su trabajo actual. Sueños y esperanzas que sólo están al alcance de la fracción reducida de hogares no pobres y de pocos miembros activos de los hogares pobres; sus miembros activos en las ciudades de La Paz y El Alto.

Redes sociales: ausencia de mecanismos de solidaridad. Los diferentes intercambios y flujos que se dan con cierta regularidad, un espacio-tiempo a través de los vínculos sociales, permiten conformar lo que se denomina redes sociales. En los hogares indigentes, tanto en El Alto como en La Paz, parece existir un fuerte debilitamiento de los lazos de solidaridad familiares, ya que los escasos vínculos que reportan se establecen con las amistades y los vecinos con carácter ocasional. En cambio, los hogares pobres todavía establecen vínculos sociales más estables, aunque también con los vecinos o las amistades, antes que con sus familiares. En ambos casos, las relaciones tienen un contenido pragmático vinculado a la gestión colectiva de los servicios de luz, agua y saneamiento en las áreas de residencia.

El otro ámbito de interacción es el crédito o préstamos en dinero o especie para la “comida, transporte y el pago de servicios de agua y luz”. A medida que se encuentra una mejor situación relativa de ingresos, el crédito tiene otros destinos como “un evento familiar”, “el pago de otras deudas”, “la refacción de la vivienda” o “la actividad económica”. Es poco frecuente el acceso al crédito institucional; la fuente principal son las amistades y los proveedores o tiendas de barrio. Desde esta lógica surge un llamado de atención para quienes todavía creen que el microcrédito es una política eficaz de lucha contra la pobreza extrema.

Capítulo VI

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

LAS EVIDENCIAS RECOGIDAS en este estudio llevan a cuestionar los supuestos de la ideología neoliberal en cuanto a las ventajas del libre mercado para transformar la realidad económica y social y avanzar en la superación de la pobreza en nuestras sociedades. En efecto, mientras las reformas se orientan a trasladar la solución de los problemas de trabajo e ingresos a la esfera del mercado y a la responsabilidad de los hogares y los individuos, estos se enfrentan a una estructura ocupacional y social que no controlan y que actúa como límite para el despliegue y los resultados de sus estrategias de vida y de trabajo.

Con la crisis del empleo empresarial –público y privado– y la difusión del empleo precario en todos los sectores del mercado de trabajo, se ha consolidado una estructura ocupacional polarizada entre un núcleo reducido de puestos de trabajo que demandan mano de obra calificada o semicalificada, sujetos a remuneraciones por encima del promedio y a las prestaciones sociales establecidas por la ley, y un amplio espectro de puestos de trabajo que exigen bajas calificaciones para su desempeño, sujetos a ingresos bajos y fluctuantes y elevados índices de desprotección social.

El aumento del desempleo estructural y la mayor precariedad del trabajo, que han pasado a constituirse en los rasgos centrales del funcionamiento del mercado de trabajo en nuestra sociedad, han pro-

vocado a su vez un proceso de cambios económicos y sociales que repercuten en la reconfiguración de la estructura social y en las condiciones de vida de los hogares socialmente diferenciados. La estructura de la sociedad según relaciones de clase se ha reconfigurado en favor de una presencia mayoritaria de los grupos manuales no proletarios y de la clase obrera, dejando atrás el peso de las clases medias que se reducen por la declinación del peso del Estado como empleador. Por su parte, las clases empresariales, siendo minoritarias, se nutren y recomponen con la presencia de propietarios de pequeñas empresas.

Frente a las reducidas oportunidades de empleo en ocupaciones no tradicionales y calificadas, independientemente de las características sociodemográficas de los hogares, se verifica un proceso de diferenciación en el tipo y calidad de la inserción laboral en función de la posición de los hogares en la estructura de clase. Mientras es cada vez más difícil asociar empleos de calidad con el sector empresarial y empleos precarios con el sector informal debido a la amplitud de la flexibilidad laboral en todos los sectores del mercado de trabajo, el acceso a los empleos plenos y la movilidad laboral ascendente han pasado a ser un privilegio de las clases empresariales y de una fracción de las clases medias; entretanto, quienes pertenecen a los grupos manuales no proletarios y a la clase obrera transitan en torno a las formas más diversas de trabajo precario con una inseguridad creciente en sus ingresos y con escasas posibilidades de movilidad laboral y social.

En definitiva, lo que se constata es que los jefes de hogar y los miembros secundarios de los hogares de las clases subalternas, que conforman casi dos tercios de la población, están sometidos con mayor frecuencia a condiciones estructurales que los sitúan más cerca del desempleo abierto y del empleo precario antes que de una inserción laboral plena.

En este contexto, las EFT que despliegan los hogares pobres, que se concentran en estos dos grupos sociales, no siempre tienen como resultado una mejora en los ingresos y en el consumo familiar. Mientras que la centralidad del aporte de los jefes de hogar al ingreso familiar está en cuestión, lo que se pierde por efecto del creciente deterioro o inseguridad de los ingresos del principal preceptor apenas logra compensarse con el esfuerzo laboral de otros miembros, o, en el extremo, ni siquiera contribuye a restaurar el nivel de ingreso familiar previo a su salida.

Por lo tanto, bajo las actuales condiciones, las EFT tienen básicamente una función de alivio a una situación inmediata de indigencia o pobreza, mientras que en el largo plazo pueden llevar a un mayor deterioro de su calidad de vida o a la reproducción intergeneracional de esta condición, ya sea por el ingreso prematuro de los hijos al mercado

laboral y las altas tasas de deserción escolar que lo acompañan, como por su incidencia en el aumento de la oferta de mano de obra no calificada que tiene un efecto depresor sobre los salarios y otros ingresos por trabajo.

En efecto, la mayor movilización de los miembros de los hogares al mercado laboral ha resultado ampliamente funcional a las estrategias de abaratamiento de costos laborales de las empresas. Al mismo tiempo que se ha intensificado la competencia laboral, una mayor presión de oferta junto a las normas que favorecen la libre contratación han sido los mecanismos facilitadores del uso flexible de la fuerza de trabajo, con efectos sobre el aumento de la fuerza laboral expuesta a una situación de inseguridad crónica en sus ingresos con la que se asocian altos índices de pobreza e indigencia.

La fuerte correlación que existe entre la calidad del empleo y la situación de pobreza ha sido ampliamente demostrada a lo largo de este trabajo. Los hogares cuyos miembros presentan una inserción laboral precaria, donde los jefes de hogar, parte de los miembros secundarios o todos estos están expuestos a situaciones de inestabilidad laboral, ingresos bajos y fluctuantes, son los más afectados por una situación de pobreza y de indigencia. El hecho de que apenas uno de cada cuatro hogares, en el mejor de los casos, pueda salir de este circuito de precariedad no es más que una expresión del endurecimiento de las barreras estructurales para avanzar en la equidad y la reducción de la pobreza.

Los efectos de las reformas sobre una mayor concentración de la riqueza, de los ingresos y del consumo se evidencian claramente cuando se analiza el caso de la ciudad de La Paz, donde, en más de diez años, la desigualdad se acentúa provocando la persistencia de la pobreza y, sobre todo, de la indigencia, que siguen aumentando en cifras absolutas. En El Alto, la disminución de la indigencia parece asociarse con otros procesos concomitantes a su conformación como ciudad emergente, pero, aun así, el hecho de que en las dos ciudades seis de cada diez hogares sigan siendo pobres y la mitad entre estos permanezca en la indigencia no es más que una nueva constatación de la sobreexplotación del trabajo en favor de la acumulación del capital y de los intereses de los sectores dominantes.

Las condiciones para avanzar en una distribución progresiva del ingreso no están dadas; la estructura ocupacional de la que depende el ingreso autónomo de los hogares tiende a consolidarse e incluso a tornarse más precaria por efecto de las prácticas empresariales de abaratamiento de costos laborales y de las políticas del Estado para avanzar hacia mercados laborales flexibles en favor del mantenimiento de una competitividad espuria y de corto plazo. Por lo tanto, desde el ámbito de la producción, la distribución y, específicamente, el trabajo, sólo se

vislumbran tendencias más regresivas en desmedro de la calidad de vida de la población.

Mientras la profundización de las reformas neoliberales (privatización del acceso a recursos y servicios, apertura comercial, desregulación laboral, seguridad jurídica para las inversiones, propiedad intelectual) continúa afectando negativamente a todos los factores que, desde el ámbito de la producción, la distribución y el trabajo, inciden sobre la persistencia de la pobreza, el Estado asume para sí un rol subsidiario para resolver las carencias de los más pobres desde la política social. No obstante, las evidencias recogidas de sus propias evaluaciones muestran que, si bien los programas alivian algunas de estas carencias, con excepción de la educación primaria, las políticas sociales sectoriales no tienen los efectos distributivos esperados y van a contramano de los efectos concentradores de las políticas económicas implementadas.

A la luz de los hallazgos de este estudio, queda demostrado que la dinámica del mercado necesita estar combinada con un nuevo tipo de intervención del Estado en función de la cohesión social que la lógica del mercado pretende obstaculizar. No hay recetas para este nuevo papel, pero sí existen tendencias en torno a las cuales reflexionar: la vulnerabilidad del crecimiento económico, del ahorro interno, de la inversión pública, del aparato productivo y las débiles condiciones de inserción competitiva en los mercados, como los efectos paradigmáticos de las políticas de libre mercado en la economía. La mayor precariedad laboral y sus efectos sobre la profundización de la precariedad social y la pobreza son los resultados más visibles del predominio de la lógica de la acumulación y de la rentabilidad fácil, a costa del sacrificio de los trabajadores asalariados y de la subordinación del trabajo no salariado.

Es innegable que el único camino que garantiza las condiciones necesarias para superar la desigualdad social y la pobreza continúa siendo el crecimiento económico, la acumulación, pero, sobre todo, la distribución del ingreso. El cuadro que se presenta en términos de los efectos distributivos desde el ámbito del empleo y de la política social es desolador; sin políticas públicas que tengan como objetivo el empleo y la generación de ingresos para garantizar una vida digna, la explosión del desempleo abierto, del trabajo informal, del trabajo asalariado flexible y mal remunerado, así como el avance de la desprotección social y la pobreza de los hogares, continuarán siendo los dramáticos costos para la sociedad.

En consecuencia, las recurrentes crisis económicas, la crisis del trabajo y la persistencia de la pobreza exigen trascender la noción restringida de crecimiento económico para plantearse nuevamente los

retos del desarrollo y la integración social. Por lo tanto, se trata de avanzar en un cuestionamiento profundo de los resultados de las reformas sobre la economía y la sociedad para reelaborar estrategias alternativas de desarrollo distintas a las que propugna el modelo neoliberal.

Es desde los cambios en la sociedad, que emergen a partir del mundo del trabajo, que puede explicarse el reflujo de los movimientos sociales en la era del neoliberalismo, pero también la emergencia de nuevas formas de expresión y lucha de la sociedad por una mayor integración social y el ejercicio de derechos. Es en los gérmenes de movimientos sociales de nuevo cuño donde deben asentarse las bases de la construcción de un nuevo modelo de Estado y sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Agulló, Esteban 2000 “De la precariedad laboral a la exclusión social”, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI”, Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Álvarez, Sonia 1998 “La solidaridad privada e indiferencia pública: la nueva cara de la política social para los excluidos”, III Jornadas Internacionales Estado y Sociedad “La Reconstrucción de la Esfera pública”, Universidad de Buenos Aires/CEA, Buenos Aires, 1 y 2 de octubre.
- Álvarez, Sonia 2000 “Pobreza y desarrollo humano, nuevas categorías para viejas representaciones”, I Jornadas de Políticas Sociales del Mercosur, Consejo de Profesionales en Sociología, Buenos Aires, 20 y 30 de junio.
- Álvarez, Sonia 2001 “Capital social y concepciones de pobreza en el discurso del Banco Mundial, su funcionalidad en la ‘nueva cuestión social’” en Andrenacci, Luciano (org.) *La cuestión social en el Gran Buenos Aires* (Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento).
- Antunes, Ricardo 1999 *¿Adiós al trabajo?: ensayos sobre la metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo* (Buenos Aires: Antídoto).

- Arango, Luz Gabriela 2000 “Género, globalización y desarrollo”, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI”, Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Arze, Carlos 2000 *Políticas sociales y trabajo en el neoliberalismo* (La Paz: CEDLA) Documentos de Coyuntura N° 2.
- Arze, Carlos 2001 *Ajuste neoliberal y mercado de trabajo en Bolivia* (La Paz: GPN/CEDLA).
- Atkinson, Anthony Barnes 1991 “The institution of an official poverty line and economic policy, Welfare State”, Discussion Papers/98, Escuela de Economía de Londres.
- Barchiesi, Franco 1998 “Restructuring, flexibility and the politics of work place subjectivity: a worker inquiry in the South African car industry” en *Rethinking marxism* (Massachusetts) Vol. 10, N° 4.
- BCB-Banco Central de Bolivia 1980-2000 *Memoria de gestión* (La Paz).
- Benería, Lourdes 2000 “Shifting the risk: new employment patterns, informalization and women’s work”, Cornell University, mimeo.
- BM-Banco Mundial, 1998 *Bolivia Country Assistance Strategy (CAS)* (La Paz).
- Bourdieu, Pierre 1997 *Razones prácticas* (Barcelona: Anagrama).
- Castells, Manuel 1996 “Empleo, trabajo y sindicatos en la nueva economía global” en La Factoría <<http://aquibaix.com/factoria>>.
- CEDLA-Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 2000 *Encuesta de empleo y calidad de vida (ECEDLA). Ciudades de La Paz y El Alto* (La Paz: CEDLA).
- CEDLA-Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 2003 *El servicio de crecimiento y reducción de la pobreza del FMI: un callejón sin salida* (La Paz: CEDLA).
- CEPAL-Comisión Económica para América Latina y El Caribe 1997 *Panorama social de América Latina 1996-1997* (Santiago: CEPAL).
- CEPAL-Comisión Económica para América Latina y El Caribe 2000 *Panorama social de América Latina 1999-2000* (Santiago: CEPAL).
- De la Garza, Enrique 2000 “La flexibilidad del trabajo en América Latina” en De la Garza Toledo, Enrique (comp.) *Tratado latinoamericano de la sociología del trabajo* (México DF: El Colegio de México/FLACSO/UAM/FCE).

- Dombois, Rainer 1998a “Globalización y relaciones industriales en Brasil” en *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo* (México DF) Año 4, N° 8.
- Dombois, Rainer 1998b “Tendencias en las transformaciones de las relaciones laborales en América Latina: los casos de Brasil, Colombia y México” en Pries, L. y De La Garza, Enrique (comps.) *Globalización y cambios en las relaciones industriales* (México DF: Rayuela).
- Druck, Maria y Filgueiras, Luiz 2000 “A reestruturação productiva e os impactos sobre o trabalho e o emprego bancario na Bahia/Brasil”, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI”, Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Dupas, Gilberto 2000 “Economía global e exclusão social y pobreza, emprego e o futuro do globalização”, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI”, Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Escóbar de Pabón, Silvia 2001 *El trabajo asalariado en Bolivia 1950-2002: tendencias y dimensiones de género* (La Paz: REMTE) Cuaderno de Trabajo N° 2.
- Escóbar de Pabón, Silvia 2002 *Condicionalidad externa y desarrollo: evaluando la EBRP* (La Paz: CEDLA) Documentos de Coyuntura N° 5.
- EBRP-Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza* 2001 (La Paz: Ministerio de Hacienda).
- Fernández, Mario 1989 “Las políticas sociales en el Cono Sur, 1975-1985” en *Análisis de sus determinantes políticas y socioeconómicas* (Santiago) Cuadernos del ILPES N° 34.
- FMI-Fondo Monetario Internacional 1999 “The poverty reduction and growth facility (PRGF)-Operational issues” en <www.imf.org/external/np/pdr/poverty>.
- García, Brigida y Oliveira, Orlandina 1998 *Trabajo femenino y vida familiar en México* (México DF: El Colegio de México).
- González de la Rocha, Mercedes 1986 *Los recursos de la pobreza. Familias de bajos ingresos en Guadalajara* (Guadalajara: El Colegio de Jalisco/CIESAS/Secretaría de Programación y Presupuesto).
- González de la Rocha, Mercedes 1996 “Private adjustments: household responses to the erosion of work”, Conference Paper Series, UNDP/SEPED, Nueva York.

- INE-Instituto Nacional de Estadística 1989 *Encuesta integrada de hogares y Manual del encuestador* (La Paz: INE).
- INE-Instituto Nacional de Estadística 1990 *Bolivia. Resultados de la encuesta de presupuestos y gastos familiares* (La Paz: INE).
- INE-Instituto Nacional de Estadística 1993 *Resultados del censo nacional de población y vivienda 1992* (La Paz: INE).
- Kanbur, Ravi 2001 "Economic policy, distribution and poverty: the nature of disagreements", Cornell University, Documento de Trabajo.
- Katz, Claudio 2000 "La teoría del control patronal: balance de una discusión", III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo "El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI", Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Lépre, Silvia y Salvia, Agustín 2002 *Segmentación socio-ocupacional y precariedad del bienestar en los hogares* (Buenos Aires: Instituto para la Integración del Saber/Departamento de Investigación Institucional-UCA).
- Lomnitz, Larissa 1978 *¿Cómo sobreviven los marginados?* (México DF: Siglo XXI).
- Lomnitz, Larissa 1994 *Redes sociales, cultura y poder: ensayos de antropología latinoamericana* (México DF: FLACSO).
- Lucena, Héctor 2000 "El cambio en las relaciones industriales en América Latina" en De La Garza, Enrique (comp.) *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo* (México DF: El Colegio de México/FLACSO/UAM/FCE).
- Marshall, Adriana 2000 *Labor markets under the liberalization model: policy outcomes* (San José: FLACSO/SSRC).
- Mezzer, Jaime 1988 "Excedente de oferta de trabajo y sector informal urbano" en Berger, M. y Buvinic, M. (orgs.) *Mujer en el sector informal* (Quito: ILDIS).
- Ministerio de Hacienda 2000 *Operaciones consolidadas del sector público no financiero* (La Paz: Unidad de Programación Fiscal).
- Montali, Lilia 2000 "Trabalho e familia: reestruturação produtiva e mudanças na divisão sexual do trabalho nos anos 90", III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo "El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI", Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.

- Montgomery, David 1985 *El control obrero en Estados Unidos: estudios sobre la historia del trabajo, la tecnología y las luchas obreras* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
- OIT-Organización Internacional del Trabajo 1999 *Panorama laboral, América Latina y el Caribe* (Lima: Oficina Regional para América Latina y El Caribe).
- OIT-Organización Internacional del Trabajo 2002 *Panorama laboral, América Latina y el Caribe* (Lima: Oficina Regional para América Latina y El Caribe).
- Pérez Sainz, Juan Pablo 2003 “Exclusión laboral en América Latina: viejas y nuevas tendencias” en *Sociología del Trabajo* (Madrid: Siglo XXI) Nueva Época N° 47.
- PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1993 *Informe sobre desarrollo humano* (Madrid: PNUD-CIDEAL).
- PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2002 *Informe sobre desarrollo humano* (Madrid: PNUD-Mundi Prensa).
- Rodrik, Dani 2002 “After neoliberalism: economic policies that work for the poor”, Conference on Alternatives to Neoliberalism, Washington DC, 23 de mayo.
- Salvia, Agustín 1995 “La familia y los desafíos de su objetivación: enfoques y conceptos” en *Estudios Sociológicos* (México DF) N° 37.
- Salvia, Agustín 2002 *La estructura social del trabajo en Argentina: desempleo, subempleo y precariedad laboral* (Buenos Aires: Instituto para la Integración del Saber/Departamento de Investigación Institucional-UCA).
- Salvia, Agustín y Ticera, Silvana 2000 “Heterogeneidad y precarización de los hogares asalariados en Argentina durante la década del 90”, III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “El Trabajo en los Umbrales del Siglo XXI”, Buenos Aires, 17 al 20 de mayo.
- Sen, Amartya 1992 “Sobre conceptos y medidas de pobreza” en *Comercio Exterior* (México DF) Vol. 42, N° 4.
- Standing, Guy 1999 *Global labour flexibility: seeking distributive justice* (Nueva York: St. Martin’s Press).
- UDAPE-Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 1998 *Bolivia: gasto social y la iniciativa 20/20* (La Paz: UDAPE-PNUD).

- Vigorito, Andrea 2002 “Algunos comentarios sobre las comparaciones de pobreza entre países” en *Informe Social Watch 2003. Los pobres y el mercado* (Montevideo: Obra).
- Vilas, Carlos 1996 *Estado y políticas sociales después del ajuste: debate y alternativas* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Wainerman, Catalina y Geldstein, Rosa 1994 “Viviendo en familia: ayer y hoy” en Wainerman, Catalina (comp.) *Vivir en familia* (Buenos Aires: UNICEF/Losada).
- Wéller, Jurgén 2000 “Tendencias del empleo en los años 90 en América Latina y El Caribe” en *Revista de la CEPAL* (Santiago) N° 72.

OTRAS PUBLICACIONES DE CLACSO

- **Suárez Salazar y García Lorenzo**
Las relaciones interamericanas: continuidades y cambios
- **OSAL N° 24**
Movimientos sociales: Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay
Revista del Programa del Observatorio Social de América Latina
de CLACSO
- **López Maya, Iñigo Carrera y Calveiro [eds.]**
Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes
de América Latina
- **Devés-Valdés**
O pensamento africano sul-saariano
Conexões e paralelos com o pensamento latino-americano e o asiático
(um esquema)
- **Problemas del Desarrollo Vol. 3 N° 5**
Revista Latinoamericana de Economía
- **Novick [comp.]**
Las migraciones en América Latina
Políticas, culturas y estrategias

- **Mészáros**
El desafío y la carga del tiempo histórico
El socialismo en el siglo XXI
- **Modak** [coord.]
Salvador Allende. Pensamiento y acción
- **Svampa**
Cambio de época
Movimientos sociales y poder político
- **Fernandes**
Dominación y desigualdad: el dilema social latinoamericano
- **Chatterjee**
La nación en tiempo heterogéneo
Y otros estudios subalternos
- **Mariátegui**
Sete ensaios de interpretação da realidade peruana
- **Cheresky**
Poder presidencial, opinión pública y exclusión social
- **Lechini** [coord.]
Globalization and the Washington Consensus
Its influence on democracy and development in the South
- **Martínez Franzoni**
¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en América Central
- **Levy y Gianatelli** [comps.]
La política en movimiento
Identidades y experiencias de organización en América Latina
- **Frías Fernández**
Desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI
- **Crítica y Emancipación N° 1**
Revista latinoamericana de ciencias sociales de CLACSO
- **Murillo**
Colonizar el dolor
La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina
El caso argentino desde Blumberg a Cromañón

- **Roitman Rosenmann**
Pensar América Latina
El desarrollo de la sociología latinoamericana
- **Lechini** [comp.]
Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina
Herencia, presencia y visiones del otro
- **Moyo y Yeros** [coords.]
Recuperando la tierra
El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina
- **Espina Prieto**
Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad
Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana
- **Cimadamore** [comp.]
La economía política de la pobreza
- **Gadotti, Gomez, Mafra y Alencar** [comps.]
Paulo Freire: contribuciones para la pedagogía
- **Alonso** [comp.]
América Latina y el Caribe
Territorios religiosos y desafíos para el diálogo
- **Svampa y Stefanoni** [comps.]
Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales
- **Socialist Register 2006**
Diciendo la verdad
- **Kliksberg y Rivera**
El capital social movilizado contra la pobreza
La experiencia del Proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico
- **Terán**
Las quimeras y sus caminos
La gobernanza del agua y sus dispositivos para la producción de pobreza rural en los Andes ecuatorianos
- **Girón y Correa** [coords.]
Del Sur hacia el Norte
Economía política del orden económico internacional emergente

- **Hoyos Vásquez** [comp.]
Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía
- **Robichaux** [comp.]
Familia y diversidad en América Latina
Estudios de casos
- **Monasterios, Stefanoni y Do Alto** [eds.]
Reinventando la nación en Bolivia
Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad
- **Marini**
Proceso y tendencias de la globalización capitalista
Y otros textos
- **Gutiérrez** [comp.]
Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades
Desafíos para la investigación política
- **Wortman**
Construcción imaginaria de la desigualdad social
- **Grimson** [comp.]
Cultura y neoliberalismo
- **Cimadamore e Cattani** [orgs.]
Produção de pobreza e desigualdade na América Latina
- **Sánchez Vázquez**
Filosofia da práxis
- **Júnior, Pombo de Oliveira e Daflon** [orgs.]
Guia bibliográfico multidisciplinar
Ação afirmativa. Brasil: África do Sul: Índia: EUA
- **Brandão** [org.]
Costas raciais no brasil
A primeira avaliação
- **Petrucelli**
A cor denominada
Estudos sobre classificação étnico-racial
- **Dussel**
20 teses de política

- **Gandáségui, h.** [coord.]
Crisis de hegemonía de Estados Unidos
- **Mato y Maldonado Fermín** [comps.]
Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización
Perspectivas latinoamericanas
- **Chatterjee**
La nación en tiempo heterogéneo
y otros estudios subalternos
- **González** [ed.]
Nación y nacionalismo en América Latina
- **Vidal y Guillén R.** [coords.]
Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización
Homenaje a Celso Furtado
- **Geraiges de Lemos, Silveira e Arroyo** [orgs.]
Cuestões territoriais na América Latina
- **Geraiges de Lemos, Silveira e Arroyo** [orgs.]
América Latina: cidade, campo e turismo
- **Vessuri** [comp.]
Universidad e investigación científica
Convergencias y tensiones
- **Nómadas Nº 25**
Conocimiento y experiencia de sí
- **López Segrera**
Escenarios mundiales de la educación superior
Análisis global y estudios de casos
- **Cornejo** [comp.]
En los intersticios de la democracia y el autoritarismo
Algunos casos de Asia, África y América Latina
- **Cimadamore, Dean, Siqueira** [orgs.]
A pobreza do Estado
Reconsiderando o papel do Estado na luta contra a pobreza global
- **Beigel et al.**
Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano

- **Babini y Fraga** [comps.]
Edición electrónica, bibliotecas virtuales y portales para las ciencias sociales en América Latina y el Caribe
- **Boron, Amadeo y González** [comps.]
La teoría marxista hoy
Problemas y perspectivas
- **Gadotti, Gomez y Freire** [comps.]
Lecciones de Paulo Freire
Cruzando fronteras: experiencias que se completan
- **Basualdo y Arceo** [comps.]
Neoliberalismo y sectores dominantes
Tendencias globales y experiencias nacionales
- **Cordero Ulate**
Nuevos ejes de acumulación y naturaleza
El caso del turismo
- **Cimadamore, Eversole y McNeish** [coords.]
Pueblos indígenas y pobreza
Enfoques multidisciplinarios
- **Sousa Santos**
Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social
[Encuentros en Buenos Aires]
- **González Casanova**
Sociología de la explotación
[Nueva edición corregida]
- **Caetano** [comp.]
Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina
- **Boron** [comp.]
La filosofía política moderna
De Hobbes a Marx
- **Elías** [comp.]
Los gobiernos progresistas en debate
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay

- **Girón** [coord.]
Confrontaciones monetarias: marxistas y post-keynesianos en América Latina
- **Plotkin**
La privatización de la educación superior y las ciencias sociales en Argentina
Un estudio de las carreras de Psicología y Economía
- **Mirza**
Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina
La construcción de nuevas democracias
- **Lechini**
Argentina y África en el espejo de Brasil
¿Política por impulsos o construcción de una política exterior?
- **Correa y Girón** [coords.]
Reforma financiera en América Latina
- **Lubambo, Coêlho y Melo** [orgs.]
Diseño institucional y participación política
Experiencias en el Brasil contemporáneo
- **Boron y Lechini** [comps.]
Política y movimientos sociales en un mundo globalizado
Lecciones desde África, Asia y América Latina
- **Boron** [comp.]
Filosofía política contemporánea
Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía
- **Alimonda** [comp.]
Los tormentos de la materia
Aportes para una ecología política latinoamericana
- **Grammont** [comp.]
La construcción de la democracia en el campo latinoamericano
- **Ceceña** [coord.]
Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado
- **Fernández Retamar**
Pensamiento de nuestra América
Autorreflexiones y propuestas

Se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2008
en Gráficas y Servicios SRL
Santa María del Buen Aire 347, Buenos Aires
Primera edición, 1.500 ejemplares

Impreso en Argentina